



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

24ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ESPECIAL

12 DE FEBRERO DE 2015

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**, y del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador don **RUPERTO EDUARDO GODOY**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor don **LUIS BORSANI**, señor don **MARIO DANIELE** y señor don **JOSÉ LEPERE**



PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
 AGUILAR, Eduardo Alberto
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
 BARRIONUEVO, Walter Basilio
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BERMEJO, Rolando Adolfo
 BERTONE, Rosana
 BLAS, Inés Imelda
 CABRALARRECHEA, Salvador
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CREXELL, Lucila
 DE LA ROSA, María Graciela
 DI PERNA, Graciela Agustina
 FELLNER, Liliana Beatriz
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GARRAMUÑO, Jorge Alberto
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela
 GODOY, Ruperto Eduardo
 GONZÁLEZ, Pablo Gerardo
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
 HIGONET, María de los Ángeles
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LABADO, María Esther
 LATORRE, Roxana Itatí
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LUNA, Mirtha María Teresita
 MANSILLA, Sergio Francisco
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 ODARDA, María Magdalena
 PEREYRA, Guillermo Juan

PÉRSICO, Daniel Raúl
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROJÉS de ALPEROVICH, Beatriz Liliana
 ROLDÁN, José María
 ROMERO, Juan Carlos
 URTUBEY, Rodolfo
 ZAMORA, Gerardo

AUSENTES CON AVISO:

ARTAZA, Eugenio Justiniano
 BORELLO, Marta Teresita
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CIMADEVILLA, Mario Jorge
 DE ANGELI, Alfredo
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor
 JUEZ, Luis Alfredo
 LINARES, Jaime
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
 MEABE, Josefina Angélica
 MENEM, Carlos Saúl
 MICHETTI, Marta Gabriela
 MONLLAU, Blanca María del Valle
 MONTERO, Laura Gisela
 MORALES, Gerardo Rubén
 MORANDINI, Norma Elena
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 ROZAS, Ángel
 SANTILLI, Diego
 SANZ, Ernesto Ricardo
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 VERNA, Carlos Alberto

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo convocando a sesiones extraordinarias.** (Pág. 3.)
3. **Fijación de días y hora de sesiones extraordinarias.** (Pág. 3.)
4. **Creación de la Agencia Federal de Inteligencia.** (O.D. N° 952/14.) (Pág. 3.)
5. **Homenaje al fiscal Alberto Nisman.** (Pág. 3.)
6. **Creación de la Agencia Federal de Inteligencia.** (O.D. N° 952/14.) (Continuación.) (Pág. 5.)
7. **Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.** (Pág. 30.)

II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la

República de Chile, relativo al proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”. (O.D. N° 953/14.)

II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile, relativo a la Entidad Binacional para el proyecto “Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino Central”. (O.D. N° 954/14.)

8. **Fijación de día y hora de la sesión preparatoria.** (Pág. 32.)
9. **Apéndice:**

I. **Convocatorias.** (Pág. 33.)

II. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 34.)

III. **Actas de votación.** (Pág. 105.)

IV. **Inserciones.** (Pág. 107.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 14 del jueves 12 de febrero de 2015:

Sr. Presidente. — Como hay quórum, queda abierta la primera sesión extraordinaria.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador Fuentes a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Marcelo Fuentes procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(*Aplausos.*)

2

MENSAJE Y DECRETO DEL PODER EJECUTIVO CONVOCANDO A SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. — Se incorporarán en el Día-río de Sesiones el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias y el decreto dictado por esta Presidencia en tal sentido.¹

3

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. — Corresponde fijar días y hora de las sesiones extraordinarias.

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: como es habitual, solicito que sean los días miércoles y jueves.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado por unanimidad.²

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

4

CREACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (O.D. N° 952/14)

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo número 431/14, por el que se crea la Agencia Federal de Inteligencia.

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Fuentes...

5

HOMENAJE AL FISCAL ALBERTO NISMAN

Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pido la palabra en nombre del Interbloque Federal porque queremos rendir un homenaje al recientemente fallecido fiscal federal Nisman.

Creemos que el Parlamento no puede iniciar una sesión omitiendo un hecho luctuoso que ha conternado a la República Argentina; un hecho luctuoso que nos ha hecho llorar a los argentinos y que ha teñido de miedo la vida de los argentinos.

¿Por qué ha sucedido esto? Porque el fiscal Nisman era, nada más y nada menos, el fiscal federal que había denunciado a la presidenta de la Nación. Entonces, era el hombre argentino que más cuidado debió estar para que el Poder Ejecutivo garantizara a toda la ciudadanía argentina la libertad, la transparencia y el ejercicio democrático de las instituciones.

El fiscal Nisman era toda una autoridad en el Poder Judicial. Hijo de una familia judía, hizo sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La mayor parte de sus materias fueron dadas en forma libre y egresó con un promedio de ocho. Ingresó a la justicia de Morón y posteriormente fue profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano. Posteriormente, por un compromiso que asume nuestro gobierno nacional de investigar el atentado contra la AMIA, es designado fiscal a cargo de la investigación del acto terrorista de la AMIA.

La acusación por encubrimiento es precisamente por no haberse profundizado la investigación de la causa Siria, de la denominada línea o pista Siria. Hoy estamos frente a una denuncia que deberá tener su trámite en el marco de la justicia federal y que ya tiene un juez a su cargo, el doctor Rafecas. Esperemos que haya una investigación a fondo sobre los argumentos utilizados en la línea del encubrimiento con el estado iraní. La verdad es que cuando nosotros votamos el memorándum aquí, en este recinto, lo hicimos convencidos de que era un camino, una alternativa, para destrabar una causa que estaba paralizada en la Justicia argentina porque no se podía tomar indagatoria a los imputados por parte del fiscal y del juez doctor Canicoba Corral; una alternativa en un delito complejo, en un acto de terrorismo internacional, con un país que se negaba a detener a los imputados y a enviarlos a la Argentina. Y lo que intentó la presidenta fue buscar un camino, una opción, desde el punto de vista de encontrar la verdad, porque siempre fue eso lo que propició.

Este es un gobierno que ha hecho mucho por esta causa. A mí me parece muy injusto que se la agravie en el mundo acusándola de encubrimiento. Pero, bueno, en orden a la cuestión central, que es, precisamente, saber qué pasó con la verdadera víctima, que es el fiscal Nisman, nosotros creemos que la Justicia tiene un gran desafío; esta Justicia argentina que actúa muchas veces con lentitud.

Sinceramente, yo no puedo dejar de analizar como abogado algunas cosas que han pasado en el proceso de investigación. ¿Por qué el primer día no se envió una circular al Banco Central para ordenar e informar debida y detenidamente si había cuentas, cajas de seguridad, a nombre del fiscal? Se tardaron quince días en hacer un allanamiento a una caja de seguridad. En esa caja, que estaba vacía, había ingresado un familiar, que a lo mejor lo hizo con toda la buena fe, pero podría haber habido elementos. ¡Tarde, siempre tarde!

Hoy estaba mirando con sorpresa –y digo esto asumiendo también el proceso de auto-crítica que debemos hacer como parte de las instituciones argentinas– que se vuelve a hacer una visión ocular en el ámbito del departamento donde ocurrió el hecho, que sucedió hace casi veinticinco días. Nosotros creemos que por el

bien del país, por el bien de la República, por el bien del gobierno, de nuestra presidenta, de nuestro gobierno, de la credibilidad de las instituciones, es fundamental conocer qué es lo que pasó y tener en esto certeza y claridad, y que esta muerte no quede en la penumbra, en la oscuridad, en el marco de otras muertes dudosas de la vida del país.

Así que con estas palabras estamos brindando también este reconocimiento y adherimos a lo que pidió la senadora.

Sr. Presidente. – Con esta adhesión vamos a pasar a hacer un minuto de silencio.

–Puestos de pie los presentes, así se hace.

Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias a todos.

6

**CREACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL
DE INTELIGENCIA
(O.D. N° 952/14)
(Continuación)**

Sr. Presidente. – Pasamos a escuchar las palabras del senador Fuentes para comenzar con el debate del tema del orden del día.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: venimos a considerar el proyecto remitido por el órgano ejecutivo de creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Primero, en torno a la mecánica de lo que va a ser el informe que vamos a elaborar, vamos a compartirlo con el senador Guastavino, quien va a desarrollar los aspectos que hacen a la punibilidad, a las modificaciones de las figuras penales que la ley conlleva, y el senador jefe de bloque, Miguel Pichetto, al cierre del debate, va a hacer la aclaración pertinente sobre las modificaciones que se han introducido en el dictamen que elaboráramos la semana pasada.

Primero, quiero agradecer, en torno al trabajo de la comisión, los aportes que distintas instituciones realizaron, en particular el aporte del senador Marcelo Guinle y del diputado Santín, de la Unión Cívica Radical. Y quiero comenzar explicando que no venimos a sancionar una nueva ley de inteligencia, sino que la propuesta consiste en una reforma de la norma existente.

Esta exposición va a tratar cinco aspectos: primero, los antecedentes que motivan esta decisión; segundo, la experiencia histórica vivida por el pueblo argentino respecto de estas cues-

tiones; tercero, la necesidad de una inteligencia nacional acorde a los desafíos geopolíticos que hoy el mundo ofrece a la inserción de la Argentina; cuarto, las desviaciones que sufrió el sistema existente en esa experiencia histórica; y quinto, el análisis del texto propuesto.

Fundamentalmente es necesario remontarse en el tiempo. Y hoy, que solemos hablar de globalizaciones con tamaño intensidad, hasta la existencia del Consenso de Washington, el mantenimiento del statu quo por parte de los Estados nacionales estaba sujeto a decisiones nacionales y a fuerzas armadas nacionales. Es el Consenso de Washington, la Doctrina de la Seguridad Nacional y, sobre todo, la tristemente célebre Escuela de las Américas, en Panamá, que establecen la globalización de un criterio de contra insurgencia en la inteligencia de los estados subordinados a ese esquema.

Es así que toda disconformidad popular, todo intento de reforma del sistema político imperante, automáticamente se lo clasifica en orden a la insurgencia revolucionaria y sus servicios de inteligencia operan bajo la dirección de las centrales interesadas en el mantenimiento a escala global de esta situación.

No hace falta recordar acá la conducta del Departamento de Estado ni la de los servicios de inteligencia norteamericanos en el mantenimiento de cuanta dictadura genocida en América Latina existió en ese período histórico.

Ese proceso generó el saldo luctuoso del cual estamos lentamente recuperándonos. Y hay generaciones enteras, representadas por 30.000 desaparecidos, consecuencia de esta doctrina de seguridad nacional, que atestiguan y ameritan lo que fue un largo proceso de discusión a partir del recupero de la democracia en el año 83. Esa experiencia histórica hizo sentir la profunda necesidad de separar con absoluta claridad los conceptos de defensa nacional y de seguridad interior.

En aras de ese criterio, producto del acuerdo de las fuerzas políticas después del año 83, debo recordar el dictado de las leyes 23.554, de defensa nacional, y 24.059, de seguridad interior. La ley posterior, 25.520, que hoy proponemos reformar, está íntimamente vinculada, atento que la materia, la sustancia que justifica esa inteligencia es, precisamente, la defensa nacional y la seguridad interior, es decir, la defensa de

la Nación y, fundamentalmente, la seguridad de los ciudadanos y de sus derechos.

Posteriormente, con motivo de la reforma del año 94, que incorpora con rango de norma los tratados internacionales, en particular los de los derechos humanos, resulta más que nunca necesario adecuar la ley al encuadre constitucional, legal y funcional que venimos a proponer en el proyecto que remitió el órgano ejecutivo: la subordinación de la actividad al marco de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, de la defensa de los derechos humanos.

Una reforma de una ley puede darnos garantías en torno al control y a la transparencia de una actividad, pero no necesariamente va a dar resultados respecto de la materia que produzca. Creo que hoy nadie puede, a conciencia y con honestidad, desconocer la existencia de cuestiones centrales producidas en los últimos años, que ameritan la necesidad de que el Estado nacional cuente con una capacidad de producir inteligencia de manera autónoma en el marco del respeto a la Constitución y a los tratados internacionales que garantizan los derechos de todos los argentinos. Por un lado, el cambio de ubicación de la Argentina en la consideración internacional y en el juego de los complejos intereses que se desarrollan, fundamentalmente, en torno a dos cuestiones centrales, a mi modo de ver. La primera, las fuentes de recursos energéticos. La dimensión que ha adquirido el conocimiento no sólo de las potencialidades, sino de la verdadera significación de los reservorios energéticos argentinos en lo que se denomina hidrocarburos no convencionales, pone hoy a la Argentina en el escenario con las segundas reservas más importantes del mundo en materia de gas y tercera con respecto a los recursos petrolíferos, con cuestiones que son centrales a para esa explotación: la ubicación de los recursos y el acceso a las aguas necesarias para su producción sin compromiso ambiental. Y basta ver hoy en el diseño del escenario internacional cómo esa conflictividad en torno a la apropiación de recursos estratégicos define políticas e inteligencias nacionales de las principales potencias del mundo. Éste es el primer punto.

El segundo punto es, fundamentalmente, la toma de conciencia de la necesidad de defender la renegociación soberana de nuestra deuda. Basta leer los diarios y ver las operaciones

que se realizan para darse cuenta de que esta pretensión de hacer caer esa renegociación, volviendo todo al estado anterior, es un elemento de presión continuo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se llevan adelante en complicidad con esas llamadas “fuerzas de tareas” de los fondos buitres.

Estos dos escenarios, que son incontrastables, hoy ponen en urgencia la necesidad de contar con la capacidad de elaborar una inteligencia nacional que, con la diferenciación clara de lo que son las cuestiones de defensa en torno a la agresión exterior –no solo respecto del lugar de donde provienen, sino, fundamentalmente, como bien la Ley de Defensa Nacional establecía, cuando son agresiones exteriores de ejércitos organizados– y, por otro lado, a la seguridad interior de los habitantes de la Argentina y el respeto y la garantía de sus derechos, obliga fundamentalmente a redefinir un montón de cuestiones. En este juego de armonización de las dos leyes, de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, está precisamente la cuestión clave que esta ley pretende resolver hoy.

Es evidente, como lo remite en el acompañamiento del proyecto el órgano ejecutivo, que un compromiso profundo de este gobierno ha sido la lucha por la verdad en torno a los crímenes aberrantes de lesa humanidad, tanto, producto de esa doctrina de seguridad interior como, fundamentalmente, de los atentados brutales y criminales que hemos sufrido ya hace tiempo. Esto ha llevado a innumerables esfuerzos. El fiscal a quien hoy rendíamos un minuto de silencio –nuestra solidaridad con su familia– fue designado por el ex presidente Néstor Kirchner al frente de esta investigación.

La cuestión central en la conflictividad que mencionaba el senador Pichetto respecto de la naturaleza verdadera de la denuncia formulada por él, a mi modo de ver, debe encontrarse en el punto en que una investigación autónoma de la Justicia argentina, que consiste en la recopilación de pruebas a los efectos de determinar la responsabilidad en torno a la autoría de ese brutal atentado, pasa a transformarse en algún momento en un escenario de operaciones de inteligencia y de contrainteligencia donde se desarrollan las más variadas hipótesis sin el acompañamiento de prueba alguna. Este es el punto central para el debate de lo que viene.

Manifiesta la señora presidenta, en esa vocación irrenunciable de obtener la verdad para poder lograr justicia de la manera como se realizó con la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, en función, precisamente, de ese imperativo irrenunciable que está en lo más profundo de nuestras convicciones, que esa investigación, estancada durante décadas, operaba con servicios extranjeros y fue desarrollada en función de intereses de campaña política. Allí incluyo –y me hago cargo de lo que digo– la denuncia recientemente conocida, cuando en escasos meses va a comenzar el juicio en torno al verdadero encubrimiento de ese atentado, donde están señalados los responsables y están esperando ser llevados a juicio.

Cuando la señora presidenta, en su discurso en la Asamblea Legislativa, habló de que no le temblaba la mano para tratar de averiguar la verdad por respeto a las víctimas del atentado, a sus familias y a todos nosotros, los argentinos, estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de cooperación judicial con la República Islámica de Irán, e inmediatamente las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de servicios extranjeros –que tienen claros intereses en ese diagrama de conflictividad que determinan hoy los reservorios hidrocarburíferos, sobre todo de Oriente Medio– comenzaron a desarrollarse desde adentro de la propia central de inteligencia nacional –en abierta desobediencia a lo que es la conducción de la inteligencia nacional, a cargo de la señora presidenta– toda una serie de operaciones que culmina, precisamente, con la declaración de inconstitucionalidad de un convenio de cooperación ejercido en el marco de las atribuciones propias de la división de poderes en la Argentina, y avalado por una ley dictada en el marco de las atribuciones propias del Congreso Nacional, con su declaración parcial de inconstitucionalidad a la espera de resolución final. Es decir que el compromiso lleva a tener el coraje de tomar la decisión de comenzar a generar un marco que posibilite, atento a la existencia de restricciones legislativas iraníes en torno a la posibilidad de tomar la declaración correspondiente a los imputados hasta ese momento en esa causa.

No voy a abundar más en esto. Simplemente voy a señalar la existencia de intereses muy claros de ciertas potencias y de ciertos servicios de

inteligencia en esta cuestión que ha desbordado, por lejos, la injerencia de nuestra inteligencia nacional. Esta necesidad de resolver la cuestión lleva a la señora presidenta a ordenar la intervención de la Secretaría de Inteligencia, descabezando a su conducción. Y, fundamentalmente, nos trae al escenario de la discusión lo que ella define como una deuda no sólo de los partidos políticos como principales responsables, sino también de la democracia, que era precisamente la adecuación en función de ese arrastre histórico que mencionaba como consecuencia de doctrinas externas y ajenas a la Argentina, y, fundamentalmente, por la experiencia del funcionamiento interno, de esas lacras que arrastraba el sistema de inteligencia. Es decir, no sólo es necesario dotar de transparencia, no sólo es necesario generar las garantías de que no se generen las vinculaciones espurias entre cuentapropistas que trabajan adentro, sectores del Poder Judicial, sectores económicos y de intereses concentrados. También es fundamental tener en cuenta que en la reformulación de esta ley, con la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, es necesario dotar a la Nación del conjunto de herramientas que posibilite la genuina obtención de inteligencia en función de intereses genuinos nacionales y no por subordinación a los dictados de otras potencias. Esto es central para comenzar a entender de qué estamos hablando.

En el marco de este profundo esfuerzo, la señora presidenta, a costa de soportar las campañas que hoy están en curso respecto de ese memorándum de entendimiento, dispuso un nuevo esquema normativo para el desenvolvimiento de las tareas de inteligencia en la Argentina. Se fijan pautas claras y concretas respecto de la importancia de esa inteligencia nacional para la defensa de nuestro país, su seguridad interior y la defensa nacional, claramente diferenciadas una respecto de la otra en el marco de la Constitución y de los tratados internacionales. Se refuerzan las prohibiciones de actuación interna de los organismos de inteligencia y se limita con mayores garantías la actuación en investigaciones criminales.

Cuando los representantes del CELS manifestaron sus preocupaciones en el plenario de comisiones, al que la oposición no concurrió, en un momento en que era necesario dar este

debate..., recuerdo que la oposición, por un lado, solicitaba la presencia del secretario de Inteligencia en otras comisiones y, cuando el secretario de Inteligencia vino a la casa de las leyes, a la casa federal de las leyes, la oposición no estuvo presente para preguntar cuestiones vinculadas con el traslado presupuestario y de personal, o cómo va a ser esa adecuación de la nueva agencia con los recursos humanos que vienen de arrastre. Ésas eran las preguntas para formular en ese momento, pero la oposición no estuvo presente. Claramente, en ese debate los organismos plantearon dos cuestiones. Ellos decían que en la experiencia del desvío de las finalidades de la inteligencia había dos canales conductores. El primero era la investigación criminal, es decir, cómo se generaba un sistema de vinculación espurio entre magistrados, fiscales y agentes de inteligencia. Y el segundo canal era a través de la injerencia de la inteligencia estratégica militar en las cuestiones que hacen a la seguridad interior. Esto era, fundamentalmente, lo que era necesario eliminar.

Hemos comenzado en este proyecto estableciendo que la cabeza del sistema nacional de inteligencia es la Agencia Federal de Inteligencia. Esa Agencia Federal de Inteligencia dirige y coordina el trabajo de la totalidad de los subsistemas de inteligencia existentes, tanto el de investigación, la inteligencia criminal, que sigue estando en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como el de la inteligencia estratégica militar. Lo que sí se hace en función de esto es someter, en el marco del control democrático de las autoridades, a esas actividades de inteligencia, fundamentalmente a la cabeza de conducción —la Agencia Federal de Inteligencia—, a un director y a un subdirector, los cuales requieren también de acuerdos del Senado. En ese sentido, recuerdo también que entre las tareas de desinformación a las cuales alegremente algunos sectores de la oposición se prestaron sin siquiera haberse tomado la molestia de leer la ley, decían que el acuerdo del Senado pretendía darles estabilidad a aquellos funcionarios que se designaran para poder ser funcionarios del nuevo gobierno, cuando bastaba leer el renglón que seguía, que decía que el director y el subdirector eran removibles a simple decisión del órgano ejecutivo. Por lo tanto, esos canales de contacto que generaron las agencias, el cuen-

tapropismo que generó la actividad ilícita de agentes que trabajaban de manera autónoma en esa atomización sin rendiciones de cuenta a nadie, se corta con absoluta claridad en este proyecto cuando se establece la preeminencia, la conducción de la agencia Federal y de los tres subsistemas; y fundamentalmente cuando, respecto de la excepcionalidad de la investigación criminal, se mantiene la inteligencia criminal en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero en aquellas amenazas que conforman estas formas delictuales de complejidad, delitos federales de complejidad, la agencia tiene la facultad de requerir el traspaso del personal y de los recursos necesarios, sin que desaparezca a los efectos de la investigación concreta.

Y el segundo canal, que era precisamente la connivencia sin control de fiscales, jueces y agentes de inteligencia, se soluciona claramente cuando la inteligencia criminal en torno al desenvolvimiento como auxiliar de la Justicia es excepcional. Debe ser por resolución judicial fundada, y, fundamentalmente, se incorpora como garantía que esa investigación que se haga debe estar sujeta a las leyes de procedimiento. Esto es ya un avance, para no encontrarnos con el “pescado podrido” o las “verduras” que se vendían como investigaciones, cuando, en realidad, eran simples operaciones de inteligencia. Van a trabajar excepcionalmente y sujetos a las claras restricciones que establecen las leyes del debido proceso.

Sr. Presidente. – Senador, le recuerdo que usted va a compartir el tiempo con otro colega. Por favor...

Sr. Fuentes. – Sí, señor.

Se fija un claro límite a las actividades de inteligencia interior, “direccionándolas” exclusivamente a la producción de información para la prevención de delitos federales complejos, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, delito informático, criminalística, criminalidad económica y financiera y atentados contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Se somete a las áreas de inteligencia de todas las fuerzas. Es decir, que los grupos de inteligencia de la Policía Federal, los grupos de inteligencia del Sistema Penitenciario Nacional, los grupos de inteligencia de la Prefectura, los grupos de inteligencia de la Policía

de Seguridad Aeroportuaria y cuanto grupo de inteligencia existiera quedan sometidos al marco que establece esta ley.

Se castigan severamente las actividades de inteligencia prohibidas, las interceptaciones y escuchas ilegales, las tareas de inteligencia sin autorización de las autoridades. Hemos modificado el dictamen con respecto al plazo que existía.

Inmediatamente que se inicie una tarea de inteligencia se deberá dar comunicación a las autoridades responsables del subsistema y a las autoridades responsables de la conducción del sistema.

Se modifican los sistemas de clasificación de la documentación de seguridad, y se lo hace, fundamentalmente, en torno a los criterios de transparencia. Y el establecimiento de la transparencia no sólo en la actividad que despliegan hoy los agentes sino, fundamentalmente, en la obligación de rendir cuentas posteriores una vez que cesan en su actividad.

Se adecuan las actividades de los organismos de inteligencia a la ley 23.326, de protección de datos personales; se configura el Banco de Protección de Datos y, fundamentalmente, se modifican los criterios de control parlamentario de los fondos existentes. Es decir: la norma general era la reserva de esos fondos en torno a la posibilidad de auditarlos. Hoy, por orden de la señora presidenta, eso se invierte y los fondos son públicos y las reservas son excepcionales en función de –lógicamente– aquellas operaciones de inteligencia que requieren la salvaguarda y la discreción necesaria al respecto.

Hemos avanzado con esta reforma sin apartarnos de lo que era la experiencia histórica nacional, lo que era el compromiso de las distintas fuerzas políticas y, sobre todo, la llaga de la memoria en torno a los horrores de la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, una clara separación de las áreas que corresponden. La defensa nacional, como el conjunto de los recursos en defensa de la Nación ante la agresión externa, y la seguridad interior reservada a las actuaciones de las policías correspondientes.

Esto genera un salto cualitativo y precisamente en función de las críticas que recibimos. Es decir, nos hacemos cargo de las demoras con respecto a cuestiones que probablemente

deberían haber sido resueltas con anterioridad. Nos hacemos cargo porque, en función del concepto de acumulación en la política y resolución de esos problemas, la señora presidenta, todas las veces que fue necesario, ha tomado decisiones a pesar de los costos eventuales que una oposición carente de propuestas y negada a discutir lo que son los programas de gobierno a llevar adelante en las próximas elecciones, recurre, en una renuncia objetiva a una agenda autónoma, a una agenda propia, subordina su agenda a aquéllas que le indican precisamente quienes hoy desarrollan la mayor cantidad de inteligencia ilegal en la Argentina.

La inteligencia que el aparato estatal realiza...

Sr. Rodríguez Saá. – Señor senador: no generalice.

Sr. Fuentes. – Ya termino...

Sr. Rodríguez Saá. – Pero no generalice.

Sr. Presidente. – Por favor, senador...

Sr. Fuentes. – No generalizo. Con el respeto a...

Sr. Presidente. – ¿Quiere pedir una interrupción?

Sr. Rodríguez Saá. – Sí.

Sr. Presidente. – Le pide una interrupción.

Sr. Fuentes. – ¿Me permite terminar y lo dejo?

Sr. Rodríguez Saá. – Sí.

Sr. Fuentes. – Entonces, fundamentalmente, en la Argentina se realizan actividades ilegales de inteligencia en cantidades oprobiosas por grandes conglomerados mediáticos con adquisiciones de aparatos y equipamientos israelíes que se pueden comprar en locales determinados de la Argentina y, si no, cruzan la frontera y lo hacen en Ciudad del Este.

Está claro que el desarrollo de una inteligencia nacional al servicio de la defensa nacional y de la seguridad interior de los argentinos evidentemente genera adversarios. Muchos de ellos estarían felices de ser un subsistema de agencias centrales como la CIA. Muchos de ellos estarían felices, y lo han manifestado en sus declaraciones cuando dijeron que van a pagar todo lo que reclaman los fondos buitres. Y todas estas operaciones están íntimamente vinculadas con esa cuestión.

Quiero cerrar diciendo que la señora presidenta ha tomado este compromiso y que este

bloque lo ha acompañado en plenitud. Y no solamente eso, sino que ella no quedó satisfecha con las reformas que habíamos introducido en el dictamen y elevó un montón de modificaciones apuntando a profundizar el control, la democratización y la transparencia de los servicios.

Gracias.

Sr. Presidente. – Gracias, senador Fuentes.

Tiene la palabra el señor senador Guastavino.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿se puede leer la lista de oradores, así la cerramos?

Sr. Presidente. – Sí.

Están el senador Guastavino, la senadora Negré, el senador Romero, el senador Basualdo, la senadora Di Perna, el senador Pereyra y cierran el senador Rodríguez Saá y el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Bien. Autorizamos las inserciones y votamos la lista de oradores.

Sr. Presidente. – Vamos a autorizar ahora las inserciones...

–Luego de instantes:

Sr. Presidente. – No hay quórum.

Sr. Pichetto. – Que se convoque a los senadores...

Sr. Presidente. – Que avance el senador Guastavino y cuando haya quórum procederemos a votar.

Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.

Voy a remitirme a dos aspectos del proyecto de ley. No voy a abundar en detalles que tienen que ver con el marco jurídico y con el contexto en el que se ha generado este proyecto de ley porque ya han sido abundantes las expresiones del miembro informante, el senador Fuentes. Me voy a referir a lo que significa el traspaso de las escuchas al Ministerio Público, a los nuevos tipos penales y a los aumentos de penas para aquellos actos delictivos que describe este proyecto de ley.

De la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales hay que decir que el artículo 17 del proyecto de ley sustituye el 21 de la Ley de Seguridad Interior –la 25.520– y lo transfiere al ámbito del Ministerio Público Fiscal, órgano que –como todos sabemos– es independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que fue creado con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Se trata de un ministerio

y un organismo extrapoder –como digo– con autonomía y con independencia.

Me parece que es justo mencionar que hubo proyectos de senadores en esta línea, de proponer que las escuchas telefónicas pasaran al ámbito del Ministerio Público Fiscal. Hubo proyectos del senador Solanas, de la senadora Morandini, del senador Juez. También la senadora mandato cumplido Sonia Escudero presentó en 2008 un proyecto de ley en ese sentido de transferir las escuchas al ámbito del Ministerio Público Fiscal. Con mis colaboradores estuvimos investigando y vimos que, con muy buen criterio, en aquel entonces la senadora Escudero pidió opinión a la Universidad de Buenos Aires y también al CIPPEC, y es interesante ver las respuestas que estos organismos de mucha jerarquía enviaron a la senadora. Para ser breve, pido permiso para leer.

Sr. Presidente. – Sí, por favor.

Sr. Guastavino. – Termina diciendo el CIPPEC: apoyamos la propuesta de la senadora Sonia Escudero, en cuanto retira del ámbito del Poder Ejecutivo la Dirección de Observaciones Judiciales. A su vez, resulta importante su traslado a un órgano independiente como el Ministerio Público Fiscal de la Nación. La Constitución Nacional, en el artículo 120, dispone que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Por su parte, la ley orgánica establece expresamente en el artículo 1º que ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia en coordinación con las demás autoridades de la República pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Esto es lo que opinaba el CIPPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que suele ser consultado.

Y un extenso dictamen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires termina diciendo que el proyecto en consideración resulta, en tal marco, de fundamental importancia en el camino de reforzar las garantías constitucionales, ubicando en la esfera correspondiente a la institución encargada de llevar a cabo las interceptaciones telefónicas ordenadas judicialmente.

Con lo cual, nosotros creemos que es una decisión absolutamente acertada pasar las escuchas telefónicas al ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, nosotros hemos tratado y aprobado el Código Procesal Penal, pasando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio; y ahí le damos preponderancia al Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, también hemos escuchado alguna propuesta de la oposición en el sentido de que pretendía que las escuchas pasaran al ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, habría que decir que hay un sector importante de la oposición que, a partir de esa postura, hace un reconocimiento a esta Corte, por la que tanto hicieron realmente tanto Néstor Kirchner como la presidenta de la Nación por generar una Corte de jerarquía. Por otro lado, es técnicamente incorrecto, porque pondría en cabeza de la Corte Suprema de Justicia la producción de prueba ordenada por los jueces. Es una cosa que realmente no termina de cerrar.

Con respecto a las penas, al aumento de las penas establecidas en la ley 25.520 y los tipos penales nuevos, en el capítulo VI, en los artículos 19 y 20, se aumentan las penas que actualmente se encuentran previstas en la ley 25.520 en sus artículos 42 y 43.

En el artículo 42, que habla de la interceptación, captación o desvío indebido de comunicaciones, prisión por un mes a dos años de inhabilitación especial por el doble de tiempo. Eso es lo que dice el artículo 42; ahora se aumenta la prisión, de tres a diez años.

Artículo 43. Omisión de destrucción de grabaciones, prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo; ahora aumenta a prisión de dos a seis años.

A su vez, el proyecto que estamos tratando incorpora dos tipos de delitos penales nuevos: establece penas frente al incumplimiento de un funcionario o empleado público de la obligación establecida en el artículo 15 bis del proyecto. El artículo establece que, y leo señor presidente: “Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el director general o el subdirector general o por el funcionario a

quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad”.

De esta forma se establece que toda relación entre funcionarios y empleados con la Agencia Federal de Inteligencia deberá ser llevada a cabo con su director o subdirector, eliminando cualquier posibilidad de contacto o relaciones por fuera de los canales formales y legales. La pena que se establece es prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, si no resultase otro delito más severamente penado.

El segundo es un tipo penal nuevo que sanciona el espionaje ilegal. Dice así: “Artículo 43 ter. Será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”. En la misma pena incurrirán quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional.

De esta forma, señor presidente, lo que se hace es sancionar fuertemente al espionaje ilegal, subsanándose de este modo la falta de una figura penal dirigida expresamente a sancionar este tipo de actividades.

Por todo lo expuesto, no quedan dudas de que lo que propone este proyecto es dar un claro mensaje respecto de las actividades de inteligencia ilegales o prohibidas, incorporando un sustancial incremento de las penas para su correcta sanción por parte del Poder Judicial en todo caso que se detecte la realización de actividades de inteligencia no autorizadas y prohibidas por las leyes.

Éste era el aporte que quería hacer y que le daba justificación a la participación de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación, entonces, la lista de oradores y las inserciones, en una misma votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.³

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: hemos escuchado durante todo este tiempo de

esta reunión o desde que la presidenta anunció que iba a remitir este proyecto de ley –y donde los sectores de la oposición manifestamos que no íbamos a participar del debate en las comisiones– una serie de voces en prosa, en poesía, en lunfardo, en castellano, en castizo o en lo que quieran, que habíamos declinado el debate y que nos negábamos a saldar una deuda de la democracia.

Esto, presidente, es la primera hipocresía institucional que ha transcurrido desde que el Poder Ejecutivo dio a luz y mandó este proyecto de ley.

No voy a animar estas palabras con palabras románticas del parlamentarismo citando a John Stuart Mill o a Madison, pero sí voy a decir que el constitucionalista inglés Walter Bagehot dijo que el gobierno, mediante la discusión, ha concluido.

Esto significa, señor presidente, que vinieron los nuevos tiempos. Y vinieron los tiempos de los partidos políticos, y vinieron los tiempos de los bloques y vino el tiempo de la disciplina partidaria, pero también vino el tiempo de los agonistas de la política, o sea, de los luchadores de la política.

Y si bien el debate parlamentario ha cambiado y no tenemos el debate parlamentario que quisiéramos, no vamos a decir que es inexistente, pero está muy lejos de aquello que escribió Hans Kelsen, en *Esencia y valor de la democracia*. El debate parlamentario, para ser fructífero, tiene que tener una tesis, tiene que tener una antítesis y tiene que tener una síntesis superadora. ¡No superadora de un valor absoluto o de un valor de verdad!, sino de una tesis superadora que sea fruto de una transacción entre los distintos sectores. Y esto es lo que no entiende el oficialismo, y no lo ha entendido; y por eso no entendió lo que significaba dejar los lugares vacíos en el debate de las comisiones. Y ratifico que no lo entendió después de escuchar al miembro informante.

Han transcurrido varios años, pero fundamentalmente en los últimos dos años tengo que reconocer que los miembros del Poder Ejecutivo han asistido a este Congreso y nosotros hemos participado plenamente y hemos concurrido a cada una de las convocatorias realizadas. ¿Para qué? Para absolutamente nada.

³ Ver el Apéndice.

Recuerdo, por ejemplo, una vez que vino el ministro de Economía y que ante una pregunta me contestó que la seguridad jurídica no era un valor para el gobierno ni para los argentinos.

Después, hemos presentado innumerables proyectos de leyes. Nunca fueron tratados nuestros proyectos. ¡Hemos llegado hasta el límite de que ni siquiera se incorporaran en el copete, que tuviéramos que pedir que se lo haga y que también se pusieran en tratamiento en las comisiones! Se han aceptado modificaciones de organismos extraparlamentarios como el CELS —que reconozco que tiene una profusa actividad investigativa— y resulta que esas modificaciones habían sido propuestas antes por la oposición. Cuando la oposición las proponía, el oficialismo decía que no; cuando vino el CELS, dijo que sí.

Entonces, ¿no le hemos rehuido al debate parlamentario; hemos estado cansados del atropello y del autoritarismo, fruto de las jinetas de los votos y de las mayorías, y eso no es un verdadero parlamentarismo!

Señor presidente: este último año hemos tratado exactamente ochenta y cuatro proyectos de ley; pero no ha habido debate, ha habido encorsetamiento, corte e inmediato dictamen. Ahora bien, si en este cuerpo hemos coincidido en cuanto a la gravedad de la muerte de un fiscal general de la Nación, ¿no ameritaba semejante reforma —porque, como lo dijo el miembro informante, no es una nueva ley— un tratamiento distinto?

El día lunes nos enteramos de que había ingresado el proyecto. Y, como el senador Rodríguez Saá y yo somos miembros de las dos comisiones, la primera notificación la recibimos el martes a las once de la mañana. Fue así que salimos corriendo a tomar los aviones, pero la verdad es que ni siquiera tuvimos el tiempo necesario de leer la iniciativa y, además, cuando llegamos aquí nos encontramos con una segunda notificación: que habían pasado la reunión a las dos de la tarde. ¿Era tal la urgencia después de un mes de receso? Si consideramos, además, que se encontraba en marcha el cambio estacional y era complicadísimo trasladarnos. ¿Era tal la urgencia que hacía que en veinticuatro horas tuviéramos que analizar todo y prepararnos para preguntar, interrogar y dar sugerencias a las au-

toridades políticas del Servicio de Inteligencia de la República Argentina?

En paralelo a esta reunión, hoy está transcurriendo en esta casa una audiencia pública, y en la hora y media, o dos horas, que estuvimos presentes en ella, fueron presentados dos proyectos de ley de modificación de la ley de inteligencia: el primero de ellos por la Asociación de Magistrados y, el segundo, por una organización de la comunidad judía.

Reitero: en dos horas fueron presentadas dos propuestas; entonces, ¿cuál era la urgencia o qué nos impedía organizar audiencias públicas y escuchar a la sociedad civil? Por lo tanto, el hecho de que declinemos el debate resulta una verdadera hipocresía institucional. ¡Hemos dado ejemplo de concurrencia, de permanencia y de asistencia a la sesión! Sin embargo, a veces, los opositores estamos solos acá. Hay uno o dos senadores y uno de los que más permanecía en su banca escuchando era el senador Aníbal Fernández, que, a veces, estaba él solo ahí; sin embargo, nosotros hemos seguido.

Se me llegó a decir una vez: “¡Qué importa que vengas o no si lo tuyo es testimonial!” Como si uno no representara los intereses y los pensamientos de la provincia y del grupo de personas que a uno lo votaron. Eso no es democracia. El diálogo democrático es escucharnos y presentar una tesis, una antítesis y después una síntesis, no como valor absoluto, sino como fruto de las transacciones. Por tal motivo, cansados, reitero, cansados, dijimos: no es forma de afrontar el asunto; no es agenda para la República Argentina la Ley de Inteligencia; es otra la agenda de la República Argentina. Y sí, señor presidente, porque en marzo de 2014 la presidenta se comprometió a realizar lo necesario para modificar el pacto de la Argentina con Irán.

Asimismo, le quiero manifestar que, a medida que escuchaba al señor senador Fuentes, pensaba que en realidad el pacto de la Argentina con Irán tendría que ser fruto de una ley de nulidad, como lo hicimos en este Senado y en la Cámara de Diputados —cuando la presidenta fue presidenta de la comisión o de Asuntos Constitucionales— con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. ¿Por qué? Porque ha sido votada no bajo las verdaderas circunstancias. Entonces, ¿eso es lo que tendríamos que

estar haciendo! Tendríamos que estar, en primer lugar, no derogando sino declarando la nulidad de nulidad absoluta en virtud de esa atribución parlamentaria de la cual la presidenta de la Nación, en su momento, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, resultó ser la líder del movimiento y trajo al Senado esa corriente jurídica ideológica que hizo posible que votáramos eso.

Pero la que acaba de presentar es la segunda hipocresía: esa no es la agenda de los argentinos y tampoco debe ser presentada de esta forma. Entonces no se trata de que declinamos el debate o de que somos intolerantes. Señor presidente: estoy aquí desde marzo de 2001 y es la primera vez que viene Parrilli; de hecho, antes no vino nunca. ¡Nunca! Y hace doce años que se encuentra en el gobierno. Además, viene, se sienta, y dice que somos intolerantes. ¿Mayor tolerancia que la nuestra? ¡Por favor! Miremos las votaciones, miremos las asistencias, miremos las asistencias a los debates. ¡Es una falta de respeto y de responsabilidad lo que han hecho!

Luego, la tercera hipocresía institucional que ha existido en esto ha sido la de disfrazar con victorias las derrotas. Siempre han venido atrás de los incendios, como bomberos, y esta no ha sido la excepción. Vinieron con el tema de YPF; con el de Aerolíneas Argentinas; con el caso Ciccone; con la Ley de Hidrocarburos; con la reforma ferroviaria, los ferrocarriles para tapar la masacre de Once. Reitero: la Ley de Hidrocarburos para dar concesiones por cincuenta años. Y, hoy, se piensa –como otra hipocresía más– que con una ley se va a tapar lo que ha sido el magnicidio sufrido por todos los argentinos relativo a la muerte de un fiscal federal de la Nación y en las condiciones en que ocurrió.

Por otro lado, presidente, la cuarta hipocresía institucional: una ley no cambia los hechos; una ley no tiene virtudes revolucionarias. ¿Cómo podemos dictar o modificar la ley de inteligencia desde la opacidad de los hechos? Todo es secreto; absolutamente, todo es secreto. No tenemos una radiografía de la realidad: no sabemos cuántas personas están trabajando; no sabemos en qué ámbitos; no sabemos quién es quién y no sabemos los fondos que manejan. La única oportunidad que tuvo la Comisión de In-

teligencia de solicitar datos fue cuando en 2009 la mayoría era opositora, y no los mandaban. En efecto, la Comisión de Inteligencia de supervisión de la SIDE tuvo que interponer un amparo judicial a fin de que los datos fueran enviados a los senadores nacionales que la componen.

Entonces, todo bajo el secretismo, reitero, todo bajo el secretismo; y todo a la luz de la “carpetocracia”, de las operaciones, de las sociedades de cobertura, de los nombramientos inorgánicos, de los testaferros, de las escuchas clandestinas y de las amenazas. Finalmente, en ese ámbito, repito, en ese ámbito es que estamos tratando este proyecto de ley.

¿Cómo vamos a legislar si no conocemos la realidad? ¿Cómo vamos a legislar si no tenemos la radiografía de las condiciones en que se encuentran los sistemas? Y ya voy a decir por qué motivo digo esto; porque por ahí escuché una voz que manifestó que yo no la conozco y todo el resto la conoce. No, no la conocemos; no la conocemos.

Señor presidente, se alude a que hay un compromiso internacional para aprobar esta ley y recién, en la audiencia pública, dicho compromiso fue casualmente recordado por el presidente de la Auditoría General de la Nación. Efectivamente, hay un compromiso firmado por la República Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en su mayor parte no ha sido cumplido. Y, como para muestra vale un botón, voy a citar un ejemplo: la Unidad Técnica Anticatástrofe no ha sido conformada; luego, como ese, hay otros ejemplos: varias unidades técnicas a las que la Argentina se había obligado y no fueron conformadas. Además, no transparentó los fondos ni el accionar, etcétera; entonces, se trata de cambiar la ley para no cambiar nada. Porque muchos de los artículos a los que nos estamos refiriendo estaban en la ley anterior.

¿Por qué digo que no sabemos ni lo que hay? Permítanme leer, porque son muchas reparticiones. ¿Cómo está la situación de inteligencia, hoy, señor presidente? Concurren, en Policía Federal hay una dirección de inteligencia criminal y un cuerpo de informaciones creado en el año 63, que está vigente. En Gendarmería Nacional hay un cuerpo de inteligencia. En Prefectura Naval hay un cuerpo de inteligencia. En el Servicio Penitenciario Federal existe el Depar-

tamento de Inteligencia Penitenciaria, que no ha hecho nada para proteger a los internos y ha hecho mucho para dañar a los externos. En el Ejército Argentino existen treinta y cuatro unidades de inteligencia. En la Armada Argentina existe una Dirección General de Inteligencia de la Armada. En la Fuerza Aérea existe una Dirección General de Inteligencia. En el Ministerio de Defensa y Seguridad existen unidades de inteligencia. Y también están las unidades de inteligencia de las policías provinciales. Todo esto protegido por el manto de la confidencialidad.

Entonces, no estamos deshojando margaritas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos trasladando al ámbito del Ministerio Público? ¿Qué estamos haciendo con el resto? Miremos el presupuesto. Además, miremos los personajes y las metodologías, presidente.

Todo lo que el senador Fuentes decía que está prohibido, está aprobado desde la ley, en democracia. Son tres leyes: la de seguridad, la de inteligencia y la de criminalidad; son tres leyes bien estudiadas y bien dadas. Lo que pasa es que no pasa por la ley y la situación sino por los personajes y los procedimientos.

El ministro Béliz, que fue procesado y se fue del país, denunció que el señor Stiuso violaba la ley de inteligencia, que hacía espionaje interno. O nos olvidamos, también, la denuncia que hizo el jefe de Gendarmería, donde el Proyecto X infiltraba a los organismos de derechos humanos y de derechos sociales. Y eso estaba ocurriendo en la República Argentina. El ministro Béliz se fue y Stiuso quedó.

Entonces, lo que hay es una serie de personajes oscuros. No digo que todo el sistema de inteligencia debe ser público, porque no es así, porque sería de ignorante. Pero van doce años de gobierno. Esta no es una deuda de la democracia, sino una deuda que tenemos con la democracia. El oficialismo no puede decir que viene a solucionar los problemas que recién le llegan. Es una deuda con la democracia que tiene este gobierno, que lleva doce años y que tuvo una denuncia pública de que el señor Stiuso estaba violando la ley de inteligencia; sin embargo, no se hizo nada.

Quiero decir, señor presidente, dos o tres cosas técnicas, sin perjuicio de que voy a insertar. En primer lugar, no se cambia el nombre. Se pasa el compacto tal cual está al ámbito del

Ministerio Fiscal. Pero no se dice nada respecto de la idoneidad de los dos funcionarios, de las máximas autoridades de esta agencia.

Tienen el acuerdo del Senado, pero esto no basta. Las personas que van a manejar los derechos fundamentales de otras personas, el derecho a la intimidad –porque pueden filtrar nuestras llamadas, nuestras informaciones, nuestras computadoras, lo explicó perfectamente el senador Fuentes al referirse a toda la aparatología que hay–, tienen que tener mínimamente dos cualidades: una calidad técnica –habrá que colocar un estudio de posgrado, una especialidad en derechos humanos– y, además, una calidad ética.

Además creemos que a ese acuerdo, en el Senado, se le deberá dar un tratamiento similar al que se le da a los acuerdos para los jueces, con una publicación por edictos, para que las organizaciones y la sociedad puedan venir. Porque semejantes facultades extraordinarias que se le otorgan a estas personas llevan insita la necesidad de que puedan ser impugnados, como ocurre con los jueces, los miembros de la Corte, los fiscales, los defensores. No basta con el acuerdo parlamentario.

En segundo lugar, el acuerdo parlamentario tiene que ser con mayoría agravada y obligar a que se pronuncie la Comisión de Acuerdos sobre cada una de las observaciones que se reciban en este sentido. La mayoría parlamentaria para esta designación tiene que ser una mayoría agravada.

Las sociedades de cobertura son aquellas sociedades que se arman para el financiamiento de los organismos de inteligencia, que están sujetas a la ley de sociedades comerciales. Las sociedades de cobertura tienen que tener algún tipo de respaldo de control. Tiene que haber contradocumentos en poder de la Escribanía General de la Nación, en la IGJ, en forma reservada y blindada, a los que puedan acceder los miembros de la comisión del Senado, de fiscalización. Pero no pueden ser anónimas. Tenemos que conocer quiénes son los integrantes de las sociedades de cobertura porque son el medio de financiamiento.

Tenemos que tener garantía por los nombramientos inorgánicos. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios, porque es el sistema de infiltración y de investigación. Pero debe transparentarse ese sistema. Si no, tenemos los Bogado, todos los

que andan boyando por ahí, sin saber si tienen contrato o si no lo tienen. Tiene que reglarse, presidente. El Servicio de Inteligencia tiene que reglarse. Alguien debe saber quiénes son los nombramientos inorgánicos y estos deben estar controlados por este Parlamento.

Quiero mencionar otra contradicción más. Acá el senador Fuentes dijo que el control democrático estaba dado por el director y el subdirector. Pero resulta que permanecen esta serie de autoridades de los organismos de los que hablé y, entonces, me pregunto, cómo van a hacer para compatibilizar la autoridad de estos funcionarios con la autoridad del director general.

Dice que elegimos, con acuerdo del Senado, al funcionario que será la cabeza del Sistema de Inteligencia. Pero las actividades serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo; por ejemplo, por Milani, o por el prefecto naval, o por el jefe de la Gendarmería, o por el jefe de la Policía Federal, o por el del Servicio Penitenciario Federal. ¿A quién van a rendir cuentas si siguen, en el medio, los escalafones de todos esos organismos que mencioné? Uno de ellos tiene treinta y cuatro unidades de inteligencia.

Quiero decir, con respecto a lo que decía el miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que no hay ninguna incompatibilidad. La última ratio de la constitucionalidad de nuestros actos y de la vigencia o no de las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos argentinos la tiene la Corte Suprema de la Nación. Ese es el último organismo. Lo sabemos. Nos han declarado la inconstitucionalidad de varias leyes. Recuerdo la famosa ley de defensores que dictamos, recién la tercera vez logramos la constitucionalidad, cuando defendíamos a los deudores hipotecarios.

Lo que la Corte va a tener es el resguardo y la custodia. Esto que se está haciendo, mandarlo al Ministerio Fiscal, se contrapone con lo que hemos votado en el Código Procesal Penal. ¿Por qué, presidente? Voy a nombrar uno o dos artículos, nada más.

Protección de la intimidad y privacidad: el artículo 13 dice que sólo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este Código podrán afectarse esos derechos. Después dice: “El Ministerio Público Fiscal,

que actuará bajo los principios de objetividad y buena fe, deberá requerir orden judicial previa”. O sea, fíjese: quien tiene las escuchas en sus manos debe pedir autorización al juez para intervenir las escuchas. Hay una contradicción con esta parte del Código. O sea, si queda esto vigente, se modifica el Código Procesal, que lo hemos votado a fines del año pasado. Entonces, en eso, no comparto para nada lo que dijo el miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Sr. Presidente. – Senadora: le pido si puede ir redondeando.

Sra. Negro de Alonso. – Sí, ya estoy terminando.

Finalmente, señor presidente, yo quiero decir que todos queremos un nuevo sistema de inteligencia para la Argentina. Todos los que ocupamos cargos públicos, o casi todos, hemos sido objeto de actos por parte de los servicios de inteligencia.

Desde que soy senadora he sufrido dos. Primero, ingresaron a mi departamento en Buenos Aires y me ponían la marcha fúnebre. En enero de 2002, cuando me negué a votar una ley que transformaba en quirografarias las deudas hipotecarias, me entraron al departamento, me comieron un pollo que había dejado –porque volvíamos siempre tarde; enero de 2002 fue un año muy difícil–; me dejaron los huesitos del pollo y me sonaba el teléfono cada media hora con la marcha fúnebre. Y todo el departamento con las luces prendidas. La única que estaba era yo. Mis hijas no estaban y la empleada estaba de vacaciones.

En otra oportunidad, cuestioné al interventor del Partido Justicialista, en mi carácter de apoderada del Partido Justicialista de San Luis, y gané el recurso en la Cámara. Cuando ocurrió eso, a las cuarenta y ocho horas tuvimos dos atentados en nuestra casa: una bomba en el living y un líquido inflamable por abajo del portón del garaje. Un líquido que la policía de la provincia analizó y concluyó que no había antecedentes en la provincia de ese tipo de combustible. Gracias a Dios no se nos incendió el auto, porque si no hubiéramos volado todos.

Así que todos queremos esto; todos queremos que se modifique el sistema de inteligencia. Todos seguramente tendremos algo para contar,

los que estamos desarrollando este tipo de actividades. Ahora, nosotros planteamos: debate amplio, debate con tiempo. Queremos que la Comisión Mixta Bicameral de Fiscalización sea ocupada por la minoría. La minoría, presidente. Este gobierno ya termina. La minoría.

Queremos que sea transferido todo el sistema a la Corte y queremos que se transparente: se jubile, se les dé jubilaciones especiales, se hagan sumarios administrativos. Digamos: que se investiguen los procedimientos espurios y violatorios de la ley. No es necesario que haya un nuevo tipo penal, porque ya estaban prohibidos y tipificados en el Código Penal que está vigente en la actualidad. Eso es actividad ilícita, es delito. Es inconstitucional y es afectación de garantías constitucionales; no necesitamos un nuevo tipo penal. Por supuesto que está agravada la pena, pero eso es lo que queremos: deshojar la margarita; no mandar un paquete cerrado al otro lado. Para cambiar esto y darle a la democracia lo que nosotros le debemos a ella, la única forma de hacerlo es a través de un proceso lento, despacio y en coordinación los tres poderes del Estado.

Esta debiera ser una ley de consenso y creo que es lo que en definitiva dijo Verbitsky en *Página/12* la semana pasada, a quien el oficialismo sigue mucho en sus pareceres. Dijo que nunca una ley de inteligencia podía ser sancionada si no se lo hacía con el consenso de toda una sociedad. Por ese motivo, nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente: venimos una vez más de urgencia a tratar proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Plantea en la exposición de motivos, al comienzo nomás, que es una deuda que tenemos las fuerzas políticas, o los partidos democráticos, según dice acá. La verdad es que once años tardaron en darse cuenta de que había que meter manos en ese lugar. Es la urgencia.

Tampoco nos dieron mucho tiempo para el debate. Este proyecto entró en comisión el 2 de febrero y el 4 ya estaba el dictamen; en dos días. Tampoco hay mucho tiempo para el debate y para el aporte.

Después, en la página siguiente, en el folio 2, la exposición de motivos expresa que el

gobierno puso un gran empeño en contra del terrorismo de Estado. Es cierto, pero ahí nos quedamos cortos. La gente no sólo quiere verdad y justicia sobre lo que fue el terrorismo de la dictadura, sino que también le hubiera gustado que en estos años los servicios de inteligencia hubieran hecho prevención en las fronteras, para que no penetren bandas de narcotráfico; que hubieran estado advertidos de la situación en la provincia de Santa Fe; que no hubiera sido la ley de migraciones solamente la puerta para que vengan delincuentes de otros lugares sin que averigüemos qué portación de prontuario pueden tener.

La gente también tiene miedo a la inseguridad, todos los días, en la calle. Y eso fue un gran descuido. No sé qué habrían hecho los servicios. Por lo menos esto no hicieron: advertirle al gobierno que, hace diez o doce años, el cambio de gobierno en Bolivia iba a liberar la producción de droga y que, con la presión que ponía Colombia en el norte, la zona vulnerable era nuestra frontera norte. Hoy vemos el microtráfico, los barrios infectados de chicos con adicción en el norte y en todo el país. Lamentablemente, no hubo una eficiencia en los servicios, que tenían que haber informado al Estado.

Párrafo siguiente, habla de que el gobierno firmó el convenio con Irán. Justamente, la causa de los problemas que tenemos hoy en el país ha sido ese memorándum.

Así que yo creo que este proyecto no agrega ningún elemento importante. Llamarle federal a este organismo es solamente un título que suena bonito, porque en este país, de federal no hay nada: ni en los recursos, ni en la estrategia de obras y políticas sociales. De federal no hay nada; es todo electoral. Eso lo puedo decir convencido.

En inteligencia, que es un área tan sensible, reaccionamos de una manera adolescente: salimos a emparchar los conflictos, los problemas; salimos a reconocer impericia. Venimos a reconocer doce años de descontrol.

Desde el Interbloque Federal creemos que, una vez iniciada la sesión, tenemos la obligación de venir a exponer nuestra posición, porque tenemos un compromiso con los ciudadanos y queremos que sepan nuestra postura adversa a este proyecto. Y no con nuestra ausencia facilitarle al oficialismo la unanimidad de la opinión.

Nosotros creemos que tenemos una opinión distinta y tenemos la obligación de señalarla aquí, no sólo para que quede registrada sino para que se sepa.

No estaríamos aquí si no se hubiera producido la muerte del fiscal Alberto Nisman; no estaríamos en esta reunión. Y Nisman tampoco estaría muerto si no fuera porque se lo envió con todos los poderes para que investigue y se lo puso en contacto con la SIDE. Se lo envió a un nido de víboras. Ahí estuvo, tal vez creyendo inocentemente que lo ayudaban, que lo cuidarían, que lo protegerían. Pero lo más complicado de eso no es dónde estaba, sino que el propio gobierno—el de Néstor Kirchner—, que en su momento tuvo una actitud de investigación, de presión a Irán en muchas oportunidades, de alocuciones en Naciones Unidas, que le dio a la fiscalía todos los recursos para que pueda investigar, luego se corrió. El gobierno se corrió, lo dejó solo. Es como mandar una avanzada en la guerra y después el ejército no está atrás; se corrió; está negociando con el enemigo. La primera víctima es al que hemos enviado.

La persona de más riesgo fue quien pusimos a dar la cara en una investigación de algo que sigue siendo parte de una cadena de impunidad en el país, que hace que veintidós años después todavía no se sepa del atentado a la AMIA.

Eso es lo que se le encomendó; el país le encomendó a Nisman investigar eso. No le dijo que haga política, que vea si era conveniente el acuerdo, sino que investigue. Y como todo fiscal investigador, puede estar acertado o puede estar equivocado, pero no es el gobierno el que debe criticar si está acertado o equivocado; no es el gobierno el que tiene que ponerle presión al fiscal en los últimos días de vida; no es el gobierno el que tiene que marcar la agenda ni tiene que marcar hoy la agenda de la investigación, dándole instrucciones a la fiscal y a los jueces. El gobierno debería estar ayudando a que se esclarezca el hecho.

El gobierno se corrió, lo dejó solo a Nisman. Se debe investigar. Porque esto se dio cuando parecía que Nisman encontraba un poco de luz en el túnel. Y no me digan que no probó. Están las cintas ahí; algún día un juez probará. Y se trata de escuchas legales, porque no eran ilegales; eran escuchas autorizadas hace varios años

por los jueces, de donde surge una diplomacia paralela.

¡Qué vergüenza, en este país, hemos pasado de Saavedra Lamas, negociador de la guerra entre Paraguay y Bolivia —Premio Nobel— a D'Elia... hemos pasado a Esteche! ¡A qué decadencia hemos llegado los argentinos! Tener de diplomáticos paralelos a unas personas que están procesadas por varios delitos, operadores del gobierno, negociando con una potencia extranjera.

Acá dijo el miembro informante: “Las operaciones de los servicios extranjeros”. ¿Acaso los lobbies para que se firme ese acuerdo no son operaciones de potencias extranjeras? ¿O no es Irán una potencia extranjera? Eso es lo que tiene que investigarse. ¿Por qué se hizo ese acuerdo con Irán? ¿Fue un pedido de Venezuela? ¿Compromisos de qué tipo? Otro misterio en esto. Y así estamos en muchos misterios. Entonces, reitero, si no fuera por la muerte de Nisman no estaríamos acá hablando.

Si lo mataron sectores de la SIDE, o una fuerza de seguridad, es responsabilidad del Estado argentino que se investigue. Si fue asesinado por otra agencia internacional —“operaciones de inteligencia”, como le gusta decir al miembro informante—, también el Estado argentino, el Ejecutivo, fue el responsable de cuidarlo y no lo cuidó. Poner policías de custodias que hacían de choferes o de cadetes no es seguridad para una persona en alto riesgo. No puede ser que un fiscal que acusó a la presidenta de la Nación y a su canciller de encubrimiento aparezca muerto. No decimos que haya tenido razón, decimos que ésa es su misión. La misión de un fiscal es encontrar una investigación, una línea de investigación. Los jueces dirán después si son culpables o no las personas imputadas.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador don Ruperto Eduardo Godoy.

Sr. Romero. — Ahora estamos investigando al muerto. ¿Por qué no investigamos quiénes lo mataron, o por qué murió, en lugar de investigar al muerto? Funcionarios que dan versiones sobre la vida y sobre los pasos del fallecido. Opinamos todos los días, y no es correcto eso. Y que sepa este gobierno que ninguna agencia, aunquese llame federal, ningún apresuramiento

en aprobar esta ley, tapará la muerte de Nisman hasta que no se encuentren los verdaderos culpables. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Godoy). – Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Basualdo.

Sr. Basualdo. – Señor presidente: del mismo modo que cuando nos reunimos en la Comisión Bicameral el jueves pasado, la oposición fue, porque era nuestra obligación. Estaba reunida la Comisión Bicameral, a la que teníamos que hacerle sugerencias. Fuimos, como opositores, también fue el radicalismo y la gente del PRO y firmamos las sugerencias, que se las vamos a decir en este momento.

Nosotros creemos que cualquier comisión bicameral de control, y sobre todo una como de la que estamos hablando ahora, tiene que ser manejada por la oposición, con mayoría y ocupando la Presidencia, más allá de quién sea hoy oficialismo y quién sea mañana oposición. No sirve así el tema. Tenemos que hacer una ley, pero no para siete meses, ni para un año, cinco, quince ni veinte, sino una ley que nos sirva a todos.

Entonces, ¿qué opinamos nosotros? Algo de sentido común: que sí, nosotros tenemos que controlar; no se puede controlar el mismo oficialismo, tener presidente y tener la mayoría. Porque estaban los que dijeron: “¿Y si le damos la Presidencia?” Si nos dan la Presidencia sin el quórum sabemos que no existimos. Es decir, hay que darle a la oposición, se llame como se llame, la mayoría y la Presidencia, porque ahora en esta ley le están dando más poder a la Comisión Bicameral, y bienvenido sea, pero para poder controlar necesitamos poder –que lo podemos tener– y querer, que a veces, si somos del mismo palo el presidente de la comisión y el del oficialismo, vamos a tener el poder, pero vamos a poner el auto en punto muerto y vamos a llevar las comisiones de forma tal que capaz que hagamos reuniones todas las semanas, todas las que ustedes quieran, pero no trataremos los temas fundamentales, que es lo que nosotros necesitamos para una verdadera comisión de control.

En la comisión también hemos dicho que la Auditoría General de la Nación ayude a la Co-

misión Bicameral, que se ponga a su disposición para poder controlar.

Fíjese el presupuesto que tiene ahora la nueva Agencia Federal de Inteligencia –si es aprobado este proyecto de ley, o Secretaría de Inteligencia, actualmente–. Un presupuesto grandísimo. Hoy, un senador, con los recursos de que dispone, tiene que nombrar un asesor. Indudablemente que no puede controlar. Entonces llamemos a la Auditoría General de la Nación también para que nos ayude, ya que tiene su estructura, tiene su capacidad, de manera que junto con la Comisión Bicameral podamos controlar, para poder hacer un buen control, porque si no estamos súper limitados con los asesores que tenemos para poder controlar la parte financiera de un servicio de inteligencia de este tamaño y de tal presupuesto.

También pedimos nosotros –todo el interbloque, junto con la oposición, con el radicalismo y con el PRO– que todas las escuchas, en vez de realizarlas el Ministerio Público, las hiciera la Corte Suprema de Justicia, para que esta última designe quién es el que realmente va a hacer las intervenciones telefónicas, de control remoto..., es decir, todas las intervenciones que tengan que hacerse.

En tercer lugar, también pedimos algo con respecto a todas esas evidencias que pueda tener la agencia, esas escuchas, o lo que pueda hacer, todas las pruebas que pueda tener esa agencia. Porque para poder destruirlas tienen que pasar más de veinticinco años, y, si se quiere hacer con anterioridad, debe ser con permiso del juez; es decir, debe pedirse autorización a la Justicia para poder llevar a cabo la destrucción antes de los veinticinco años.

Por último, más allá de que los pliegos del director y del subdirector tienen que ser aprobados por el Senado de la Nación, estamos pidiendo que lo sean por los dos tercios del Senado nacional, para poder aprobar dichos pliegos por amplia mayoría.

Ésas son las sugerencias que hemos hecho en la comisión y se las vuelvo a ratificar en este momento. Éstas son las sugerencias que damos, los cambios que necesitamos en este proyecto de ley, más allá de todas las sugerencias que han hecho y que han expresado los que han hablado por nuestro interbloque y que seguramente

harán los que van a hablar. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Godoy). – Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Di Perna.

Sra. Di Perna. – Gracias, señor presidente.

También quiero expresar mi más enérgico rechazo a la forma, el tiempo y el momento en que se está tratando este proyecto. Una vez más lo estamos haciendo de manera exprés, sin los tiempos, las opiniones de expertos, de organizaciones de la sociedad civil, ni los debates necesarios.

Estamos sentados aquí tratando un tema tan sensible y tan delicado para la calidad institucional de nuestro país. Modificar esta ley necesita el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. No aporta para nada seguir sacando dictámenes, aprobando leyes, por tener circunstancialmente mayoría parlamentaria.

Una ley, necesaria para estos tiempos difíciles, requiere obligatoriamente de la discusión y del aporte de todos; y no hablo solamente de legisladores.

Estoy convencida, como se dijo recién, de que estamos hoy aquí –y hay que decirlo, creo, sin reparos– por un antecedente reciente y lamentable, que es la muerte del fiscal general Alberto Nisman. Si este hecho trágico no hubiese ocurrido, estoy segura y garantizo que hoy no se haría la presente sesión.

Como ciudadana argentina y senadora de la Nación quiero brindar todo mi apoyo y respaldo a quienes tienen la responsabilidad de investigar e impartir justicia, y que la tarea sea realizada en libertad, con transparencia y sin presiones de ningún tipo. Espero que la verdad y el esclarecimiento del fallecimiento del fiscal Nisman, como de la causa AMIA, sean, a partir de hoy, una verdadera cuestión de Estado.

Pero hay otros temas que ponen a la sociedad en vilo y creo que como legisladores tenemos que poner el ojo en ellos. Tal el caso del hecho ocurrido en el domicilio del diputado nacional Sergio Massa, donde ingresaron configurando un ilícito y donde sigue habiendo sospechas y dudas respecto a la utilización de los servicios de inteligencia de nuestros país en estos temas.

No quiero tampoco dejar de incluir aquí el famoso Proyecto X, sumado a la inteligencia

que realiza Milani desde el Ejército, a quien se le asignó en 2015 en el área de inteligencia de la fuerza la suma de 568 millones de pesos, un 31,8 por ciento más que en 2014. Incluso, más de lo presupuestado para la Secretaría de Inteligencia, a la que hoy se le pretende cambiar el nombre.

Ahora bien, entrando al tema del proyecto que nos convoca, quiero señalar que ha pasado tiempo desde el decreto 812/05 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Pasaron diez años desde que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso de los acuerdos firmados, en particular, del ítem 5 de ese acuerdo, donde se comprometía, entre otras cosas, a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y a facilitar el acceso de la información de la inteligencia.

Es lamentable que una deuda pendiente con esta democracia, que lleva más de treinta y un años, sea no haber resuelto el tema de SIDE, Secretaría de Inteligencia, o como se la quiera llamar.

La democracia no llegó a los servicios de inteligencia. Sigue la misma historia. No ha cambiado nada en los últimos años. Tan así es que agentes formados y con actuación en las peores dictaduras que sufrió nuestro pueblo son los que hoy manejan la inteligencia de nuestro país en democracia.

Como segundo elemento a resaltar es que, si bien es necesario y adecuado contar con un sistema de inteligencia nacional, también es estrictamente necesario contar con legislación ajustada a un Estado democrático que sirva a los intereses del Estado y a sus ciudadanos y profundamente subordinada a las garantías y controles que establece la Constitución Nacional. Pero de la forma en que estamos sesionando no se construye democracia, consensos, credibilidad ni tampoco se consiguen o alcanzan los marcos normativos que modifiquen la realidad y que le sirvan al ciudadano de a pie, que desea mayor seguridad para él y para su familia. Y el Estado debe y tiene la obligación de garantizar todo ello.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constituye o construye una réplica de la estructura de inteligencia existente, aunque con otro nombre. Como dice el dicho popular: “Es el mismo perro con distinto collar”. Pero con el

agravante de algunos aspectos que incrementan las deficiencias del sistema.

En primer lugar, me sigue generando muchísimas dudas la relación entre la Justicia y los servicios de inteligencia, cuando no está clara la injerencia de una en la otra. Porque con la ley actual se habilitó durante todos estos años a que se cuele la actuación de la Secretaría de Inteligencia en cualquier causa judicial, como auxiliar de la Justicia, lo que alimentó la relación promiscua con sectores importantes de la justicia federal.

En segundo lugar, que la Dirección de Observaciones Judiciales pase a la Procuración General parece un despropósito. En principio, por el amplio poder que se le ha otorgado a la cuestionada procuradora general, doctora Gils Carbó, quien no es una funcionaria independiente.

Por otro lado, lo que no es menor, por el respeto a la garantía del debido proceso. Porque todo proceso tiene tres patas: una es la defensa, la otra es el fiscal, que acusa, y luego el juez, quien garantiza el debido proceso de que ninguna de las partes se aproveche de los derechos de otro. Y lo primero que va a abrir esta modificación es una catarata de recursos de nulidad contra fiscales que manejan la acusación y el control de las escuchas.

Me parecería correcto y apropiado que el sistema de escuchas dependa de forma directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la oficina que ella disponga para esa tarea. Tampoco debemos olvidarnos de las provincias y de sus ministerios públicos fiscales o de las cortes supremas de justicia provinciales y el acceso a la producción de escuchas que ellos tienen. Hoy deben enviar una persona hasta la Capital Federal para que desde una cabina haga esa tarea, lo cual es un tormento para la administración.

Con respecto al tema de los plazos de desclasificación de la información, a último momento parece haberse realizado una modificación en el dictamen final, que iría en línea con lo que debiera ser; es decir: un plazo menor de veinticinco años. Pero creo que, nuevamente, estamos ante un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo al proponer esto sin debate, sin consenso, a las apuradas y en un tratamiento de urgencia que la importancia de la ley no merece.

De los fondos y los gastos reservados y de la regulación de la Comisión Bicameral, me gustaría decir que no son suficientes para lograr un control eficiente y transparente. Creo que dicha comisión, en lo que hace a su integración, debiera tener mayoría de legisladores que no pertenezcan al partido de gobierno y que los fondos deberían poder ser auditados por la Auditoría General de la Nación.

Sobre el nuevo personal se establece que deberá instrumentarse una profunda reformulación del proceso de ingreso. En un debate más amplio y menos exprés, ese proceso podría haber salido redactado de esta honorable casa y no dejarlo en manos de un mero consejo y sin sanción para el caso de no ser observada esta cláusula. Un proceso que vea el perfil profesional y criterios objetivos de idoneidad para el ingreso.

De la AFI no se indica cómo será su estructura ni transparencia, etcétera. Los empleados, agentes de la cuestionada Secretaría de Inteligencia, pasan sin ninguna evaluación ni revisión a esta nueva estructura. Se transfiere todo. Entonces, me pregunto, qué es lo que cambia si sigo teniendo las mismas personas.

Señor presidente: debiera ser el momento en que la República discuta y debata profundamente sobre la necesidad de un cambio en la ley 25.520. Pero no estoy de acuerdo para nada con hacerlo de esta forma. Se necesita la opinión de todas las instituciones, organizaciones y expertos.

Es fundamental para ello crear el consenso necesario de los partidos políticos, a los fines de poder tener una legislación adecuada que le sirva a nuestro país. Éste es el país de todos, de los que piensan de una manera y de los que piensan de otra; de sus instituciones y de toda la sociedad.

Por todo lo expuesto, mi voto va a ser por la negativa.

Sr. Presidente (Godoy). – Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pereyra. – Señor presidente: desde el Interbloque Parlamentario Federal venimos a intentar dar un debate. Un debate ausente porque las comisiones fueron citadas a discutir este tema a 24 horas de haber ingresado el proyecto. Fue un tratamiento exprés. Ibamos a escuchar al oficialismo y, al día siguiente, a algunos fun-

cionarios amigos. Entonces, esta clase de debate no es el que se necesita frente a un proyecto de ley de tanta magnitud como es la creación de la Agencia Federal de Inteligencia.

Éste es un tema que debe ser debatido por toda la sociedad. No se puede sacar una ley sin discusión. Es por ello que decidimos no concurrir a las comisiones y, por supuesto, hoy venimos a fijar la posición que nosotros interpretamos como la correcta.

A sólo seis meses de las elecciones presidenciales de las PASO, presentan este proyecto, que quiere modificar lo que no pudieron cambiar durante once años.

Todos conocemos, como dijo el miembro informante, los distintos servicios de inteligencia del Estado: del Ejército, de la Policía Federal y de la Gendarmería. Pero siguen ocurriendo casos.

Por eso, quiero que se me permita dar lectura a la cronología de los hechos que se vinieron desencadenando a partir del atentado a la AMIA, o a partir del atentado a la embajada de Israel.

El atentado a la embajada de Israel fue el 17 de marzo de 1992 y dejó asesinadas a veintinueve personas, de nacionalidades argentina, paraguaya, uruguaya, boliviana, italiana e israelí, así como doscientos cuarenta y dos heridos.

El 18 de julio de 1994, a dos años del anterior atentado, se produjo el atentado terrorista a la AMIA, en el cual fueron asesinadas ochenta y cinco personas, mientras que hubo trescientos heridos, con un edificio que quedó totalmente destruido, con rasgos de implosión. Las investigaciones las dirigió entonces el juez Galeano.

En 2004, la Procuración General de la Nación crea la Unidad Especial de Investigaciones, a cargo del doctor Nisman.

En julio de 2004, Miguel Toma, para elogiar a Stiuso, dijo que recibe felicitaciones encendidas tanto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos como del MOSSAD, el servicio secreto israelí. Dijo Toma: “He viajado y he estado en reuniones con la CIA y con la MOSSAD y el prestigio incluso internacional de este hombre es realmente impresionante”.

En octubre de 2006, el fiscal especial Alberto Nisman se reúne en la CIA con la CIA y el MOSSAD.

El 25 de octubre de 2006 la Justicia argentina, después de años de investigar el caso y de tomar cientos de declaraciones y de evaluar pruebas presentadas por los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado, y a Hezbollah de ejecutarlo.

Según las investigaciones de la fiscalía, la Argentina fue elegida como blanco de ataque, tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear con Irán.

El 7 de noviembre de 2007, Interpol emitió circulares rojas para capturar a los fugitivos iraníes y llevarlos ante la Justicia.

El 25 de noviembre del mismo año, el entonces presidente Néstor Kirchner denunció a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado a la AMIA ante la 62ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 23 de septiembre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la República Islámica de Irán en las Naciones Unidas que extraditara a los funcionarios sospechados de haber participado en los atentados terroristas.

El 26 de marzo de 2011, la prensa argentina reveló la existencia de un supuesto pacto secreto entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Irán.

El 20 de abril, un mes después, el canciller argentino Héctor Timerman negó ese acuerdo, señaló que se trataba de una noticia falsa y desmintió categóricamente la existencia de un pacto con Irán.

El 27 de enero de 2013, dos años después, la señora presidenta, a pesar de ese pacto que había negado el canciller Timerman, anunció por Twitter que Timerman había firmado un acuerdo para la creación de una comisión de la verdad con el gobierno de Irán. Esto quiere decir que todo lo que se había hecho después de diecinueve años de investigación era mentira, porque se creó la Comisión de la Verdad. Así fueron transcurriendo todos esos hechos.

Esto fue muy criticado por los distintos estamentos sociales de la República Argentina. Interpol había ratificado la orden de captura solicitada por la Justicia argentina contra los cinco exfuncionarios iraníes acusados de estar involucrados en el ataque con bombas y

había emitido una nota roja para la búsqueda de estos supuestos delincuentes que habían atentado contra la entidad de la AMIA. Y las autoridades judías expresaron su temor de que la consecuencia del memorándum fuera que la Argentina levantara los pedidos de captura internacional emitidos por Interpol contra los iraníes imputados por el atentado a la AMIA, porque temían que ese fuera el motivo por el cual Irán había firmado ese memorándum de entendimiento. Y porque dicho memorándum implicaba compartir la investigación con un Estado que la Justicia argentina ya había considerado terrorista.

Es que la Justicia argentina había llegado a la conclusión, a través de una exhaustiva investigación, de que cinco altos funcionarios de la república iraní eran los culpables y ya los había condenado, en ausencia. En ese marco, crear una comisión de la verdad implicaba cuestionar la verdad, señor presidente, que la Justicia argentina había decidido.

Y mientras Timerman aseguró que los jueces argentinos indagarían al ministro de defensa iraní, Ahmad Vahidi, el periódico de Teherán reveló que Vahidi no iba a ser indagado. El diario oficial iraní había publicado que el atentado había sido perpetrado por el Estado de Israel, para sacarse la investigación de encima, seguramente.

Después vino todo el proceso de la aceptación del memorándum por el Congreso argentino; que después –por supuesto– en el parlamento iraní no se pudo tratar.

El 20 de noviembre, el presidente de Irán Hasán Rouhaní solicitó a través de sus diplomáticos, en un encuentro en Zúrich con diplomáticos argentinos, que la Argentina levantara los pedidos de captura internacional emitidos por la Interpol contra los iraníes imputados, para poder continuar con las negociaciones.

También le cambiaron el nombre a la comisión, eliminando la palabra “verdad”, y la pasaron a llamar Comisión de Expertos.

En mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Federal, compuesta tal cual señaló el miembro informante –el señor senador Fuentes– por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la AMIA y por la DAIA y revocó el fallo del juez

Rodolfo Canicoba Corral, declarando inconstitucional el memorándum con Irán, por lo que dicho acuerdo quedó sin efecto. La Cámara ordenó reiterar la solicitud de extradición de los acusados iraníes, para realizar las detenciones.

Ya en diciembre de 2014, la señora presidenta de la Nación descabezó la cúpula de lo que era el servicio de inteligencia, para nombrar al doctor Oscar Parrilli al frente de ella.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Pereyra. – Así fueron sucediéndose los hechos, hasta que nos encontramos frente a este crimen.

Pero, antes de eso, el fiscal Nisman denunció ante el tribunal del juez Lijo, quien lleva la causa conocida como “AMIA II”, el encubrimiento. La causa es contra la señora presidenta, por decidir negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán, y pidió su indagatoria.

El fiscal incluyó en la denuncia a Timerman, a Andrés Larroque, a Luis D’Elía y a otros. Según la denuncia, la presidenta instruía a Larroque, quien se comunicaba con Luis D’Elía y Fernando Esteche, de Quebracho. La presidenta habría negociado levantar las acusaciones para poder realizar transacciones comerciales, según la denuncia de Nisman, y comprar petróleo barato a Irán. Las negociaciones secretas habrían culminado con el memorándum de entendimiento. Según el fiscal Nisman, a pesar de que las decisiones fueron votadas por el Congreso en pleno y hasta fueron convertidas en ley, habría que considerar que Cristina Kirchner fue la única responsable. Afirmó que ella, en realidad, habría querido encubrir a Irán en su responsabilidad por el atentado –textuales palabras del fiscal Nisman–. Después fue la noche negra –o el día, lo que no se sabe aún– en la que aparece muerto el fiscal.

Por eso pienso y digo que hay prioridades en esto. Primero, habría que investigar la denuncia que tenía preparada el fiscal Nisman: acelerar esta denuncia, este proceso investigativo y, por supuesto, también habría que dar prioridad a definir cómo ocurrió la sospechosa muerte del fiscal Nisman.

Por estos motivos, señor presidente, no voy a acompañar este proyecto. Lo voy a votar en contra en línea con lo que está diciendo y haciendo el Interbloque Parlamentario Federal; muchas gracias.

Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.

Entramos en la parte final del debate.

Senador Rodríguez Saá: tiene el uso de la palabra.

Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.

Cuando se puso en el tapete este tema tan importante de la reforma de los servicios de inteligencia, repasé nuestra posición con respecto al memorándum. ¡Qué pena que todo lo que dijimos y sostuvimos se ha comprobado! ¡Qué pena que la Argentina tuvo en este aspecto un enorme fracaso! Lo que yo no pensaba, lo que nunca imaginamos, es que este memorándum pudiera inspirar a un fiscal de la Nación a formular la denuncia que formuló. Pero lo más grave es que esto se ha visto interrumpido con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hasta ahora, un crimen político; hasta ahora, un verdadero magnicidio; hasta ahora no hay a la vista, no se han realizado hasta ahora –por lo menos a la vista del ciudadano– los esfuerzos necesarios para encontrar la verdad en este crimen político que conmueve las estructuras del país.

El 18 se cumplirá un mes sin avances significativos en la causa de la investigación. Ese día se realizará una marcha silenciosa en la que seguramente participarán miles –quizá un millón o más– de ciudadanos argentinos que reclamarán pacíficamente, sin banderías políticas, por la verdad y por la justicia.

Cuando en 1860 Garibaldi invadió Sicilia, la aristocracia decadente, que veía llegar su fin, inventó lo que en la ciencia política pasó a llamarse el gatopardismo o “lampedusismo”, que significa cambiar todo para que no cambie nada. Entre comillas, dicen: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Con esta expresión me estoy refiriendo a esta ley, que cambia todo pero que no cambia nada. ¿Por qué lo digo? Porque se mantienen en la ley las cuestiones fundamentales que han permitido las actitudes corruptas y tenebrosas de los sistemas de inteligencia en la Argentina, conocidas por todos y algunas de ellas señaladas por los integrantes de nuestro interbloque,

que viene a dar el debate como siempre lo ha dado: con respeto pero también con firmeza. De hecho, no estamos de acuerdo.

En primer lugar, si escuchamos a los académicos, Tokatlian se pregunta cuál es el detonante que impulsa la iniciativa reformista de un gobierno; esto, referido a los sistemas de inteligencia. En los Estados Unidos la reforma a la inteligencia aprobada en el 2004 fue el resultado directo de lo que se interpretó como fallas para prevenir el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011.

En la Argentina nadie ha sugerido que la muerte del fiscal Alberto Nisman haya sido el resultado de una falla del sistema de inteligencia. No es ése el problema: no es una falla del sistema de inteligencia. Lo que se ha sugerido es que el sistema de inteligencia, una facción interna, ha tenido algún vínculo directo o indirecto con su enigmático deceso. Éste es el problema, éste es el meollo.

De septiembre de 2001 al 2004, en los Estados Unidos se realizó un largo debate para reformar el sistema. Nosotros, en una semana, trámite exprés, y resolvemos todo: no escuchamos nada, las mayorías circunstanciales hacen lo que quieren y ¡adelante con los faroles! “Tenemos la razón que nos da la fuerza.” No, no: la razón se tiene después de un debate en un Parlamento, después del diálogo, de escuchar, de dar los tiempos para sugerir, de reflexionar y después, como muy bien explicó la senadora Negre de Alonso, surgirá la síntesis o la resolución que no necesariamente será la verdad o lo acertado; pero será el fruto del trabajo.

Todos reclaman, incluso los propios amigos del gobierno, la necesidad de un debate. ¡¿Qué daño les hace un debate?! Tenemos que saber cómo es el tema de los fondos reservados; tenemos derecho a corregir y modificar el manejo de los fondos reservados, que es el antro de corrupción más grande que tiene el poder político argentino. ¡Un poder corrupto y corruptor de enorme trascendencia! Han comprado políticos, periodistas, jueces y dirigentes con los fondos de todos los argentinos transformados en fondos reservados. Hemos sido víctimas todos, sin excepción. No estoy hablando de una facción o de una cuestión política: estoy hablando de un problema grave para todos los argentinos. Se nos meten en nuestra intimidad con impu-

nidad. ¿Quién de ustedes se anima a hablar por teléfono con libertad? Cualquiera que tiene que decir algo importante por teléfono busca uno alternativo, tratando de no ser escuchado. ¿Y quién maneja ese poder extraordinario de meterse en la privacidad de los hombres públicos pero también en la de cualquier ciudadano? Lo maneja un poder oculto, secreto, que se esconde detrás de secretos y de juramentos de secretos, y de tolerancia a los secretos. Esconden todo detrás del secreto. Esto es lo que tenemos que debatir y corregir, porque no está corregido en el proyecto de ley.

Otro tema importante es el control de las escuchas. Hoy lo tiene la propia Secretaría de Inteligencia, que de ellas hace y deshace como quiere. Además, es de público y notorio conocimiento cuando hablan de los carpetazos, de los silencios y omisiones, de las operaciones que no son otra cosa que el trabajo corrupto y secreto de personas que utilizan el poder del Estado con fines inconfesables. ¿Está bien eso? ¡No, está mal! Y es la oportunidad de corregirlo cuando tratamos el proyecto de ley.

Pensamos, humildemente, tal vez equivocados, que sería más equilibrado que lo maneje la Corte Suprema de Justicia y no la Procuración General. Además, en particular, la actual procuradora está cuestionada porque tiene un grado de militancia política con el oficialismo. Tiene todo el derecho a hacer lo que quiera: no lo estoy discutiendo. Me parece que, sobre las escuchas, que es el poder más grande de la SIDE, deberíamos tener una garantía mayor. Por lo menos tenemos derecho a debatirlo, por lo menos tenemos derecho a opinar.

Justamente, el control de los servicios de información lo tiene que tener la oposición, porque si no ocurre lo que ocurre con la Comisión Bicameral actual, que no tiene voluntad política de controlar nada. Pongan el pretexto que quieran, pero no tiene voluntad política de controlar nada. Tal vez haya algún gatopardismo en los próximos días: que cambie algo para que no cambie nada, o que cambie todo para que no cambie nada. No sé. Lo que ha ocurrido en todos los años para atrás es que no ha funcionado correctamente como mecanismo de control que nos garantice a todos los ciudadanos —opositores, oficialistas, empresarios, obreros y de las organizaciones sociales— que estos servicios

de inteligencia operen bajo el mandato de un juez y para los fines previstos por la ley, no para otros fines.

Voy a leer, con el permiso de la Presidencia, una noticia del diario *La Nación* del miércoles 11 de febrero de 2015, de plena actualidad, que tiene que ver con este tema. Dice lo siguiente: “Humala [el presidente del Perú] ordena cerrar la Dirección de Inteligencia. La medida, temporaria, llega luego de una denuncia de espionaje a la vicepresidenta. Lima (*El País*).- El gobierno peruano anunció ayer el ‘cierre temporal’ de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tres semanas después de una denuncia de espionaje a la vicepresidenta Marisol Espinoza, miembro del partido oficial, aunque no tan cercana al círculo de confianza del presidente Ollanta Humala”.

Después dice que encontraron un auto con vidrios polarizados mirando en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Miren lo pequeño pero grave que es y la reacción democrática del Perú: cierran la central de inteligencia y ponen en debate por seis meses la reapertura con nuevas normas. La senadora Negre de Alonso enumeró algunas de las operaciones de inteligencia ilegales y muchas más, de todos los días, que no han conmovido a la estructura política.

Me parece que es una obligación democratizar la inteligencia argentina. Para ello, me parece que deberíamos haber realizado un proceso de diálogo, de consenso, de búsqueda de la verdad. Porque modificar la inteligencia es muy complicado y también requiere de los consensos políticos para que las modificaciones que se realicen tengan éxito.

Para finalizar quiero decir que hay que considerar que el momento político amerita una reflexión. Un verdadero magnicidio está modificando las estructuras y los paradigmas de la Argentina. Entonces, estemos a la altura de las circunstancias: reflexionemos. No es desafiando al pueblo y dividiendo más al pueblo que vamos a encontrar las soluciones. Tal vez puedan ganar una elección, tal vez puedan perpetuarse en el poder, pero son todas cosas transitorias y secundarias al lado de la importancia de solucionar los problemas que tiene un país.

Puede ser que nos inspiremos y que este cambio de paradigma que puede significar esta triste muerte —por unanimidad le hemos rendido

homenaje en el día de la fecha a la memoria de Nisman— nos sirva a todos los argentinos para que por un camino de reflexión encontremos las soluciones, encontremos la verdad, se esclarezca el crimen, se sancione a los culpables y cada uno de los argentinos, a partir de ahí, podamos transitar en paz por los caminos de la Argentina. Gracias, presidente.

Sr. Presidente. — Muchas gracias, senador Rodríguez Saá.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece importante que el Interbloque Federal haya venido a dar el debate. Hubiera sido también interesante el debate en la comisión porque hacía muchos años que no venía al Congreso un jefe de Inteligencia. Creo que se podrían haber planteado temas de trascendencia en la discusión cara a cara con el doctor Oscar Parrilli, que tuvo la valentía de venir y de exponer junto con el segundo, doctor Martín Mena. Y pese a la ausencia de los opositores —no quiero cargar las tintas; acá hubo una decisión política de no convalidar o no legitimar con su presencia la sanción de esta ley— creo que hemos hecho un muy buen trabajo.

Quiero valorizar primero los aportes que ha hecho un senador de mi bancada, el doctor Marcelo Guinle, que fueron muy interesantes y sirvieron para el dictamen definitivo que tenemos en las bancas, con algunas correcciones que me parecen muy interesantes. También quiero destacar el aporte del doctor Marcelo Saín, un hombre formado en el proceso de capacitación desde la experiencia de la seguridad en la Argentina. Siempre digo —y creo que también tomo de él una frase— que hace falta formar especialistas en esta materia —en las tareas de la seguridad y de la inteligencia— desde formación civil y conducción política, porque indudablemente pueden ocurrir cosas no deseadas, más allá del propio contenido de la ley.

Creo que la ley de inteligencia que votó el Congreso era muy buena y fue producto de un debate democrático. Lo mismo han sido las leyes de seguridad interior y de defensa. Consecuencia directa de la apertura de la democracia, fueron construcciones colectivas de la Cámara de Diputados y del Senado.

Creo que la ley de inteligencia era buena y que ésta es superadora, porque mantiene la esencia y la estructura y amplía bases de democratización, de derechos individuales y de garantías que la otra ley no contemplaba.

El aporte del CELS también me pareció muy importante, fundamentalmente en orden a la concepción del sistema de inteligencia y a los dos subsistemas que están vigentes: el de seguridad interior y el de defensa. Es un dato necesario para el país.

Me parece importante plantear la necesidad que tiene todo país, todo Estado, de tener un sistema de inteligencia que funcione, que prevenga las contingencias internas en los delitos graves y complejos como el narcotráfico, así como los delitos transnacionales. También es importante que entienda en materia de la defensa territorial del país, no solamente como ya se concibe en décadas anteriores —meramente la cuestión territorial— sino también como es hoy, con el avance tecnológico, dado que puede llegar a afectar los sistemas de un país y debilitarlo fuertemente.

El senador Fuentes, en la exposición que hizo al principio, mencionaba algunas de las cuestiones que hoy están también en el debate. No quiero volver sobre el primer tema que planteó la senadora Negre de Alonso. No me atrevería a calificar el hecho todavía. Repito lo que dije al principio: me parece que hay una tarea pendiente que la Justicia debe llevar adelante y lógicamente requiere la colaboración de los sistemas de seguridad interior para esclarecer este hecho.

Quiero destacar algo que ocurrió en el salón contiguo, el Salón Azul. Hace un ratito estuvo la doctora Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, ex mujer del fiscal Nisman, quien dijo claramente que no hay que seguir politizando este hecho, en el que todavía restan muchas cosas por despejar.

No le agregamos nada cuando hacemos valoraciones de naturaleza política o definiciones que todavía hoy la propia Justicia no nos ha dado. Así que en este sentido me parece que lo aconsejable en este ámbito, donde la palabra tiene algún valor —con todo lo relativa que es, a veces, la palabra en la Argentina—, es tener también prudencia en lo que decimos para no seguir generando escenarios de conmoción social que no son buenos para los argentinos. Todos

queremos la tranquilidad, la paz y también, por supuesto, la justicia y la verdad.

También creo que tenemos una gran deuda con los temas de la AMIA y de la embajada, de la que nadie habla y que tiene, como todos sabemos, una competencia originaria en la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a esta controvertida investigación de la causa AMIA, yo hoy mencionaba dos cosas contradictorias. En poco tiempo va a empezar un juicio por encubrimiento de la pista siria y hace pocos días, en enero, el fiscal Nisman denunció a la presidenta por encubrimiento de la línea iraní. Entonces, hay una serie de incongruencias que son subjetivas y que resultan difíciles de explicar al conjunto de la sociedad, que a veces tiene muy poco nivel de información.

¿Por qué digo que reflejan contradicciones? Porque, si hay un conjunto de personas que van a ser juzgadas por encubrir una supuesta pista siria, es incongruente que en estos diez años no se haya avanzado en nada en la investigación que realizaba la fiscalía especial precisamente en esa pista que ha dado el motivo para que se procesara y se llevara a juicio oral a ex funcionarios públicos importantes, de la talla del ex-presidente Carlos Menem. Por su parte, el juez de la causa y los fiscales, que eran colaboradores y trabajaban junto al fiscal Nisman, eran los titulares de la causa. Me estoy refiriendo a los fiscales Barbaccia y Eamon Mullen.

Entonces, la historia tiene muchas miradas. No me atrevería a ser tan intransigente en la mía.

Reivindico la decisión soberana de la presidenta, como representante de las relaciones exteriores del país, de firmar un tratado en la búsqueda de la verdad. ¿Que se buscaba, qué se proyectaba? La posibilidad de allanar la declaración indagatoria de estos cuatro o cinco imputados iraníes que nunca iban a venir al país. También está el tema de la conformación de una comisión de la verdad, cuyo texto hay que volver a leer porque se trataba de juristas connotados a nivel internacional, ninguno de los cuales pertenece a uno o ambos países involucrados en el hecho.

Les recuerdo que Libia, país en su momento calificado como terrorista, hizo un acuerdo internacional en el famoso caso Lockerbie.

Hablamos del juzgamiento en un tercer país. Hay alternativas y opciones en la necesidad de encontrar la respuesta a la demanda de justicia de las víctimas. Ese hecho había ocurrido en Escocia. Era un avión de Lockerbie. Fue una bomba puesta supuestamente por terroristas libios. Kadhafi reconoció las indemnizaciones a los familiares y determinó también el juzgamiento de esos presuntos autores del hecho en Holanda: y fueron condenados. Así que me parece que podrían haberse elaborado otras opciones.

Recuerdo cuando la presidenta vino el año pasado y dijo que el memorándum no había conseguido sus objetivos, que no había habido la respuesta esperada. Lo dijo claramente el 1° de marzo. Dijo: “Espero que me transmitan opciones, busquemos un camino para salir”. Lo dijo con mucha precisión el 1° de marzo de 2014.

Las alertas rojas nunca se levantaron.

¿Qué hay en la causa de la denuncia? Hay algunas escuchas patéticas de dos personajes lamentables y patéticos. Lo quiero decir porque lo siento de esta manera. Son vendedores de humo los dos. Uno vendía supuesta influencia en el Estado iraní y el otro una supuesta influencia, que no tenía, en el marco de las relaciones exteriores de la Nación. La verdad, patético. Si uno escucha eso advierte que no tiene ningún tipo de consistencia.

Hay un diálogo muy interesante...

Sra. Negro de Alonso. – Pero viajaba en el avión de la presidenta.

Sr. Pichetto. – Nunca viajó con la presidenta.

Hay un diálogo muy interesante donde uno de los que menciono dice: “¿Te enteraste? Se firmó en Addis Abeba el acuerdo, el memorándum”. Y el otro contesta: “Sí, está en todas las páginas de los diarios. ¿No los leíste?”. Entonces, el primero contesta: “No, estoy en el interior, en un campo”. Dice algunas otras cosas. Esto indica el patetismo de determinados personajes que rondan la periferia y que no tienen ningún valor desde el punto de vista del compromiso de un gobierno que ha tenido decisión permanente de buscar la verdad y de lograr que esta causa se esclarezca.

Quiero decir lo siguiente, dejando de lado la historia; aunque algún día, si quieren, la podemos revisar más en profundidad.

Creo que el Congreso ha votado ese memorándum con la convicción de que entendíamos iniciar un camino para ver si podíamos destrabar la investigación. Este ha sido por lo menos mi espíritu, mi visión y la de todos mis compañeros que acompañaron esta decisión; y la de la propia presidenta, quien también trabajó con las mejores intenciones. Ninguno de los supuestos que se plantearon en esta temática: intercambio de granos, petróleo... Les recomiendo leer —como reflexión y para no hablar mal de nadie, pero también forma parte de la historia cómo se comportan algunos efectores de la política pública en la Argentina cuando van a predicar a la embajada, se ponen de rodillas y hablan mal de nuestro país— dos libros muy interesantes de un sociólogo que recopiló todas los wikileaks de Assange, ese periodista que hoy está alojado en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Son muy interesantes; uno se llama Argenleaks y el otro Politileaks.

Lamentablemente, la dependencia, la relación de subordinación con organismos internacionales extranjeros, con organismos de inteligencia extranjeros, con el esquema de la relación de la embajada como madre indicadora de acciones, es lamentable. Como son lamentables también las expresiones de algunos políticos cuando van a hablar a la embajada, quienes terminan hablando mal del gobierno y de la presidenta y no tienen la valentía de decirlo públicamente. Lo hacen para quedar bien con la embajada. Recomendando los libros, son imperdibles. También, en la parte de la letra “N”, hay un capítulo que se llama “Capítulo Nisman”. Es importante porque además es objetivo; son los cables que desde la embajada, después de las charlas, se enviaban...

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, senador Pichetto?

Sr. Pichetto. — No voy a dar ninguna interrupción, senador. Además, no estoy diciendo nada...

Sr. Presidente. — Es el cierre del debate, senador.

Sr. Pichetto. — ...que no sea objetivo.

Bueno, lo escucho, senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Nosotros no hemos ido a la embajada.

Sr. Presidente. — No hizo una alusión personal a ustedes.

Sr. Rodríguez Saá. — No es personal, pero los únicos que estamos somos nosotros.

Sr. Pichetto. — Lo clarifico.

Sr. Presidente. — Por favor, senador Pichetto, clarifique.

Sr. Pichetto. — Senador Rodríguez Saá, usted sabe que tengo por usted un gran respeto.

Además, lo consideré siempre un hombre probo, que ha defendido el interés nacional. Por lo tanto, lo que digo es que si usted analiza los libros, ahí verá a algunos actores de la política y del mundo judicial que son retransmitidos por los cables del sistema que tiene la embajada con Estados Unidos. Esos cables fueron obtenidos de manera, digamos, un poco compleja por este periodista Assange y esto está reproducido en lo que se llama el “capítulo argentino”, escrito por un hombre serio. Incluso, dice que en un momento determinado trató de publicar esta información de los cables en los diarios donde él trabajaba, y no la publicaron. El propio diario *Página/12* no se la publicó.

Lo que le quiero decir es que son dos piezas de investigación periodística objetivas y reales que plantean, indudablemente, un análisis de cómo funcionan algunos mecanismos en el grado de subordinación, la situación de la embajada norteamericana, los organismos de inteligencia, etcétera. Planteo esto sin ánimo de ofender a nadie, y de ninguna manera pienso eso de ustedes.

Finalmente, para concluir mi cierre, quiero decir que se han logrado incorporar algunas modificaciones, que están en el dictamen. Está el dictamen original y está el dictamen definitivo, que lo tienen cada uno de los senadores en sus bancas. Me voy a referir a los principales temas, no quiero aburrir. También quiero decir que se ha completado el trámite de la opinión de la Bicameral, porque toda reforma de la ley de inteligencia en la Argentina tiene que tener la opinión favorable de dicha instancia; y hay una opinión mayoritaria favorable de la Comisión de Inteligencia. También quiero decir, en aras de abordar los temas con cierta seriedad, que no conozco ningún país del mundo, incluso de avanzada, desarrollado, en el que la Comisión de Inteligencia no esté controlada por la mayoría parlamentaria. Que tendríamos que construir una cultura de preparación y de formación en

este tema e, indudablemente, también trabajar con profundidad y, en algunos casos, citar al representante y hacer audiencias públicas, eso forma parte de la deuda que tenemos y debemos asumirla con autocrítica, porque ha habido distintas etapas durante la vigencia de la Bicameral en las que nosotros tampoco tuvimos la mayoría, como en los períodos 2009 y 2011. No pongo la mala intención en nadie; simplemente, digo que quizá todos hemos fallado en esta materia de profundizar o de mejorar los sistemas de control.

Voy a los temas centrales de la reforma. El texto del artículo 3° queda de la siguiente manera: “Sustitúyase el inciso 1 del artículo 4° de la ley 25.520, por el siguiente texto: ‘1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales. Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado—esto me parece realmente muy importante; éste es un logro interesante desde el punto de vista de cuándo van a ser los servicios de inteligencia colaboradores del sistema judicial—realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes’”.

En cuanto al artículo 7°, la redacción queda de la siguiente manera: “Incorpórense como párrafos 3 y 4 del artículo 9° de la ley 25.520 los siguientes:”. Antes decía: “Sustitúyese el artículo 9° de la ley 25.520 por el siguiente texto:”. Y se incorpora el artículo 38 bis como artículo 8° nuevo.

Respecto de la Agencia Federal de Inteligencia, antes se establecía un plazo de 90 días para su constitución; en el nuevo dictamen se establece un plazo de 120 días.

Con relación al secreto, antes eran cinco supuestos: secreto, estrictamente secreto y confidencial, secreto, confidencial y público. Ahora quedan tres supuestos: secreto, confidencial y público. Y también hay una serie de mejoras en el dictamen definitivo.

Con respecto al plazo de desclasificación, en el proyecto original eran 25 años; ahora ha quedado en 15 años. Se incorpora un texto, muy importante, que plantea: “Toda persona u organización que acredite interés legítimo,

podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo nacional, destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos o material, que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el sistema de inteligencia. La forma, plazos y vías administrativas serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo”. También se mantiene la prerrogativa de la presidenta de desclasificar. O sea que esto me parece importante.

El artículo 17 menciona claramente el artículo 16 de la presente ley como texto nuevo.

En el artículo 19 hay dos temas que tienen que ver con los gastos reservados. El artículo 38 bis establece: “Las partidas presupuestarias de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que el Poder Ejecutivo nacional determine en ocasión del envío al Honorable Congreso de la Nación de la Ley Anual de Presupuesto Nacional, serán públicas y deberán cumplir con las provisiones establecidas en la Ley de Administración Financiera 24.156...”, el concepto del carácter público de las partidas. Los organismos del Sistema de Inteligencia deberán velar por la mayor transparencia en la administración de los fondos de carácter reservado. Hay fondos reservados para operaciones que se califican como reservadas; si no, indudablemente sería imposible el funcionamiento de cualquier sistema.

Omití el artículo 21, que dice: “Sustitúyese el artículo 43 de la ley 25.520 por el siguiente texto”, y se establecen las penas.

Asimismo, el artículo 21 de la ley 25.520 quedaría redactado de la siguiente manera: “Transfíerese al ámbito de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera previsto en la Sección Cuarta de la Constitución Nacional, la Dirección de Observaciones Judiciales...”.

Éste es un tema que se ha debatido. Yo creo que no hay que confundir lo que es el Ministerio Público con la persona que hoy está a cargo. Indudablemente, las personas pasan y las estructuras y los organismos permanecen en el tiempo. Me parece que es un error—un grave error—hacer desvalorizaciones en orden a la actual representante del Ministerio Público. Por supuesto, las únicas escuchas que se permiten son las ordenadas por los jueces. Después, colocarla en la Corte, indudablemente implicaría

un aumento de competencias, las cuales están definidas por la Constitución. La Corte tiene competencia originaria e, indudablemente, no se le puede cargar una tarea que no está prevista en la Constitución. Por otra parte, la Corte también podría tener que valorar en algún momento, en alguna instancia, las pruebas producidas por alguna escucha.

En cuanto al artículo 18, se incorpora el concepto de secreto, confidencial y público, reservado, confidencial, secretos de acceso limitado o restringido al público.

Hay algo importante en el 24, que dice: “Disuélvase la Secretaría de Inteligencia y transfírase la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de los bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales”. O sea que todo lo que es OJ pasa al Ministerio Público. “La Procuración General de la Nación del Ministerio Público podrá solicitar en comisión de servicios el personal necesario de la Agencia Federal de Inteligencia para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto el mismo cuente con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones”.

Hay dos artículos importantes en las disposiciones transitorias, que son el 27 y el 28. Por este último se faculta al secretario de Inteligencia, durante el plazo previsto en el artículo 8º de esta ley, a disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios. A tal efecto, el haber jubilatorio se calculará sobre el total del haber percibido en el último mes de trabajo.

El artículo 27 hace referencia a todos aquellos artículos de la ley 25.520 que no hubieren sufrido modificación por la presente ley y de aquellas normas que hagan mención al organismo disuelto, su competencia o sus autoridades, se considerarán hechas a la Agencia Federal de Inteligencia, su competencia o sus autoridades, respectivamente.

Repito: hemos cumplido con el trámite, con el dictamen, y hemos tenido la opinión favorable de la Comisión de Inteligencia. Pido que votemos el dictamen reformado, con los aportes que

se han hecho —como mencioné al principio— por senadores de mi bloque, por el doctor Saín, que estuvo trabajando con nosotros intensamente, por el CELS y por el propio Poder Ejecutivo en orden a las valoraciones y a las explicaciones dadas en el ámbito de la sesión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores que conducen los senadores Fuentes y Guastavino.

Con estos fundamentos, presidente, pido que se vote en general y particular en una sola votación.

Sr. Presidente. — Habiendo escuchado el debate, propongo que hagamos una sola votación en general y en particular dadas las distintas exposiciones que se escucharon.

Si no hay ningún...

Sr. Pichetto. — Sobre el dictamen reformado.

Sr. Presidente. — Sobre el dictamen corregido; o sea, sobre el dictamen final que obra sobre las bancas de las senadoras y senadores.

Podemos proceder a la votación.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos afirmativos y 7 votos negativos.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.⁴

Sr. Presidente. — Queda sancionado. Pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.⁵

7

TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sr. Presidente. — Corresponde el tratamiento de dos tratados internacionales con la hermana República de Chile. Yo propongo que, más allá de las exposiciones, hagamos una sola votación para ambos tratados.

Se trata del túnel internacional Paso de Agua Negra y del túnel para el Ferrocarril Trasandino Central.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

Sr. Pichetto. – Entonces, ¿viernes, 16 horas?

Sr. Presidente. – En principio, el viernes a las 16 horas; quizás, el horario pueda ser modificado, pero ese día se realizará la sesión.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – El día viernes.

Sr. Pichetto. – Viernes a la tarde.

Sr. Presidente. – Exactamente.

Muy bien, muchas gracias.

No habiendo otro tema por tratar, queda levantada esta sesión especial.

–Son las 17 y 5.

JORGE A. BRAVO.

Director General de Taquígrafos.

9

APÉNDICE

I CONVOCATORIA

Buenos Aires, 28 de enero de 2015.

En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional.

La presidenta de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º – Convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 1º hasta el 28 de febrero de 2015.

Art. 2º – Decláranse asuntos comprendidos en la convocatoria, los detallados en el Anexo que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Decreto 137

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Jorge M. Capitanich.

TEMAS PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN

–Consideración de acuerdo para designaciones y promociones.

–Consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales.

–Creación de la Agencia Federal de Inteligencia.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los términos del artículo 19 del Reglamento de este Ho-

norable Senado, a efectos de solicitarle tenga a bien convocar a sesión especial, a celebrarse el día 12 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el siguiente temario:

–Dictamen en el expediente P.E.-431/14, mensaje 143/15 y proyecto de ley creando la Agencia Federal de Inteligencia.

–Dictamen en el expediente P.E.-417/14, mensaje 2.577/14 y proyecto de ley aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile relativo a la entidad binacional para el Proyecto “Túnel de baja altura-Ferrocarril Trasandino Central” suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 23 de diciembre de 2014.

–Dictamen en el expediente P.E.-416/14, mensaje 2.576/14 y proyecto de ley aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile relativo al proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra” suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 23 de diciembre de 2014.

Sin otro particular, saludamos al señor presidente con atenta consideración.

Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo J. Fuentes. – Marina R. Riofrío. – Miguel Á. Pichetto.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015.

VISTO:

La solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello:

El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores senadores para celebrar sesión pública especial el día jueves 12 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar los siguientes temas:

–Dictamen en el proyecto de ley creando la Agencia Federal de Inteligencia (P.E.-431/14).

–Dictamen en el proyecto de ley aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile

relativo a la entidad binacional para el proyecto “Túnel de baja altura-Ferrocarril Trasandino Central” suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 23 de diciembre de 2014. (P.E.-417/14).

–Dictamen en el proyecto de ley aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile relativo al proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 23 de diciembre de 2014. (P. E. -416/14).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

GERARDO ZAMORA.

Juan H. Estrada.

II

ASUNTOS CONSIDERADOS

Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso, se incluyen, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado.

1

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1. Fijar los miércoles y jueves a las 15, como días y hora de sesión para el presente período extraordinario.
2. Autorizar a la Presidencia a girar a las respectivas comisiones los asuntos entrados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de febrero del año dos mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

2

(Orden del Día N° 952)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el expediente P.E-431/14, mensaje 143/15, y proyecto de ley creando la Agencia Federal de Inteligencia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia

CAPÍTULO I

De la inteligencia nacional

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 1º: La presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías.

Art. 2º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 2º de la ley 25.520, por el siguiente texto:

1. Inteligencia nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la Nación.

Art. 3º – Sustitúyase el inciso 5 del artículo 2º de la ley 25.520, por el siguiente texto:

5. Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los

organismos de inteligencia del Estado nacional, dirigidos por la Agencia Federal de Inteligencia a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

Art. 4° – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley 25.520, el siguiente texto:

Artículo 5° bis: Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. En caso de urgencia, las mismas podrán ser iniciadas, debiendo ser informadas de manera inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de inteligencia.

Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia que infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas en los términos previstos en el párrafo anterior incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad.

CAPÍTULO II

De la Agencia Federal de Inteligencia

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 7°: La Agencia Federal de Inteligencia será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y dirigirá el mismo, abarcando los organismos que lo integran.

Art. 6° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 9°: Transfíranse a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, referidas a las actividades de inteligencia relativas a los delitos federales complejos y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Las áreas de inteligencia criminal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, y el personal que revistare en las mismas deberán observar las previsiones normativas establecidas en la presente ley, en especial las establecidas en los artículos 4° incisos 2, 3 y 4, 5, 5 bis, 11, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter, 16 quinquies, 16 sexies y 17.

Art. 8° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 15: Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la Agencia Federal de Inteligencia como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, que será conducida por un director general, con rango de ministro, designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

También contará con un subdirector general, con rango de secretario de Estado que será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.

La Agencia Federal de Inteligencia deberá quedar constituida en el plazo de noventa (90) días.

Art. 9° – Incorpórase como artículo 15 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 15 bis: Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley, sólo podrán ser ejercidas por el director general o el subdirector general o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad.

El incumplimiento de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasibles de responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho incumplimiento.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 15 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 15 ter: Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, cualquiera sea su situación de revista permanente o transitoria, estará obligado a presentar las decla-

raciones juradas de bienes patrimoniales establecidas por la ley 25.188 (Ley de Ética Pública) y su modificatoria, ley 26.857.

Las oficinas encargadas de la recepción de las mismas adoptarán todos los recaudos necesarios para no violar el secreto, la confidencialidad o la reserva, sólo en relación a las identidades de los declarantes, según corresponda.

CAPÍTULO III

De la información, archivos de inteligencia y desclasificación

Art. 11. – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 bis: Se establecen las siguientes clasificaciones de seguridad, que serán observadas por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional:

- a) *Estrictamente secreto y confidencial*: Aplicable a toda información, documento o material que esté exclusivamente relacionado con la organización y actividades específicas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional;
- b) *Secreto*: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación;
- c) *Confidencial*: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del Estado;
- d) *Reservado*: Aplicable a toda información, documento o material que, no estando comprendidos en las categorías anteriores, no convenga a los intereses del Estado que su conocimiento trascienda fuera de determinados ámbitos institucionales y sea accesible a personas no autorizadas;
- e) *Público*: Aplicable a toda documentación cuya divulgación no sea perjudicial para los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 16 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 ter: Para cada grado de clasificación de seguridad se dispondrá un plazo para la desclasificación y acceso a la información.

Las condiciones del acceso y de la desclasificación se fijarán en la reglamentación de la presente.

En ningún caso el plazo para la desclasificación de información, documentos o material podrá ser inferior a los 25 años a partir de la decisión que originó su clasificación de seguridad efectuada por alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores y la reglamentación respectiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 16 quáter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 quáter: Los organismos de inteligencia enmarcarán sus actividades inexcusablemente dentro de las prescripciones generales de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326. El cumplimiento de estas disposiciones será materia de directivas y controles por parte del titular de cada organismo integrante del Sistema de Inteligencia Nacional en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

La revelación o divulgación de información respecto de habitantes o personas jurídicas, públicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio de sus funciones, requerirá sin excepción de una orden o dispensa judicial.

Art. 14. – Incorpórase como artículo 16 quinquies de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 quinquies: Los organismos de inteligencia tendrán centralizadas sus respectivas bases de datos, en un banco de protección de datos y archivos de inteligencia, el que estará a cargo de un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida, mediante tareas de inteligencia.

Art. 15. – Incorpórase como artículo 16 sexies de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 sexies: Cada uno de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia tendrán los siguientes objetivos:

- a) Controlar el ingreso y la salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal;

- b) Asegurar que aquellos datos de inteligencia que, una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley, sean destruidos;
- c) Garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 17: Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad.

La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información clasificada.

La violación de este deber hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el libro II, título IX, capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

CAPÍTULO IV

De la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 21: Transfírase al ámbito del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera previsto en la Sección Cuarta de la Constitución Nacional, la Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

CAPÍTULO V

Del control de los fondos

Art. 18. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 32: Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervi-

sados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite.

Con la finalidad de la mayor transparencia en la utilización de los fondos se establecerán mecanismos de control adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista, compatibles a su clasificación de reservados, confidenciales, secretos o de acceso limitado o restringido o público de los mismos.

CAPÍTULO VI

De las penas

Art. 19. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 42: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos.

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 43 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 43: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones.

Art. 21. – Incorpórase como artículo 43 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 43 bis: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultase otro delito más severamente penado, todo funcionario o empleado público que incumpla con el artículo 15 bis de la presente ley.

Art. 22. – Incorpórase como artículo 43 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 43 ter: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.

En la misma pena incurrirán quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

TÍTULO II

Disposiciones complementarias

CAPÍTULO I

De la disolución de la Secretaría de Inteligencia

Art. 23. – Disuélvase la Secretaría de Inteligencia y transfírase la totalidad del personal, bienes, presupuestos vigentes, activos y patrimonio a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales, que serán transferidos al Ministerio Público.

Corresponderá preservar y resguardar la totalidad de los bienes y activos transferidos de la Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia.

El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley.

Hasta que el Poder Ejecutivo nacional realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes, el gasto de la Agencia Federal de Inteligencia y de la Dirección de Observaciones Judiciales será atendido con los créditos presupuestarios previstos para la Secretaría de Inteligencia en la ley 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional 2015.

CAPÍTULO II

Del nuevo personal

Art. 24. – Se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la Agencia Federal de Inteligencia estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas.

Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional.

Se deberá reglamentar un nuevo régimen del personal de inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad adecuados conforme las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Se deberán supervisar las acciones de los ex agentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia.

Art. 25. – Incorpórase como inciso w) del artículo 5º de la ley 25.188 (Ley de Ética Pública) y su modificatoria, ley 26.857, el siguiente texto:

Inciso w): Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria, estará obligado a presentar las declaraciones juradas establecidas por la ley 26.857.

TÍTULO III

Disposiciones transitorias

Art. 26. – Las referencias de los artículos 6º, 13, 18, 19, 24, 27 y 33 de esta ley y de las normas que hagan mención al organismo disuelto, su competencia o sus autoridades, se considerarán hechas a la Agencia Federal de Inteligencia, su competencia o sus autoridades, respectivamente.

Art. 27. – La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 4 de febrero de 2015.

Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath. – Marina R. Riofrio. – Walter B. Barrionuevo. – Ada del Valle Iturrez de Cappellini. – María Graciela de la Rosa. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Miguel Á. Pichetto. – Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal Medina. – Pablo G. González. – José M. Á. Mayans. – María de los Angeles Higonet.

NOTA

El mensaje 143 de fecha 29 de enero de 2015 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo se encuentran publicados en la página web del Senado.

COMISIÓN BICAMERAL
DE FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS
Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA
(Ley 25.520, Artículo 31)

Opinión de la comisión sobre el contenido del O.D.-
952/14 del Honorable Senado nacional, conforme
artículo 33, inciso 5, de la citada ley.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015.

*Opinión Cbi 01/2015:
Expediente Senado 431/15*

VISTO:

El mensaje presidencial 143/15 mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional en uso de las facultades que le confiere la Constitución Nacional en sus artículos 77 y 99, punto 3, proponiendo modificaciones al texto de la ley 25.520 de inteligencia nacional y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, y habiendo considerado el dictamen emitido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación.

CONSIDERANDO:

Que habiendo transcurrido trece años desde la sanción de la ley 25.520, resulta oportuno y necesario sancionar una ley complementaria a los efectos de optimizar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, a la luz de las experiencias recogidas por los gobiernos que se sucedieron desde la fecha de su promulgación el 3 de diciembre de 2001.

Que el proyecto de ley emitido por el Poder Ejecutivo nacional impulsa modificaciones sustantivas al marco normativo del Sistema de Inteligencia Nacional, (ley 25.520 y normativa complementaria), el cual ha sido enriquecido con el dictamen de referencia donde queda claramente establecida la reformulación del sistema de inteligencia nacional respetando la diferenciación entre inteligencia militar e inteligencia criminal ya previstas en la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.

Que producto de estas reformas se impulsa:

- La creación de la Agencia Federal de Inteligencia AFI.
- La disolución de la Secretaría de Inteligencia SI.
- El traspaso de producción de inteligencia criminal compleja, actualmente bajo la competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal DNIC a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia AFI.
- La transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al Ministerio Público de la Nación.

Que se incorporan en la ley los niveles de clasificación de la información de inteligencia (actualmente previstos en el decreto reglamentario) y se estipula la temporalidad de la clasificación (la cual no podrá ser inferior a los 25 años).

Que se considera acertada la modificación incluida en el dictamen citado al concepto de inteligencia nacional, por ser más claro y preciso.

Que se propone que la designación de las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia realizada por el PEN deba contar con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, lo cual contribuirá a la concreción de una mayor calidad institucional.

Por ello, en ejercicio de las mandas impuestas por el artículo 33, punto 5, de la ley 25.520, con la mayoría dispuesta por el artículo 8, punto 4, del reglamento de funcionamiento interno de la comisión, los abajo firmante presentes en el plenario de comisión celebrado en el día de la fecha emiten la siguiente opinión:

Primero: Resulta oportuna y conveniente la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el mensaje 143/15 con las modificaciones introducidas en el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación.

Segundo: Poner en conocimiento de la presente opinión a las comisiones intervinientes en el tratamiento legislativo del proyecto en consideración.

*Miguel A. Pichetto. – María T. García.
– Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juliana di Tullio. – Gladys
B. Soto. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Juan M. Irrazábal.*

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia

CAPÍTULO I

De la inteligencia nacional

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 1º: La presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías.

Art. 2º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 2º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

1. Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la Nación.

Art. 3º – Sustitúyase el inciso 1 del artículo 4º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales. Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 5º bis: Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo.

En caso de urgencia, las mismas podrán ser iniciadas, debiendo ser informadas de manera inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de inteligencia.

Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia que infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas en los términos previstos en el párrafo anterior incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad.

CAPÍTULO II

De la Agencia Federal de Inteligencia

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 7º: La Agencia Federal de Inteligencia será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y dirigirá el mismo, abarcando los organismos que lo integran.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8º: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos,

riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional.

2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

Art. 7º – Incorpórense como párrafos 3 y 4 del artículo 9º de la ley 25.520 los siguientes:

Transfíranse a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, referidas a las actividades de inteligencia relativas a los delitos federales complejos y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Las áreas de inteligencia criminal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, y el personal que revistare en las mismas, deberán observar las previsiones normativas establecidas en la presente ley, en especial las establecidas en los artículos 4º incisos 2, 3 y 4, 5, 5 bis, 11, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter, 16 quinquies, 16 sexies, 17 y 38 bis.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 15: Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la Agencia Federal de Inteligencia como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, que será conducida por un director general, con rango de ministro, designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

También contará con un subdirector general, con rango de secretario de Estado que será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.

La Agencia Federal de Inteligencia deberá quedar constituida en el plazo de ciento veinte (120) días.

Art. 9º – Incorpórase como artículo 15 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 15 bis: Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios

o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el director general o el subdirector general o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad.

El incumplimiento de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho incumplimiento.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 15 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 15 ter: Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, cualquiera sea su situación de revista permanente o transitoria, estará obligado a presentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales establecidas por la ley 25.188 (Ley de Ética Pública) y su modificatoria ley 26.857.

Las oficinas encargadas de la recepción de las mismas adoptarán todos los recaudos necesarios para no violar el secreto, la confidencialidad o la reserva, sólo en relación a las identidades de los declarantes, según corresponda.

CAPÍTULO III

De la información, archivos de inteligencia y desclasificación

Art. 11. – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 bis: Se establecen las siguientes clasificaciones de seguridad que serán observadas por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional:

- a) *Secreto*: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos; la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones diplomáticas de la Nación; y las actividades de inteligencia específicamente determinadas y fundadas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional;
- b) *Confidencial*: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales

de los poderes del Estado, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos; la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones diplomáticas de la Nación;

- c) *Público*: Aplicable a toda documentación cuya divulgación no sea perjudicial para los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 16 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 ter: Para cada grado de clasificación de seguridad se dispondrá un plazo para la desclasificación y acceso a la información.

Las condiciones del acceso y de la desclasificación se fijarán en la reglamentación de la presente.

En ningún caso el plazo para la desclasificación de información, documentos o material podrá ser inferior a los quince (15) años a partir de la decisión que originó su clasificación de seguridad efectuada por alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Toda persona u organización que acredite interés legítimo, podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo nacional, destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos o material, que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. La forma, plazos y vías administrativas serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores y la reglamentación respectiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 16 quáter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 quáter: Los organismos de inteligencia enmarcarán sus actividades inexcusablemente dentro de las prescripciones generales de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326. El cumplimiento de estas disposiciones será materia de directivas y controles por parte del titular de cada organismo integrante del Sis-

tema de Inteligencia Nacional en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

La revelación o divulgación de información respecto de habitantes o personas jurídicas, públicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio de sus funciones, requerirá sin excepción de una orden o dispensa judicial.

Art. 14. – Incorpórase como artículo 16 quinquies de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 quinquies: Los organismos de inteligencia tendrán centralizadas sus respectivas bases de datos, en un banco de protección de datos y archivos de inteligencia, el que estará a cargo de un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida, mediante tareas de inteligencia.

Art. 15. – Incorpórase como artículo 16 sexies de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 16 sexies: Cada uno de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia tendrán los siguientes objetivos:

- a) Controlar el ingreso y la salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal;
- b) Asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos;
- c) Garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 17: Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo 16 de la presente ley deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad.

La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información clasificada.

La violación de este deber hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el libro II, título IX, capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

CAPÍTULO IV

De la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 21: Transfírase al ámbito de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera previsto en la sección cuarta de la Constitución Nacional, la Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

CAPÍTULO V

Del control de los fondos

Art. 18. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 32: Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, los Tratados de derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.

La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la comisión solicite.

Con la finalidad de la mayor transparencia en la utilización de los fondos se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista, compatibles a su clasificación de secreto, confidencial y público.

CAPÍTULO VI

De los fondos de los organismos de inteligencia

Art. 19. – Incorpórase como artículo 38 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 38 bis: Las partidas presupuestarias de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que el Poder Ejecutivo nacional determine en ocasión del envío al Honorable Congreso de la Nación de la Ley Anual de Presupuesto Nacional, serán públicas y deberán cumplir con las previsiones establecidas en la Ley de Administración Financiera 24.156. Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas. Dichos fondos estarán sometidos a los controles de la presente ley.

Los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán velar por la mayor transparencia en la administración de los fondos de carácter reservado. A tal fin establecerán los procedimientos necesarios para la adecuada rendición de los mismos y la preservación de la documentación respaldatoria que sea posible, siempre y cuando no afecte la seguridad de las actividades propias de la función de inteligencia y quienes participen de las mismas.

CAPÍTULO VII

De las penas

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 42: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que, participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos.

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 43 de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 43: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permi-

ta acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones.

Art. 22. – Incorpórase como artículo 43 bis de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 43 bis: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, todo funcionario o empleado público que incumpla con el artículo 15 bis de la presente ley.

Art. 23. – Incorpórase como artículo 43 ter de la ley 25.520 el siguiente:

Artículo 43 ter: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años, e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.

Incurrirán en el mismo delito quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que realicen acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.

TÍTULO II

Disposiciones complementarias

CAPÍTULO I

De la disolución de la Secretaría de Inteligencia

Art. 24. – Disuélvase la Secretaría de Inteligencia y transférase la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de los bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales, que serán transferidos a la Procuración General de la Nación del Ministerio Público.

La Procuración General de la Nación del Ministerio Público podrá solicitar en comisión de servicios el personal necesario de la Agencia Federal de Inteligencia para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto el mismo cuente con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones.

Corresponderá preservar y resguardar la totalidad de los bienes y activos transferidos de la Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia.

El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley.

Hasta que el Poder Ejecutivo nacional realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes, el gasto de la Agencia Federal de Inteligencia y de la Dirección de Observaciones Judiciales será atendido con los créditos presupuestarios previstos para la Secretaría de

Inteligencia en la ley 27.008 de presupuesto general de la administración nacional 2015.

3

CAPÍTULO II

Del nuevo personal

Art. 25. – Se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la Agencia Federal de Inteligencia estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas.

Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional.

Se deberá reglamentar un nuevo régimen del personal de inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad adecuados conforme las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Se deberán supervisar las acciones de los ex agentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia.

Art. 26. – Incorpórase como inciso w) del artículo 5º de la ley 25.188 (Ley de Ética Pública) y su modificatoria ley 26.857 el siguiente texto:

w): Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria estará obligado a presentar las declaraciones juradas establecidas por la ley 26.857.

TÍTULO III

Disposiciones transitorias

Art. 27. – Las referencias de todos aquellos artículos de la ley 25.520, que no hubieren sufrido modificación por la presente ley y de aquellas normas que hagan mención al organismo disuelto, su competencia o sus autoridades, se considerarán hechas a la Agencia Federal de Inteligencia, su competencia o sus autoridades, respectivamente.

Art. 28. – Facúltase al secretario de inteligencia, durante el plazo previsto en el artículo 8º de esta ley, a disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios. A tal efecto, el haber jubilatorio se calculará sobre el total del haber percibido en el último mes de trabajo.

Art. 29. – La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Orden del día N° 953

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 2.576/14, y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación con la República de Chile, relativo al proyecto ‘Túnel Internacional Paso de Agua Negra’ suscrito en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 23 de diciembre de 2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de febrero de 2015.

Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María de los Angeles Higonet. – Beatriz L. Rojkes de Alproovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro. G. A. Guastavino. – Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel Rozas. – Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Gabriela Michetti.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Apruébase el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile relativo al proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, suscrito en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 23 de diciembre de 2014, que consta de treinta y cuatro (34) artículos y tres (3) anexos*, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Jorge M. Capitanich.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la Repú-

* A disposición de los señores senadores en la página web del Senado.

III

ACTAS DE VOTACIÓN

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2

Miembros del cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU Amado

LEGISLADORES PRESENTES

Votación: NOMINAL



de la Nación Argentina

Fecha: 12/02/2015 16:58:39

Acta : 1

Presentes: 45	Ausentes: 27	AMN: 23
---------------	--------------	---------

Afirmativos:	38
Negativos:	7
Abstenciones:	0
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Alba Medina, Juan Manuel	SI	14	Latorre, Roxana Itati	SI	61
Aguar, Eduardo Alberto	SI	54	Leguizamón, María Laura	SI	37
Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	Linares, Jaime	AUSENTE	
Arlaza, Eugenio Justiniano	AUSENTE		Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	Mansilla, Sergio Francisco	SI	55
Bustakio, Roberto Gustavo	NO	40	Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
Bormeje, Rolando Adolfo	SI	17	Martínez, Alfredo Anselmo	AUSENTE	
Bortone, Fosana Andrea	SI	52	Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
Bias, Inés I.	SI	28	Meabe, Josefina Angelica	AUSENTE	
Bonello, Marta	AUSENTE		Menem, Carlos Salvador	AUSENTE	
Calbra, Salvador	SI	40	Michetti, María Gabriela	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	AUSENTE		Monlau, Blanca María del Valle	AUSENTE	
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Montenegro, Gerardo Adolfo	SI	64
Cimacivila, Mario Jorge	AUSENTE		Montero, Laura Gisela	AUSENTE	
Cresali, Carmen Lucila	SI	69	Morales, Gerardo Rubén	AUSENTE	
De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		Morandini, Natalia Elena	AUSENTE	
De la Rosa, María G.	SI	18	Negre de Olonzo, Liliana Teresita	NO	39
Di Perna, Graciela Agustina	NO	55	Odagón, María Magdalena	AUSENTE	
Elias de Perez, Silvia Beatriz	AUSENTE		Pereyra, Guillermo Juan	NO	68
Felipe, Liliana Beatriz	SI	37	Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
Flores Valiales, María Cristina del Valle	AUSENTE		Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	AUSENTE	
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
García Laraburu, Silvina Marcela	SI	51	Pilatti Vergara, María Inés Patricia	SI	62
Garramilla, Jorge Alberto	AUSENTE		Reutemann, Carlos Alberto	NO	60
Giménez, Sandra D.	SI	57	Riofrío, Marina Raquel	SI	33
Gustonián, Rubén Héctor	AUSENTE		Rodríguez Saá, Adolfo	NO	38
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkes de Alperovich, Beatriz Liliana	SI	13
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Gustavino, Pedro Guillermo Ángel	SI	32	Romero, Juan Carlos	NO	19
Gutiérrez, Marcelo Alejandro Horacio	SI	35	Rozas, Ángel	AUSENTE	
Higonet, María de Los Angeles	SI	58	Santilli, Diego César	AUSENTE	
Hraizba, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	AUSENTE	
Hurtado Cappellini, Adin Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
Iñez, Luis Alfredo	AUSENTE		Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kanich, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	AUSENTE	
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29

IV

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

El proyecto que se trata contiene modificaciones a la ley 25.520, de inteligencia nacional, mediante la sustitución de parte de sus artículos y la incorporación de nuevas disposiciones.

Cabe recordar que dicha ley se encuentra vigente desde 2001 y fue la primera que publicó la organización del sistema de inteligencia, esto es, su estructura y funciones, dado que el contenido de las anteriores normas que regulaban estas cuestiones era secreto.

Es un cambio relevante de uno de los temas centrales de nuestro sistema democrático y sus instituciones fundamentales, que requiere un fuerte apoyo político de los distintos sectores que lo integran.

Puntualmente, el proyecto de ley en debate mantiene en lo sustancial el esquema de regulación contenido en la mencionada ley, advirtiéndose que las modificaciones propuestas involucran la voluntad de obtener un mejoramiento de ese ordenamiento y, a la vez, del funcionamiento de los organismos de inteligencia.

Con relación a ello, deviene de interés hacer un análisis de los principales aspectos de las modificaciones propuestas, las cuales pueden ser agrupadas de la manera que seguidamente se expresa.

En primer lugar, corresponde señalar la modificación propuesta al artículo 1°, con la finalidad de otorgar un marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, ampliando la sujeción de estos, que incluye no sólo a la Constitución Nacional, sino también a los tratados de derechos humanos y a las normas que establecen derechos y garantías. Es decir, sujeta la actividad de los organismos de inteligencia al bloque de constitucionalidad.

Ello de manera armónica con otras disposiciones de la ley como los artículos 3° y 32, que procuran reafirmar que el funcionamiento de los organismos que desarrollan aquellas actividades debe observar y respetar estrictamente las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional y demás normas mencionadas.

Se modifica el inciso 1 del artículo 2°, con el objeto de efectuar una precisión terminológica en cuanto al alcance de la previsión de las actividades de inteligen-

cia nacional, adecuando su concepto a las disposiciones que contienen la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior de la Nación.

También se debe señalar que en el inciso 1 del artículo 4° se consagra que en los casos de actuación de los organismos de inteligencia en funciones de investigación criminal ante el requerimiento de autoridad judicial, serán aplicables las reglas procesales correspondientes, lo cual involucra una específica limitación para aquellos.

Se incorpora además el artículo 5° bis, que también consagra expresamente limitaciones para las actividades de inteligencia, las cuales sólo podrán ser ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo.

En relación con lo anterior, excepcionalmente se establece que, en caso de urgencia, tales actividades podrán ser iniciadas por otros funcionarios de los organismos, debiendo ser informadas de manera inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de inteligencia.

También la norma prevé la sanción en caso de incumplimiento de lo aquí establecido, aclarando expresamente que “la obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”.

Se trata de limitaciones de orden funcional, las cuales se estima que es adecuado que estén expresamente consagradas en la ley marco que regula la materia de que se trata, toda vez que de esa manera quedan establecidas como principios rectores de las actividades de inteligencia, lo que debe servir para evitar abusos y excesos que, se señala, existen en la práctica.

Se modifica el artículo 7°, disponiéndose la creación de la Agencia Federal de Inteligencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, en sustitución de la actual Secretaría de Inteligencia.

Se sustituye también el artículo 8°, consagrándose la funciones de la AFI en dos incisos. Se precisa que se refieren a la producción de inteligencia nacional frente a riesgos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema. En el inciso 2, se le otorgan facultades de producción de inteligencia criminal referida a delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y que atenten contra el orden económico y financiero, así como a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

Para cumplir con dicha finalidad, en la propuesta del artículo 9° se dispone la transferencia a la nueva agencia de las competencias y del personal de la actual Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en lo que

resulte necesario para el desarrollo de las actividades de inteligencia vinculadas a los delitos federales complejos y a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

En este mismo artículo y con el propósito de hacer aplicables las nuevas limitaciones previstas, se añade un segundo párrafo que las traslada a las demás áreas que realizan tareas de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad. Con esto queda plasmado un reclamo que se planteó en los debates previos, que implica otorgar a las nuevas limitaciones un alcance comprensivo de los diversos organismos que realizan inteligencia.

Mediante el artículo 24 del proyecto se dispone la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la transferencia de la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la nueva agencia.

En el mismo sentido, en el artículo 25, en lo referente a la organización e impronta que debe tener el organismo que se crea, se establece que la nueva agencia deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso del personal mediante criterios de transparencia, como también la necesidad de fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes. Se incorpora el deber de supervisar las acciones de los exagentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia.

En el párrafo tercero del mismo artículo se detalla con precisión la necesidad de reglamentar un nuevo régimen del personal de inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad adecuados, conforme a las tareas por desarrollar. Ello resulta razonable en atención a que no todo el personal que reviste en la AFI tendrá el mismo nivel de reserva de identidad.

Conforme el propiciado artículo 15, la nueva agencia es el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, quedando su conducción a cargo de un director general y de un subdirector general, ambos designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Senado de la Nación.

Debe destacarse como modificación relevante lo relativo a la forma de designación del director general y del subdirector general, para los cuales se requiere el acuerdo del Senado de la Nación. Al respecto, debe señalarse que esa exigencia conlleva una mayor participación de orden republicano en la designación del máximo funcionario del que será el organismo superior del sistema de inteligencia, tanto por la participación que tienen en el Senado de la Nación las diversas representaciones políticas, como también por la intervención que a través de aquél tienen las provincias.

Asimismo, en su puesta en funcionamiento el funcionario a cargo deberá asumir la responsabilidad funcional y política de conseguir un mayor apego a las nuevas limitaciones que se consagran.

Al respecto, también cabe mencionar las disposiciones de los nuevos artículos 15 bis y 15 ter. A través del primero se contempla que toda relación o actuación

entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales sólo podrán ser ejercidas por el director general, el subdirector general o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad, consagrando la nulidad de lo actuado y la responsabilidad disciplinaria, penal y civil en caso de incumplimiento a ello. En el artículo 15 ter se establece la obligatoriedad de todo el personal de los organismos de inteligencia de presentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales que dispone el artículo 5º y subsiguientes de la ley 25.188, de ética pública, y que reproduce parcialmente la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Mediante este último instrumento, los Estados parte convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer, en lo que aquí atañe, “sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas, y la publicación de tales declaraciones, cuando corresponda”.

En forma concordante, entre los diversos deberes de carácter ético que enuncia la Ley de Ética Pública, los artículos 5º y subsiguientes disponen la obligación de presentar en forma detallada un régimen de declaraciones juradas patrimoniales, las cuales deben ser publicadas en el Boletín Oficial, pudiendo los particulares tener acceso al contenido de ellas.

Se trata en ambos casos de limitaciones que procuran ordenar el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Se estiman adecuadas tales limitaciones, destacando al respecto lo señalado por funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que expusieron sobre el proyecto, en orden a procurar tener herramientas para superar defectos y desviaciones que existen actualmente, en particular la actuación de agentes de inteligencia en forma individual y otras prácticas ilegales.

Se agregan como nuevos los artículos 16 bis, 16 ter, 16 quáter, 16 quinquies, 16 sexies y 17.

En el artículo 16 bis se establecen clasificaciones de seguridad de la información o de los documentos. Ello en función de parámetros que se consagran para cada caso y siguiendo principios para salvaguardar la información clasificada diseñados por organismos internacionales tales como la OTAN y la Unión Europea. Asimismo, tal clasificación se adecua a las previsiones del artículo 23, inciso 2, de la Ley de Protección de Datos Personales, 25.326, en cuanto a la creación de bancos de datos para la defensa nacional y la seguridad pública.

En el artículo 16 ter se establece que para cada grado de clasificación de seguridad se dispondrá un plazo para la desclasificación y el acceso a la información. En forma general se consagra que en ningún caso el plazo para la desclasificación podrá ser inferior a los 15 años a partir de la decisión que originó su clasificación de seguridad. Tal modificación vinculada al plazo

resulta un cambio relevante acorde con la legislación comparada. También se prevé que el Poder Ejecutivo podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a ella por acto fundado, si lo estimare conveniente para los intereses y la seguridad de la Nación y de sus habitantes.

Asimismo, se habilita a que cualquier persona que acredite un interés legítimo pueda peticionar determinada desclasificación, lo que redundará en un mayor control ciudadano de las tareas de inteligencia del Estado.

Por su parte, en el artículo 16 quáter se establece que los organismos de inteligencia deben enmarcar sus actividades dentro de las prescripciones generales de la Ley de Protección de Datos Personales, lo cual reviste una fundamental importancia dado que una de las finalidades de esta ley es la protección integral de los datos personales asentados en bancos de datos públicos o privados para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Puntualmente, el mencionado artículo 23, inciso 2, dispone que el tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o de seguridad pública por parte de los organismos de inteligencia debe quedar limitado a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios a tal fin.

También se prevé, mediante la incorporación del artículo 16 quáter, que la revelación o divulgación de información respecto de habitantes o de personas jurídicas, públicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio de sus funciones, requerirá sin excepción de una orden o dispensa judicial, tal como ya lo dispone el artículo 4º, inciso 4.

Los artículos 16 quinquies y 16 sexies establecen que los organismos de inteligencia tendrán centralizadas sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, a cargo de un funcionario responsable. Se contemplan para ello cuáles serán los objetivos de ese banco de protección, previniéndose limitaciones a la información que deben contener.

Se incluye finalmente una sustitución del artículo 17 de la Ley de Inteligencia Nacional, norma que contempla la obligación de secreto y de confidencialidad que tienen los integrantes de los organismos de inteligencia y otros funcionarios que acceden a ese tipo de información. Se le incorpora un párrafo que consagra que esa obligación subsiste aun en el caso de que el funcionario haya cesado en las funciones en virtud de las cuales accedió a la información clasificada.

Se ha planteado respecto a estas normas que lo relativo a la clasificación de la información debe surgir directamente de la ley, toda vez que se trata de una restricción al principio general republicano de la publicidad de la información estatal, consideración que se comparte y que otorga sustento a los cambios planteados.

Además, se advierte nuevamente la consagración expresa en la Ley de Inteligencia Nacional de concretas y específicas limitaciones que deberán ser tenidas en

cuenta por quienes realicen las actividades de que se trata, lo cual constituye también una adecuada limitación legal al alcance de aquéllas, en particular en lo relativo al manejo de la información colectada.

Se sustituye el artículo 21 de la Ley de Inteligencia Nacional y se prevé que la Procuración General de la Nación del Ministerio Público será la responsable de la Dirección de Observaciones Judiciales y de sus delegaciones, como único órgano del Estado que ejecutará las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo. Cabe resaltar que se añade a la competencia de este órgano lo atinente a las captaciones, que en la práctica resultan un valioso medio para optimizar la investigación judicial.

Con relación a la modificación, se han planteado objeciones a la mencionada institución, señalándose al respecto que dicho órgano debería tener dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto, en primer lugar se debe señalar que parece adecuado sacar de la órbita de un organismo con dependencia directa del Poder Ejecutivo nacional la función de interceptación aludida. Se estima que ello es adecuado frente a los abusos que se señala que existen en la práctica, con escuchas e interceptaciones ilegales, constituyendo una medida adecuada de transparencia.

Entre la opción mencionada, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público Fiscal, parece más adecuado este último organismo, tal como se propone en el proyecto. Ello en función de que el Poder Judicial tiene la competencia de decidir las causas que se someten a su decisión —entre ellas, las penales—, correspondiendo que en su caso autorice la realización de la interceptación o captación, mas no que la efectúe a través de un organismo de su dependencia.

Tal interceptación o captación constituye una medida de prueba, y, como tal, el Poder Judicial puede tener que decidir respecto de su procedencia y de su adecuada producción y obtención, y para ello es preferible que actúe como órgano imparcial. Más aun cuando en el nuevo sistema procesal penal resulta que el Ministerio Fiscal es quien acusa y quien lleva la investigación, con lo cual parece adecuado que la Dirección de Observaciones Judiciales funcione en su ámbito.

Además, debe destacarse que el Ministerio Público resulta una institución que tiene un específico reconocimiento en la Constitución Nacional, que establece que es un órgano extrapoder. Esto, sumado a la específica competencia funcional de ese órgano, debe implicar una adecuada autonomía, en particular del Poder Ejecutivo, e incluso del propio Poder Judicial, que deberá constituir por sí sólo una importante limitación a las prácticas ilegales de interceptación o de captación. En el mismo sentido y a título ilustrativo, pueden mencionarse otros proyectos presentados en el Honorable Senado de la Nación que establecen similar transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al Ministerio Público.

Por el contrario, que esa función se encuentre en cabeza de un organismo de inteligencia, cuya actividad

en general se caracteriza por la reserva y el secreto, constituye desde el inicio una clara dificultad para limitar el uso ilegal de aquélla, incluso en lo relativo a su control. De todo lo expuesto se concluye que sería adecuada la transferencia del organismo en cuestión según la forma propuesta.

Se sustituye el artículo 32 de la Ley de Inteligencia Nacional, que contempla las funciones de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en el ámbito del Congreso de la Nación. Se incorpora un párrafo que prevé que “se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista, compatibles a su clasificación de secreto, confidencial y público”.

Si bien se trata de una disposición que procura mayor transparencia en la utilización de los fondos asignados a los organismos de inteligencia, como también procura el fortalecimiento de la función de control que la Ley Nacional de Inteligencia que se otorga a la mencionada Comisión Bicameral, hubiera correspondido precisar y detallar en el marco legal los mecanismos de contralor que podrán utilizarse.

Sin perjuicio de lo señalado y entendiendo que se trata de un avance en pos de brindar mayor transparencia y control, se estima correcta la disposición. Resultará responsabilidad de la comisión bicameral su adecuada utilización.

Se incorpora el artículo 38 bis, que propicia un cambio relevante en cuanto al carácter de las partidas presupuestarias del Sistema de Inteligencia Nacional, las que pasan a ser públicas, con excepción de los fondos necesarios para labores de inteligencia cuya publicidad pueda afectar el desarrollo de las actividades. Con lo cual se procura una mayor transparencia en la administración de fondos reservados, con una adecuada rendición y la preservación de la documentación respaldatoria.

Finalmente, se sustituyen los artículos 42 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional, que contienen disposiciones penales. En ambos casos se modifican las escalas penales de los tipos penales allí contemplados, que son la interceptación ilegal y la omisión de destrucción de información, elevando las penas de manera que tales delitos no resulten excarcelables.

Por otro lado, se agregan los artículos 43 bis y 43 ter. En el primero de ellos se contempla como delito el incumplimiento del artículo 15 bis del proyecto. En el segundo se instituye como delito la realización de actividades de inteligencia prohibidas por parte de funcionarios o empleados públicos, o quienes hayan sido miembros de organismos de inteligencia.

Se trata de nuevas figuras penales, previstas en forma coherente con las limitaciones de orden funcional que contempla el proyecto, ya analizadas, en un todo de acuerdo con la expresada finalidad de consagrar nuevos límites a las actividades de inteligencia.

De lo que resulta del desarrollo precedente, se concluye que resultan adecuados los cambios propuestos en el proyecto.

En general, se advierte que se introducen limitaciones tanto en lo que hace a la definición de las actividades de inteligencia como a los aspectos funcionales. También se considera adecuada la transferencia de la función de interceptación y captación, según se ha explicado, al igual que las nuevas disposiciones tendientes a conseguir mayor transparencia en la utilización de los fondos públicos por parte de los organismos de inteligencia.

En definitiva, se obtienen cambios positivos en la Ley Nacional de Inteligencia, ordenamiento que tiene varios años desde que fue sancionado y que requiere de ajustes a fin de procurar evitar las desviaciones que se señalan que existen en la práctica.

Se presentará, con la aprobación del nuevo ordenamiento en debate, una importante responsabilidad política en cabeza de quienes tengan a su cargo la organización de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, como también su conducción. Asimismo, por parte de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público en lo que hace a la función de interceptación y de captación que se le transfiere, de manera de procurar su estricta e indefectible adecuación a la ley.

Todo ello se deberá evaluar a posteriori de la aprobación de la normativa que se trata, sujeta, asimismo, a eventuales nuevos cambios que resulten necesarios, siempre tendientes al perfeccionamiento de las actividades involucradas, el funcionamiento de los organismos y el personal afectado, así como al estricto apego a la Constitución y al bloque de legalidad.

En esta instancia se estima que las modificaciones constituyen un paso adecuado a esa finalidad, por lo cual, y conforme todo lo expresado, acompaño con mi voto las modificaciones planteadas.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Quiero hacer algunas consideraciones referidas al presente proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia enviado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara y que nos encontramos debatiendo en el día de la fecha en este recinto.

En primer lugar, deseo manifestar que comparto con el gobierno nacional tanto la necesidad, el mérito y la oportunidad para avanzar en un debate que nos debíamos largamente los argentinos, en torno a realizar un cambio profundo en el marco jurídico actualmente

vigente previsto por la ley 25.520, que regula las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional.

Los hechos de público conocimiento, que han culminado en la muerte de un fiscal de la Nación, como es el caso del doctor Alberto Nisman, marcan un punto de inflexión que, por su trascendencia, impacto y consecuencias sobre la propia salud del sistema democrático, requieren el más rápido esclarecimiento por parte de la Justicia.

Al mismo tiempo, debemos buscar las causas profundas que sitúan en contexto dicha muerte. No es ajena a este hecho la acción terrorista del 18 de julio de 1994, que resultó en la voladura del edificio en el que funcionaban la AMIA y la DAIA y a cuya investigación estuvo abocado el fiscal Nisman los últimos diez años, hasta el día de su deceso.

La participación de los servicios de inteligencia del Estado en pretendidas labores de apoyo a la labor investigativa de la Justicia durante los 21 años que llevan siendo investigados infructuosamente los hechos han terminado hasta el presente bien con la desviación de las investigaciones, que han impedido que la Justicia trabaje sobre todas las pistas posibles, o con el liso y llano encubrimiento por parte de esos servicios de aquellos individuos –internacionales y locales– potencialmente responsables del atentado.

No han sido tampoco ajenos todo este tiempo los organismos de inteligencia a la provisión de información tendenciosa a los funcionarios de la Justicia a cargo de las labores de esclarecimiento de la causa, que ha provocado necesariamente que dicha causa se encuentre estancada en un callejón aparentemente sin salida.

Sin dudas, la causa AMIA resume con claridad todas las deficiencias y vicios que denota el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, pero que se expanden en todos los ámbitos de la vida nacional. Por ejemplo, la connivencia de agentes del sistema de inteligencia con los jueces y funcionarios de la Justicia a cargo de las múltiples y diferentes causas que se desarrollan en el ámbito nacional.

La connivencia de elementos del sistema de inteligencia con los medios de difusión, quienes muchas veces publican sus contenidos sobre la base de la información que dichos organismos les proveen. Por no abundar en el hecho del temor reverencial que dichos organismos generan en todos los ámbitos de la vida nacional, incluidos algunos sectores de la propia dirigencia política, que muchas veces ha terminado acomodando su discurso a las “sugerencias” de estos organismos, recibiendo como contraprestación algún tipo de protección o de información privilegiada.

En resumen, comparto la idea de que avancemos en un debate que permita una profunda profesionalización y democratización de los mecanismos para la selección del personal que forme parte de los organismos de inteligencia; que permita un modelo de funcionamiento que sirva para los fines específicos del Sistema de Inteligencia Nacional, que debe existir en un país que

ha adoptado la democracia y la convivencia pacífica como sistema de vida. Asimismo, redefinir aquellos mecanismos que realmente sirvan para el control eficiente sobre este tipo de actividades, para que ellas permanezcan siempre dentro del marco de la legalidad.

El marco regulatorio que estamos debatiendo deberá, asimismo, garantizar la preservación de los derechos de los ciudadanos, por compleja que ésta labor pueda suponer.

Me es imperioso puntualizar aquí que este esfuerzo por promulgar la mejor ley regulatoria posible para regular a los organismos y a las actividades de inteligencia es un esfuerzo que se suma a otros muy importantes en diferentes campos de la vida nacional impulsados, todos, por nuestro gobierno nacional.

En ese sentido quiero señalar que, junto a los esfuerzos realizados por el gobierno que ha promovido este debate modificatorio de la ley 25.520, debemos ratificar el permanente compromiso que nuestro gobierno ha demostrado respecto tanto a la ampliación de los derechos de los ciudadanos en general, como la irrenunciable actitud de denuncia en todos los ámbitos internacionales sobre la necesidad de que se le permita a la Justicia argentina trabajar sin trabas para el esclarecimiento de los hechos terroristas como lo fueron la voladura de la sede de la AMIA/DAIA, así como también de la embajada de Israel en la Argentina.

Respecto de las modificaciones puntuales propuestas por el Poder Ejecutivo nacional a la ley 25.520, me permito destacar, en primer lugar, que la disolución de la Secretaría de Inteligencia va más allá de un cambio cosmético, como han pretendido puntualizar, desde los medios de comunicación, algunos dirigentes de la oposición. La creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia nos abre la oportunidad, entre otras cosas, de rever las misiones y funciones del futuro sistema, así como la red de nuevas relaciones que se establecerán para que dicho sistema supere las actuales y visibles falencias. Por ejemplo, la creación de una conducción del sistema a cargo de un director general con rango de ministro y de un subdirector general con rango de secretario de Estado, con acuerdo del de esta Cámara para su designación, implica un claro concepto de democratización del nuevo sistema.

La transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito del Ministerio Público denota un claro esfuerzo por hacer más acotadas las actividades del sistema de inteligencia, así como una clara búsqueda de mayor transparencia del sistema, al deslindar este tipo de actividades que son claramente función de la Justicia a la hora del acopio de pruebas.

El subordinar las actividades de inteligencia a la Constitución Nacional, a los tratados de derechos humanos, a las leyes que protegen los derechos de los ciudadanos, es una clara muestra de que la actividad de inteligencia en nuestro país no podrá vulnerar, en el futuro, el marco de derecho y en particular el derecho a la privacidad, que protege a cada ciudadano que vive y

que se desarrolla en nuestro país. En este aspecto es dable destacar que el proyecto hace explícito que la actividad de inteligencia deberá encuadrarse estrictamente en la ley 25.326, de protección de los datos personales, para lo cual prevé mecanismos específicos para ello en cuanto al manejo de los archivos de información.

El proceder al acortamiento de los plazos de clasificación mínimos de la información copiada por el Sistema de Inteligencia Nacional, de 25 a 15 años, no sólo nos coloca en consonancia con aquellos países que poseen una legislación avanzada en este particular, sino que define, claramente, que la prioridad en la Argentina es que la información apunte siempre a ser de carácter pública y excepcionalmente y el menor tiempo posible de carácter secreta.

En este sentido, el reducir a sólo tres categorías de clasificación de la información, secreta, confidencial o pública, apunta a democratizar al sistema en el sentido de alejarlo del equivocado concepto de “secretismo” con el que funciona hasta el presente el sistema de clasificación de la información de inteligencia.

La nueva Agencia Federal de Inteligencia estará abocada a la labor de producir inteligencia y no, como ocurre con el actual máximo organismo del sistema la Secretaría de Inteligencia, que, además de organizar, sistematizar y producir el correspondiente análisis de la información, se dedica a la recolección de información con medios propios, como lo es a través del caso de la Dirección de Observaciones Judiciales u otros mecanismos que actualmente se desarrollan.

El acotar la labor de recolección con medios propios sólo al capítulo de la inteligencia criminal referida a delitos complejos y a delitos contra el orden constitucional coloca a la agencia en inmejorable situación para centrarse en su labor específica, que es producir inteligencia nacional, así como generar las directrices estratégicas que permitan orientar a las direcciones generales de inteligencia militar y criminal en el plano y los criterios de recolección de la información para la posterior producción del análisis de inteligencia.

El aumento en las penas previstas para toda la actividad ilegal de escuchas o de obtención de información sobre los ciudadanos, así como la transgresión de las vías orgánicas claramente explicitadas por el proyecto en cuanto a la toma de contacto de los agentes del sistema de inteligencia con funcionarios, organismos, nacionales o extranjeros, restringe adecuadamente esa tendencia a los contactos horizontales entre unos y otros, que es entre otras cosas lo que ha generado la largamente denunciada connivencia del sistema de inteligencia actual con las otras esferas de la vida pública nacional.

Finalmente, es también altamente positivo el hecho de que el presente proyecto establezca principios de mayor transparencia en lo concerniente a la utilización de los fondos reservados, procurando establecer para ello mecanismos de control más adecuados. De tal suerte que serán reservados sólo aquellos fondos

que sean necesarios para poder ejecutar las labores de inteligencia y cuya publicidad pudiera contraponerse al desarrollo de dichas labores. Del mismo modo que es saludable la propuesta de que la administración de los fondos reservados se haga con una adecuada rendición, así como la necesidad de preservar la documentación que da respaldo a la ejecución de este tipo de fondos.

En síntesis, es claro que este proyecto no viene a destruir el consenso alcanzado en el 2001 entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria que participaron de aquel debate y que resultó en la promulgación de la ley 25.520, sino que viene a producir los cambios necesarios que la experiencia acumulada desde entonces hasta el presente nos indican.

Es importante destacar que para enriquecer este debate hemos tomado también en consideración la opinión de los actuales funcionarios del gobierno responsables del área, así como la de organizaciones no gubernamentales, como lo es el caso del CELS, y de expertos en la materia, como el licenciado Marcelo Saín. Esperábamos coincidir en este debate para escuchar y recoger las opiniones de los miembros de las diferentes fuerzas políticas que tienen representación en esta Cámara, pero lamentablemente debo puntualizar, sumándome en ello a mis pares del bloque del FPV, así como de los propios participantes extraparlamentarios, que la oposición desertó de este trascendente debate.

No tengo dudas de que este debate y la posterior promulgación de este proyecto en ley significará un aporte sustantivo para el fortalecimiento de nuestra joven democracia, en tanto desde un campo particularmente sensible como lo es la temática de la inteligencia hemos procedido a buscar la mejor tutela para que esta actividad se desarrolle con la máxima transparencia, preservando en todo lo posible los derechos de los ciudadanos, a la vez que ejercer el debido control sobre los fondos y actividades del Sistema de Inteligencia Nacional, sin por ello obstruir una actividad legítima del Estado, como lo es la necesidad de tener una inteligencia eficiente, que ayude a los máximos decisores a la hora de la toma de decisiones.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPELLINI

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Adelantando mi voto positivo y brevemente quiero expresarme en consonancia con el miembro informante a los efectos de insistir en que este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a este Honorable Senado es un proyecto orientado a la modificación de la ley 25.520, de inteligencia nacional, que fue sancionada y promulgada en el año 2001.

Esta ley, cuya reforma estamos propiciando, es uno de los grandes logros del consenso básico en la democracia argentina —que lamentablemente en esta ocasión no fue así— en materia de defensa y de seguridad. Dejo en claro, además, que es derivada y complementaria de las dos principales leyes que organizan el sistema de defensa nacional y de seguridad interior: me refiero a las leyes 23.554 y 24.059.

Señor presidente: esta propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes en este sistema, cambios que además tienen una fuerte connotación positiva que implica una reestructuración del sistema.

A mi entender, y como miembro integrante de la Comisión de Defensa Nacional de esta Honorable Cámara, nunca puede ser una actividad inconexa de la defensa nacional y de la seguridad interior, porque el objetivo último de la inteligencia es la producción de conocimientos para delinear, formular, armar políticas defensivas o, en su caso, políticas de seguridad pública frente al crimen en cualquiera de sus modalidades o manifestaciones.

En honor a la brevedad, quiero destacar algunos elementos positivos de esta reforma, que me parecen el andamiaje que sostiene la afirmación de que se trata de una reestructuración integral del sistema de inteligencia. En primer lugar, la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Algunos han dicho que sólo se trata de un cambio de nombre. No, no solamente se cambia el nombre y se reemplaza por un organismo distinto, sino que tiene una autonomía institucional diferente. Por ejemplo, el control monopólico de la aplicación de escuchas, en el marco de lo que son solicitudes judiciales, escuchas telefónicas o de comunicaciones, no van a estar más dentro de esta Secretaría. Creo que es apropiada la transferencia al ámbito del Ministerio Público y al organismo de Observaciones Judiciales, porque eso está en armonía con la reforma al Código Procesal Penal vigente, a partir de la aprobación de la nueva ley el año pasado, lo que coloca a los fiscales como las autoridades encargadas de la investigación y de la promoción de la acción penal.

Otro cambio sustantivo es que a partir de la creación de esta nueva matriz institucional —la Agencia Federal de Inteligencia, AFI— que está proponiendo el Poder Ejecutivo, el director general y el subdirector, que van a conducir ese organismo, deberán ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de este Honorable Senado de la Nación. Es decir que las personas propuestas tendrán que venir a este Parlamento a explicar las estrategias, las políticas, a dar cuenta del conjunto de obligaciones que ya están dentro del marco de la ley 25.520 que hacen a esta cuestión, con lo cual también estamos hablando de una participación institucional más importante del Parlamento en esta materia.

Señor presidente: esto es más democrático y se agregan criterios de transparencia en lo que es el desempeño del personal de inteligencia, a través de la monopoli-

zación por parte de las autoridades de la AFI y de las relaciones institucionales con otros poderes públicos.

Otro de los aspectos para destacar tiene que ver con las últimas modificaciones en lo referido a la prohibición explícita y sin excepciones de tareas represivas; la simplificación de seguridad a tres estamentos: secreto, confidencial y público.

También debo resaltar la reducción de 25 a 15 años en el plazo mínimo para la desclasificación de archivos, la habilitación de terceras personas —físicas o jurídicas— que, acreditando su interés legítimo, puedan peticionar determinada desclasificación y el mayor control ciudadano a las tareas de inteligencia.

También debo mencionar que se establecen principios de mayor transparencia en la utilización de los fondos reservados mediante el establecimiento de mecanismos de control más adecuados. Esto es para todos los organismos del sistema de inteligencia nacional. Para ello se modifica el principio general de las partidas presupuestarias y sólo serán reservados los fondos necesarios para labores de inteligencia en que su publicidad pueda afectar el desarrollo de las actividades.

Esta modificación insta a una mayor transparencia en la administración de fondos reservados, con adecuada rendición y preservación de documentación respaldatoria posible.

Por otra parte, quiero decir y destacar, también, que se fortalece el tema del control parlamentario con relación a los fondos en cuestión.

El último cambio propuesto es muy acertado, ya que se establece un mecanismo de jubilación extraordinario para todo el personal que no cuente con la edad requerida, pero sí con los años de agentes para obtener los beneficios de una jubilación ordinaria, resguardándose sus derechos.

Esto también ocurre en casi todos los organismos de inteligencia más serios y desarrollados del mundo. Por el tipo de objeto y de funciones que desempeña el personal de inteligencia, no puede haber relaciones institucionales “subterráneas”, por llamarlas de alguna manera.

Esta ley será trascendente, importante, y su aplicación correcta va a implicar una transformación del Sistema de Inteligencia Nacional. Me refiero a los delitos de competencia federal, porque en general son delitos que hacen a formas de criminalidad compleja que atañen a problemáticas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, operaciones de lavado de dinero, etcétera.

Además, la mayoría de aquellos organismos internacionales de inteligencia que están en sintonía con estos problemas y que tienen riesgos ciertos en estas materias cuentan con áreas especializadas en esto. Entonces, será justamente la AFI quien va a tener la producción de inteligencia nacional, en un plano estratégico a través de análisis, pero no de obtención de información, sino que se va a valer de las estructuras que están en el

Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Seguridad y en materia de criminalidad organizada, terrorismo y atentados contra el orden constitucional.

Coincido plenamente en las reformas que se introdujeron al proyecto original, acercadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Me refiero a la que acabo de mencionar y, concretamente, a que, si se tiene que traspasar algo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, sea justamente a las áreas de producción de inteligencia en estos dos rubros: delitos de competencia federal y atentados contra el orden constitucional.

Por último, señor presidente, la propuesta es altamente positiva. Vuelvo a decirlo: es la desarticulación del sistema de inteligencia actualmente vigente, y en eso estamos política e institucionalmente comprometidos con ese proyecto político institucional anunciado por la presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual nos parece que es una iniciativa, en este contexto y en esta situación, absolutamente adecuada.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
KUNATH

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Con el tratamiento de esta iniciativa, estamos dando un nuevo paso en el proceso de reestructuración para la transparencia y democratización de los servicios de inteligencia de nuestro país, proceso que se había iniciado en el mes de diciembre, cuando las autoridades de la Secretaría de Inteligencia fueron reemplazadas. Se pretende terminar con prácticas autoritarias, extorsivas y antidemocráticas de algunos agentes que suponen que determinada normativa no los alcanza.

La presentación de este proyecto para que sea debatido en el ámbito del Congreso de la Nación refleja una enorme voluntad y decisión política, detrás de la cual subyace un enorme gesto de valentía por parte de nuestra presidenta, que se plasma en esta iniciativa que aborda la problemática de raíz y que intenta poner coto a la promiscuidad que ha caracterizado a las relaciones de los servicios de inteligencia en nuestro país. Destaco sus palabras, pronunciadas en ocasión de la cadena nacional al anunciar el envío de este proyecto de ley: “A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien, no me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado”.

Así, la República Argentina vuelve a ubicarse como un modelo paradigmático en materia de derechos humanos, subordinando las actividades de inteligencia a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad, indicando claramente cuál es el rumbo que la legislación argentina ha adoptado en estos años.

No voy a ahondar en las cuestiones puntuales de la norma ya que el miembro informante lo ha hecho con mucha precisión, pero quiero destacar que este proyecto no es un mero cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia. El proyecto importa un cambio profundo, una transformación en las bases de la estructura del servicio de inteligencia argentino y de los principios que rigen su actividad. En este caso el Poder Ejecutivo nos envió una propuesta que luego del trabajo en comisión logramos enriquecer. Seguramente no sea la mejor ley, pero es otro paso para dotar de las herramientas necesarias a nuestras autoridades para la democratización de los servicios de inteligencia. Es nuestro deber como legisladores trabajar en este ámbito de discusión de las leyes que rigen para todos los argentinos y argentinas. Hay otros que priorizan la presencia en los medios de comunicación, aprovechando un tema tan delicado para todos nosotros con objetivos egoístas y de campaña.

Desde el momento en que el proyecto de ley fue anunciado en cadena nacional, medios de comunicación han servido de escenario para que muchos expresen su descontento, esgrimiendo argumentos que no hacían más que dejar en evidencia su desconocimiento respecto del tema que se está abordando.

No faltaron quienes concluyeron que se trataba de una maniobra del gobierno nacional para desviar u ocultar la denuncia y la posterior causa judicial iniciada con motivo de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Naturalmente, se trata de una teoría carente de todo sustento. ¿Qué sentido tendría intentar ocultar esta situación que ha conmovido la agenda pública con un proyecto que tiene por objetivo reestructurar los servicios de inteligencia? Si el objetivo fuera el desvío de la atención, lógicamente se intentaría instalar cualquier otra temática, sobre todo teniendo en cuenta la composición actual del Congreso de la Nación, donde el oficialismo cuenta, por elección popular, con mayoría en ambas Cámaras. Hay voluntad política de dar el debate, hay decisión política de transformar la Secretaría de Inteligencia.

Otra excusa que usa la oposición para eludir el debate es el supuesto tratamiento exprés del proyecto. Quiero detenerme un momento a analizar este argumento. Por cadena nacional, el 26 de enero la presidenta informó a todo el país el envío del proyecto al Congreso de la Nación y, en uso de sus facultades constitucionales, el día 28 firmó el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar este tema. Si quien está en ejercicio del Poder Ejecutivo, sea cual fuere su partido político, convoca a sesiones extraordinarias es porque hay una situación real que debe ser atendida; caso contrario, los plazos constitucionales y legales deben regir con toda normalidad. Hasta parece una cuestión semántica, sesiones ordinarias versus extraordinarias.

Se acusa que este supuesto tratamiento exprés es una constante y que ese es uno de los motivos por los cuales el arco opositor no se presta a discusión ni acompaña con su voto la iniciativa. Recordemos que no hace mucho, específicamente el 16 de diciembre, se

sancionó definitivamente la Ley de Argentina Digital sólo con el voto del oficialismo y ya en aquel entonces las fuerzas de la oposición planteaban que no se podía tratar la iniciativa en los plazos que el oficialismo marcaba. Ahora bien, resulta que ese proyecto estuvo en tratamiento en esta Cámara algo más de un mes, inclusive durante tres semanas se realizaron reuniones de comisión donde no sólo concurrieron representantes del Poder Ejecutivo sino que se escucharon y tomaron en cuenta los aportes de más de cincuenta expositores. Se oyeron voces provenientes de diversos sectores, desde los más afines a la posición gubernamental hasta aquellos que abiertamente se declararon detractores de la iniciativa, todo ello, con una escasa presencia de senadores de la oposición, cuestión que oportunamente se puso en evidencia. Agravó esa situación el hecho de que se incorporaron al dictamen muchas de las sugerencias hechas por ellos mismos y tampoco bastó para lograr un consenso.

También es oportuno hacer referencia a las palabras del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, cuando al momento de explicar el proyecto de ley expresó que se trataba de un texto “perfectible” susceptible de recibir cambios, como cualquier otra norma. Las modificaciones en el texto que posteriormente fueron realizadas dan cuenta de ello.

Es por este motivo que considero que los sectores opositores dejaron pasar una vez más la posibilidad de hacer oír sus opiniones y reclamos en el ámbito adecuado a tales efectos, en el ámbito donde debieran estar como consecuencia de la voluntad popular que así lo dispuso y haciéndolo conforme a la legislación que así lo establece.

Entiendo que estamos atravesando una coyuntura que imprime la adopción de medidas inmediatas y contundentes. La realidad nos obliga a terminar con una estructura de poder que se creyó capaz de pasar por encima de las autoridades democráticamente establecidas, pero nada de esto sirve para que aquellos senadores cumplan con su deber republicano. Parece que ser opositor es oponerse por la oposición misma y no es trabajar haciendo los aportes necesarios para lograr un debate profundo y en el lugar adecuado, es decir, en este recinto y en las comisiones pertinentes, enriquecer el texto para lograr una ley en beneficio de toda la comunidad.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ

Túnel de Paso de Agua Negra
(O.D. N° 953/14)

**Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino
Central**
(O.D. N° 954/14)

Señor presidente:

Nos proponemos tratar los protocolos complementarios al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile

relativos a la entidad binacional para el proyecto Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino Central y al proyecto Túnel Internacional Paso de Agua Negra, suscritos en Santiago de Chile el pasado 23 de diciembre de 2014 por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet.

La Argentina y Chile cuentan con un amplio marco institucional de consolidación de la integración bilateral, plasmado en el acuerdo de paz y amistad de 1984, y ratificado en 2010 mediante el Tratado de Maipú y los acuerdos y protocolos complementarios.

En este contexto se desarrollan los comités de integración y se desempeña el Grupo Técnico Mixto de Infraestructura que trabaja desde 1992 en la identificación y priorización de planes y proyectos para optimizar la conectividad a través de los pasos fronterizos.

El Paso de Agua Negra se encuentra en la provincia de San Juan y en la IV región de Chile y forma parte del corredor bioceánico Porto Alegre - Coquimbo. Los estudios desarrollados sobre este paso han concluido en la necesidad de ejecutar un túnel que reemplace los últimos kilómetros de camino a cada lado de la frontera debido a la dificultad de acceso por precipitaciones nivreas. En el marco del Tratado de Maipú se creó la entidad binacional por medio de la cual las partes se comprometieron a intensificar el análisis sobre el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Túnel Binacional Paso de Agua Negra.

El proyecto del Ferrocarril Trasandino, por su parte, se encuentra en la etapa de generación de la entidad binacional como ente de derecho público con capacidad para la evaluación del proyecto de túnel de baja altura Ferrocarril Trasandino Central.

Ambos proyectos forman parte de un conjunto de iniciativas tendientes a mejorar y ampliar la conexión física entre los territorios de la Argentina y Chile, mediante la promoción y realización conjunta o coordinada de obras de infraestructura en materia de energía, transporte y comunicaciones. En particular, de proyectos de infraestructura vial y ferroviaria de interés estratégico para el proceso de integración binacional.

Como representante de la provincia de Misiones, que mantiene 85 por ciento de su frontera con países hermanos miembros del Mercosur, que forma parte de nuestra realidad socioeconómica, cultural y estratégica, y como provincia miembro de la Nación Argentina, en este contexto, entiendo que la integración regional, así como el desarrollo de la infraestructura que la sustenta en el ámbito de las naciones sudamericanas, cuya vocación ha sido expresada en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–, resulta de interés estratégico para los países que la conforman, porque impulsa y dinamiza no sólo el relacionamiento entre sus miembros, sino entre estos y el resto del mundo; en este caso con el eje Pacífico, que tanto peso

tiene sobre la economía mundial y su crecimiento. Es por ello que las acciones tendientes a fortalecer el proceso de integración y el desarrollo de la infraestructura que acompaña ese proceso de integración resulta de importancia estratégica para la Nación, con un fuerte componente de visión de largo plazo.

En particular, si tenemos en cuenta el contexto actual de las relaciones en el Cono Sur, la relación con Brasil se nos ha hecho más compleja por el aumento de la asimetría, mientras que con Chile la situación ha tendido a equilibrarse, lo cual es algo que juega más a favor de la cooperación que en ningún otro momento de nuestra historia, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico internacional propicio al desarrollo de proyectos de infraestructura tendientes a fomentar el empleo y el efecto dinamizador de este tipo de obras. Hoy por hoy, todos los organismos multilaterales impulsan los proyectos de infraestructura por el efecto dinamizador que tienen sobre las economías en los mercados emergentes, más aún si estos tienen la capacidad de mejorar la inserción internacional de la producción de las economías en desarrollo e interconectar los bloques disminuyendo los cuellos de botella, especialmente en la cuestión logística.

La Argentina tiene un claro horizonte en materia de inversión en infraestructura, lo cual queda claro en la cantidad de proyectos en marcha y en la cantidad de acuerdos internacionales que se han suscrito recientemente en línea con esta decisión política tendiente a defender la generación de puestos de trabajo y el efecto dinamizador de la realización de estas inversiones más allá del valor estratégico de ellas. Este gobierno ha mantenido una línea coherente en relación a la potenciación de los proyectos tendientes a generar puestos de trabajo y dinamizar la economía en forma ininterrumpida en todo el territorio de la Nación Argentina.

Por lo dicho, no puedo más que celebrar el avance en las cuestiones referidas y prestar mi apoyo adelantando mi voto positivo a las iniciativas bajo tratamiento.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (O.D. N° 952/14)

Señor presidente:

“Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud”, decía José Ingenieros.

Hoy toda la sociedad argentina nos está observando para juzgar nuestro accionar. Por eso quiero manifestar mi posición política, en virtud de mi responsabilidad institucional, como un deber para con el pueblo de la provincia de Misiones, a la cual represento, y con tanto orgullo para con el pueblo de la Nación Argentina.

Dadas las actuales circunstancias muy complejas, que necesitan respuestas concretas que garanticen los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos a los cuales adherimos, y después de casi quince años de la sanción de la Ley Nacional de Inteligencia, 25.520, buscamos adecuar su marco normativo según la evolución de nuestra experiencia y de la experiencia del resto del mundo. Una tarea basada en la ardua y permanente exigencia que debemos afrontar, en un mundo globalizado, para prevenir y resolver los conflictos de intereses económicos, sociales y políticos que atentan contra la soberanía nacional. Como fuente sumamos el camino de la jurisprudencia argentina –federal e internacional– en sus distintos fallos, leyes, políticas públicas, etcétera.

En estos más de treinta años de democracia sostenida recordamos que fue justamente un hombre del Ejército Argentino, llamado Juan Domingo Perón, siendo teniente general, quien en 1946 creó la Coordinación de Inteligencia del Estado –CIDE– en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial; un ámbito eminentemente civil, dejando de lado las tareas de inteligencia militar que dependían de las fuerzas armadas. La cronología histórica salta a 1955, cuando se instaura la dictadura militar –mal llamada “Revolución Libertadora”– y, posteriormente, a 1958, cuando pasa a tener rango de secretaría: la Secretaría de Inteligencia del Estado –SIDE–, que comienza con las prácticas de incorporar a sectores de las fuerzas armadas, policías retirados, informantes orgánicos y no orgánicos.

Sesenta y nueve años pasaron de la creación de la CIDE. En todos estos años transcurrieron en el mundo y en América Latina muchos acontecimientos significativos como la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la doctrina de seguridad nacional, etcétera. Antes del retorno de Perón en 1973, la SIDE pasa a depender del Ministerio de Defensa y como requisito se estableció que un agente militar se haga cargo.

Luego de la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, una serie de sucesos define el golpe de estado de 1976. Para muchos, una gran época de bonanza económica; para otros, de exclusión social y de inseguridad que se gestaba desde el propio terrorismo de Estado. Como consecuencia de él, la cúpula del poder se apropiaba de herencias, bienes, nombres y disfrutaban de la buena vida de la Argentina, mientras millones padecían la peor tortura social que significaba vivir en una dictadura militar institucionalizada, donde desaparecían jóvenes –hombres y mujeres–, que eran secuestrados, hijos de familia de clase media alta, para extorsionarlas, para que paguen altas sumas para su liberación.

En 1983 recuperamos nuestra querida democracia entre todos los argentinos y en el año 2001 se logra sancionar la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, más allá de todo el contexto político, social y económico que vivíamos en ese momento en nuestro país. Hoy por hoy, estamos convencidos de seguir avanzando

con los cambios necesarios para fortalecer y depurar el sistema de inteligencia, para garantizar realmente los intereses en pos del Estado nacional y de los habitantes de nuestra Nación.

Por ello la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, impulsa la iniciativa de modificar la presente ley en debate y crea la Agencia Federal de Inteligencia –AFI–, de manera de jerarquizar, ordenar y definir las responsabilidades políticas del accionar de ellos, en una interacción adecuada con las disposiciones de la Constitución Argentina, de los tratados de derechos humanos, de seguridad y de servicios de inteligencia articulados a nivel internacional.

Una de las más importantes incorporaciones es el artículo 5° bis, que establece que las actividades de inteligencia deben ser ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. Si la situación amerita que es de suma urgencia, podrán iniciar las actividades, debiendo informar de manera inmediata a las autoridades máximas. No cumpliendo con la debida información de la actividad, estos infringen sus deberes u obligaciones e incurrirán en responsabilidad disciplinaria. Tomado lo trascendido en nuestro país, no podrán resguardarse bajo la obediencia debida para exceptuarse de responsabilidades.

Así también el artículo 6° sustituye al artículo 8°, enumera e incorpora explícitamente las competencias de la AFI, las cuales actualmente se encontraban al libre albedrío de los agentes de inteligencia.

El artículo 8°, que sustituye al artículo 15, establece que el director general y subdirector general tendrán rango de ministro y serán propuestos por el Poder Ejecutivo nacional, necesitando para su asunción el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. De esta manera, profundizamos la responsabilidad compartida entre los oficialistas y opositores en la designación de hombres o mujeres que conduzcan a futuro la AFI.

En el artículo 11 se incorpora el artículo 16 bis, el cual establece un sistema taxativo de clasificaciones de seguridad que definen que es secreto, confidencial, reservado o público.

Señor presidente: propongo una modificación al artículo 11, que incorpora como artículo 16 ter de la ley 25.520, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 16 ter: Para cada grado de clasificación de seguridad se dispondrá un plazo para la desclasificación y acceso a la información.

“Las condiciones del acceso y de la desclasificación se fijarán en la reglamentación de la presente.

“En ningún caso el plazo para la desclasificación de información, documento o material podrá ser mayor a los 10 años a partir de la decisión que origino su clasificación de seguridad efectuada por algunos de los organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional.

”Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores y la reglamentación respectiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes.”

El motivo de esta modificación se sustenta en la importancia de disminuir los plazos de desclasificación para que los que tomen las decisiones sean contemporáneos a la apertura de los secretos y puedan dar las explicaciones requeridas, si así fuese necesario, ante la ciudadanía argentina, la Justicia argentina o la internacional.

Asimismo, es de suma importancia que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia posea la facultad de requerir en cualquier momento que estime necesario la rendición de la ejecución del presupuesto que le fuere asignado a la AFI, con el fin de garantizar mayor transparencia del presupuesto y de los fondos reservados del área, sin depender de la elevación anual que se establece en la reglamentación.

En este contexto, la propuesta de redacción al artículo 32 es la siguiente:

“Artículo 32: Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscritos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías, así como también a los lineamiento estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.

”La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la comisión solicite en el ámbito del Congreso o de las sedes de la AFI.

”Con la finalidad de la mayor transparencia en la utilización de los fondos se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista, compatible a su clasificación de reservados, confidenciales, secretos o de acceso limitado o restringido o público de los mismos.”

Los debates que se han llevado adelante en el tratamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente P.E.-431/14, tanto en el proceso de tratamiento del proyecto de ley como la repercusión que generó ante la ciudadanía y los medios

de comunicación, hizo que hoy sea de vital importancia para nuestro país la ley que estamos a punto de votar.

Nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, instaura una nueva propuesta y un nuevo desafío, que produce resultados, herramientas jurídicas, de la mano de la decisión y de la convicción política. Como proyecto político provincial, desde el Frente Renovador de la Concordia Social venimos trabajando con el Frente para la Victoria, junto a Néstor Kirchner, Carlos Rovira, Cristina y Maurice Closs como expresión genuina de la voluntad popular.

Como misionera he sido testigo del accionar indebido de los organismos de inteligencia, que llevó a la destitución de dos magistrados en mi provincia, en la causa por la que también han sido procesados el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, Jorge Palacios y Mariano Narodowski.

Para concluir, señor presidente, quiero destacar el comportamiento de algunos legisladores que se empeñan en dañar de manera serial los debates que envuelven a nuestro país, descalificando a las instituciones que dicen defender, y, lo más preocupante, que vemos que plantean los problemas públicos desde el lugar que “oportunamente” ocupan.

No voy a nombrar, pero una determinada legisladora se preocupa por insultar a los colegas por el solo hecho de no pensar de igual manera y olvidándose que todos los representantes de las provincias y de esta querida República Argentina fuimos elegidos y legitimados por el voto de los ciudadanos. Y así se hace realmente imposible compartir y construir de manera pacífica.

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos”, decía José Saramago.

Adelanto mi voto positivo a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520.

7

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU**

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Hoy nos encontramos en un debate estructural para la sociedad. A mi entender, el tratamiento de este proyecto tiene un sabor amargo. Han pasado más de treinta años desde la vuelta de la democracia y, sin embargo, aún hay sectores del Estado con vestigios antidemocráticos y antipatrióticos.

Sin ánimo de realizar ningún tipo de ofensa, creo que durante mucho tiempo fuerzas ajenas a nuestros intereses han incidido en la inteligencia interna ensuciándola con prácticas que afectaban a toda la comunidad desde el silencio de las sombras. Lo hicieron nada menos que a través de quienes debían ser nuestros recursos humanos estratégicos.

No obstante, y totalmente segura de ello, celebro la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, que tiene como fin reunir y analizar hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de nuestra Nación. Es fundamental el momento en el que nace: en medio de contradicciones del orden global, de la lucha contra el terrorismo, de los escenarios de disputa por el poder en los distintos territorios. No somos ajenos al mundo en el que estamos. Por eso es imprescindible contar con un ente de inteligencia democrático y con el principio de la defensa nacional.

Es necesario remarcar la importancia del rol que cumplirá el Ministerio Público, ya que se trata del único ministerio extrapoder con esta capacidad. Es nada más y nada menos que pluralizar los distintos ámbitos del Estado argentino, legitimados por la Constitución Nacional.

En este sentido, no es un dato menor que los principales cargos sean designados por el jefe de Estado durante su mandato, pero que deban tener la aprobación del pliego de esta Honorable Cámara. Durante años algunos sectores se han cansado de hablar de la democracia, de las instituciones, de la República. Y llegados los momentos clave, no sólo no debaten sino que también se dedican a cuestionar los pilares más democráticos, como sucede en esta iniciativa.

Finalmente, es hora de terminar con los tiempos de los “carpetazos”, que siempre fueron en búsqueda de vulnerar a nuestro país y arrastran consigo la integridad de los fiscales, jueces y medios de comunicación. Ha llegado la hora de fortalecer y de democratizar este estratégico espacio para nuestra República.

8

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA**

**Túnel de Paso de Agua Negra
(O.D. N° 953/14)**

**Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino
Central
(O.D. N° 954/14)**

Señor presidente:

Quiero expresar mi especial acompañamiento al proyecto de ley tendiente a aprobar el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú entre la República Argentina y la República de Chile para la construcción del Túnel Internacional Paso de Agua Negra.

Celebramos el compromiso político de los países miembros del acuerdo, quienes con una visión de mediano y largo plazo construirán una obra histórica, que acompaña el proceso de integración iniciado durante la última década en la región.

Este protocolo complementario pone en evidencia el compromiso para la concreción del Tratado de Maipú, en su objetivo de intensificar las acciones tendientes a

ampliar la conexión física entre los territorios de ambos países, mediante la realización conjunta de obras en materia de energía, transporte y comunicaciones.

Cabe mencionar que esta obra es estratégica en la concreción del Corredor Bioceánico Central, dada su posición geográfica inmejorable, alineado entre Porto Alegre, Brasil, y Coquimbo, Chile, atravesando la zona productora central de la Argentina, fundamental para la cooperación de los mercados regionales de la Argentina, Chile y la región, dado que permite no sólo incrementar e intensificar las relaciones binacionales, sino también lograr una interconexión entre los países del Mercosur y Chile, con el resto del mundo.

Debemos recordar que esta magnífica obra, que comprende la ejecución de los ejes principales semiparalelos con calzadas para el tránsito vehicular, se enmarca en un conjunto de iniciativas entre la Argentina y Chile en el contexto de una apertura general al sistema de comercio mundial.

Señor presidente: quiero remarcar nuestro acompañamiento a proyectos como el del Corredor Internacional Paso de San Francisco, ubicado en el sector noroeste de la provincia de Catamarca, que ofrece una ventajosa ubicación para el comercio en la región, dado que consideramos estratégico y prioritarias para nuestras economías regionales obras de infraestructura que nos permitan una salida al Pacífico.

La promoción de infraestructura regional, el fortalecimiento de instituciones relacionadas con el proceso de integración y el desarrollo de otros bienes públicos regionales constituyen ejes centrales que potencian las ventajas comparativas de la región y por ello nuestro compromiso y apoyo.

Por último, celebramos esta iniciativa y felicitamos al pueblo de San Juan, que se ha comprometido en la consecución de esta obra que potenciará desde el punto de vista económico y turístico su provincia y el resto de las provincias del Norte argentino, incentivando la producción exportable en las áreas de influencia del corredor.

9

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (O.D. N° 952/14)

Señor presidente:

El proyecto para la reforma integral del servicio de inteligencia nacional, que implica la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia, constituye un hito histórico en la construcción de nuestra democracia.

Terminar con mecanismos que avalan la impunidad de actores capaces de detonar, desde las propias estructuras del Estado nacional, mecanismos desestabi-

lizadores para poner en jaque gobiernos democráticos, resulta hoy impostergable.

Este proyecto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca establecer la subordinación de los servicios de inteligencia a las instituciones democráticas y al gobierno, reorientando capacidades que han permitido niveles intolerables de “autonomización” del cuerpo.

Los últimos acontecimientos han demostrado que el actual servicio de inteligencia ha favorecido la articulación entre agencias de gobiernos extranjeros, funcionarios de la Justicia y de la policía nacional, que actúan por debajo del poder político institucional.

La voluntad de intereses particulares, ajenos a las demandas populares del aparato de inteligencia nacional, ha llegado a niveles intolerables de “autonomización” que deben en lo inmediato desarticularse.

Por ello la imperiosa necesidad de esta reforma que plantea un nuevo paradigma para regular los servicios de inteligencia en sintonía con la Constitución y con los tratados internacionales. No podemos seguir permitiendo la manipulación de la información y la arbitrariedad con la que circula por fuera de los canales institucionales.

Remarcamos que las últimas maniobras mediáticas han dejado en evidencia la articulación existente entre fiscales, jueces y medios de comunicación, y con ello la imperiosa necesidad de contar con organismos de inteligencia al servicio de los intereses nacionales, que acompañen con transparencia los esfuerzos del Estado nacional por terminar con la impunidad.

Múltiples han sido las medidas que el gobierno iniciado en el año 2003 por Néstor Kirchner ha tomado en pos de avanzar con cada una de las células latentes en las propias estructuras estatales que pujan por mantener su statu quo.

Terminar con la impunidad en la República Argentina, que constituye uno de los estigmas que arrastra nuestro país desde la restauración de la democracia, es algo que este gobierno ha convertido en uno de los pilares de su mandato.

La impunidad en el caso AMIA ha sido una preocupación constante para Néstor y para Cristina Fernández de Kirchner, quienes han tomado medidas concretas en pos del esclarecimiento del atentado: la apertura de los archivos de inteligencia, la desclasificación de toda la información al respecto, el relevamiento a agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a tribunales en el marco de la investigación judicial son ejemplo de ello.

Incluso la decisión del gobierno de avanzar en el año 2013 en el Memorándum de Entendimiento ha constituido una herramienta más para intentar avanzar en una causa que hasta el momento estaba paralizada, a pesar de la permanente petición de captura internacional de los iraníes imputados y del constante reclamo ante las Naciones Unidas por una cooperación judicial que realizó el Poder Ejecutivo.

Estamos convencidos de que este gobierno nacional, con más de una década de respaldo popular y una presidenta capaz de soportar los más sucios agravios, es el que tiene hoy la capacidad y sobrada voluntad política de cortar con relaciones espurias entre el sistema político y el judicial.

Lamentamos que gran parte de la dirigencia política nacional se haya sumado al acto mediático de las últimas semanas, que nada aporta a la discusión de fondo, que como representantes del pueblo argentino sabemos de la trascendencia política absoluta que posee para el fortalecimiento de nuestra democracia.

La irresponsabilidad poco ingenua de la mayoría del arco opositor demuestra la nula voluntad de transformación real de los actores y de los mecanismos de poder que conviven, lamentablemente, dentro de las estructuras institucionalizadas de la República.

Ésta no es la primera vez que sectores políticos escapan a la discusión de fondo en los espacios de debate propios de un Estado democrático, como lo es el Senado de la Nación, para hacer demagogia en los medios de comunicación. No son ellos, sino es el pueblo argentino el que pierde con esta decisión de buscar ventajas coyunturales. Son ellos quienes colaboran con quienes quieren desviar la atención de uno de los temas centrales del sistema democrático.

Nuestra postura como espacio político ha sido discutir y someter a consideración del Congreso de la Nación todas las políticas de transformación elaboradas por el Ejecutivo nacional, y es el mandato popular el que legitima nuestro voto y la aprobación o no de cada una de las iniciativas.

Con relación al texto enviado por el Poder Ejecutivo y modificado en función a los aportes esbozados en la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, destacamos la descentralización de las intervenciones telefónicas judiciales al Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, a la jerarquización de la ley, a la clasificación de los niveles de reserva de la información y al fortalecimiento del derecho de los ciudadanos a la privacidad, como los ejes fundamentales que cruzan esta reforma integral.

Al respecto, señalamos que el traspaso de las escuchas está en sintonía con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, sancionado el año pasado, que dispone un proceso acusatorio en lugar de inquisitorio, y coloca al Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación de los delitos, correspondiéndole la carga de la prueba, y por ello la coherencia del traspaso de las observaciones judiciales a este órgano extrapoder.

La creación de la Agencia Federal de Inteligencia –AFI–, a cargo de un director y de un subdirector general, únicos responsables del vínculo con el resto de los poderes del Estado, evitará el vínculo entre funcionarios y los servicios de inteligencia nacional que ha alimentado durante todos estos años la relación promiscua entre sectores importantes de la Justicia federal.

Asimismo, la modificación en el dictamen que aclara el concepto de “inteligencia nacional”, la que establece la potestad de la futura Agencia Federal de Inteligencia –AFI– de dirigir los subsistemas de inteligencia estratégica militar y de inteligencia criminal y la que elimina disposiciones que le daban a la AFI facultades autónomas de investigación criminal, estableciendo al mismo tiempo la imposibilidad de iniciar actividades sin autorización, reflejan la voluntad de trabajar en una iniciativa integral.

Respecto de las nuevas modificaciones que venimos a proponer por instrucción de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se mejora la redacción del texto para lograr la transparencia en el manejo de los fondos reservados de todos los organismos de inteligencia, dado que todas las partidas asignadas a los organismos de inteligencia serán públicas, siendo reservadas sólo aquellas que tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas.

Por otro lado, proponemos reducir el plazo para desclasificar los archivos de inteligencia de 25 a 15 años e incorporamos explícitamente la posibilidad de que toda persona física o jurídica con interés legítimo pueda solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información para dar mayor control ciudadano a las tareas de inteligencia del Estado, al mismo tiempo que se simplificó la categorización a “público”, “reservado” y “secreto”.

Uno de los puntos centrales de estas modificaciones es el establecimiento de un mecanismo de jubilación extraordinario para todo el personal que no cuente con la edad requerida, pero sí con los años como agentes para obtener beneficios de la jubilación ordinaria, resguardándose sus derechos –artículo 30 del proyecto–.

Por último, señalamos que si bien los argentinos hemos avanzado mucho en la construcción y en el fortalecimiento de nuestra democracia, somos conscientes de que aún existen trabas para la definitiva erradicación de grupos dentro de las instituciones que se han ubicado y actuado por encima y por fuera del sistema democrático.

Son reacios a los gobiernos populares y se resisten a la democratización del Estado, pero este gobierno nacional, que ha liderado los cambios estructurales más significativos de los últimos años, tiene sobrado respaldo popular para dar batalla a quienes quieren adueñarse de las instituciones del Estado argentino.

10

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Voy a pedir esta intervención para insertar motivos que justifican y apoyan el tratamiento, discusión y, en

definitiva, la aprobación del proyecto de ley que logrará transparentar e intensificar el espíritu democrático que se debe respirar en toda institución del Estado, incluso en la sensible y tan particular área de la información preventiva, la “inteligencia”.

El proyecto recibe la condición de acotar los plazos para desclasificar sus archivos y, a su vez, de ampliar la legitimación con base en el derecho de solicitar la información reservada. Esto nos pone, como país, a la vanguardia de la protección de los derechos civiles e implica un importante avance en ese sentido.

El manejo de fondos es materia en el proyecto de mejor y mayor control. El derecho a la intimidad tiene una cobertura particular, más allá de cualquier mera declaración, pues se dispone la posibilidad técnica de las escuchas telefónicas permitiéndolas –como siempre debió ser, como tiene que ser– sólo bajo disposición material y técnica de la Justicia.

Párrafo aparte merece la situación de este debate. No puede negarse, no puede sabotarse el recinto donde la Constitución ordena que deben pensarse las leyes y organizar recintos paralelos, pensados sólo para dar noticias, para intentar, vanamente, deslegitimar la mayoría, la votación libre de los legisladores. El debate se ofrece y disputa en este recinto.

11

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

De modo preliminar proponemos que en las comisiones bicamerales encargadas de las tareas de control parlamentario legalmente instituido sobre dependencias del Poder Ejecutivo nacional, la mayoría de sus integrantes pertenezcan a bloques políticos de oposición al partido de gobierno.

La realidad muestra que tales comisiones no han sido eficaces en su tarea, como es de público conocimiento. Los ejemplos, incluso los más recientes, abundan.

La causa más importante de esta anomalía radica en que dichas comisiones están integradas mayoritariamente por legisladores que responden al oficialismo gobernante; ello, de por sí, neutraliza la función de control parlamentario que es sustituida por una “solidaridad partidaria”. Como consecuencia de este fenómeno, el control que se pretende deviene inexistente.

El único modo de que las comisiones bicamerales de investigación y control cumplan adecuadamente con su función es que, a diferencia de lo que ahora sucede, en su integración la mayoría de sus integrantes pertenezca a la oposición.

Esta propuesta resulta de especial aplicación a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos

y Actividades de Inteligencia, por la naturaleza de sus funciones específicas y de la materia que es objeto de fiscalización de ella.

12

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PILATTI VERGARA

**Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
(O.D. N° 952/14)**

Señor presidente:

Como otras tantas veces, vamos a dar la talla sólo algunos de los representantes de nuestro federalismo, porque el resto cargará con la vergüenza de vaciar el debate político de políticas; con la torpeza de montarse en un escenario vulgar en el que se hacen propias las palabras ajenas; las palabras de los medios más temerarios e imprudentes.

Vergüenza es que un congresista le pegue a la democracia por la espalda y utilice un muerto para hacer política electoral. Sólo muy pocos dentro del arco opositor mantuvieron la coherencia y, sin embargo, todos –los que un día antes del debate en comisión salieron en la televisión y radio, refrendando la necesidad de dar la discusión y generar un nuevo marco– decidieron desdecirse y ausentarse.

Si éste es el camino que van a tomar en 2015, que devuelvan los haberes, porque el pueblo no los eligió para dar conferencias de prensa y maquillarse en TN. Son legisladores que desordenan, que no legislan. “La vista ciega”: el oxímoron de la política argentina.

Sus sofismas, que cuestionan los momentos históricos y los procesos temporales donde nosotros proponemos los cambios, son intelectualmente enanos; como si cuando ellos fueron gobierno hubiesen llevado adelante alguno, y me refiero a transformaciones positivas, no reducciones en las jubilaciones y pactos de impunidad para criminales de lesa humanidad.

Hablan del fiscal y de su misteriosa muerte, pero no de la pobre sustancia jurídica de su denuncia. Encima hay que escucharles decir que con esta ley queremos esconder una muerte. Cuando la orden proviene del año anterior, con el cambio de cúpula, el desplazamiento de agentes y la orden de redacción del primer atisbo de reforma. Como si la cadena de tergiversaciones y manipulación informativa no estuviera aleccionando a la ciudadanía de tal forma que el costo político que recae sobre el gobierno, sea el peor, de ser posible, funesto.

Esas corporaciones tienen el derecho y así lo hacen valer, respecto de su libertad de expresión. Nosotros también. Y nuestra vocación política y nuestro ejercicio del poder en democracia serán empleados para generar un nuevo cambio, que salde, al menos parcialmente, deudas de toda la democracia.

La nueva Agencia Federal de Inteligencia que busca crear este proyecto será, en primera instancia, un espacio subordinado a la política de derechos humanos. Será un organismo donde todos los funcionarios deberán ajustarse a la Ley de Ética Pública, prestando

declaraciones juradas sobre bienes patrimoniales; quienes, de obrar de manera ilegítima, vulnerando su mandato, tendrán ahora que enfrentar penas mucho más duras, de 3 a 10 años –lo que significaría al menos la mitad de la condena con prisión efectiva–.

Un nuevo régimen adecuará los niveles de reserva de identidad de este personal respecto de las tareas que desarrollen, “procurando el carácter público de los funcionarios” y restringiendo “excepcionalmente” las reservas.

Este cuerpo será conducido por autoridades que se designarán con acuerdo de esta Cámara. Muchos de los senadores que habitualmente se encuentran presentes aquí salieron a mentirle a la gente, diciéndoles que el objetivo era blindar impunidad nombrándole directores al gobierno entrante. Este proyecto le permite al presidente de nuestra democracia cesar en sus funciones al director general y al subdirector.

Y una de las cosas más importantes, una innovación necesaria: la transferencia al Ministerio Público de la Dirección de Observaciones Judiciales y de sus delegaciones, que será “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”. Para que nunca más tengamos un organismo de inteligencia con poderes extraordinarios sobre causas judiciales, ni la capacidad de espionaje político y de presión sobre el Poder Judicial.

Creemos que todas las leyes son perfectibles, sobre todo si una parte importante del sistema de representación se excusa del debate. Pero nuestro aporte no es para nada menor. En síntesis, este proyecto busca cristalizar lo que la presidenta manifestó en su ocasión: “Hay que defender a la Argentina, más que a un gobierno”.

13

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (O.D. N° 952/14)

Señor presidente:

Las actividades de inteligencia son de suyo opacas; están destinadas a nutrir de información a los decisiones políticos según lo establecen nuestras normas generales y las regulaciones específicas de la función. Es precisamente por su opacidad que los Estados corren el riesgo de que se forme una casta autorreferenciada que tiende a romper los límites que imponen las legislaciones e incluso el buen juicio. Esto sucede toda vez que los integrantes del aparato de espionaje se “autonomizan” de las autoridades a las que deben servir, dando lugar a formas inadmisibles de cuentapropismo y de lealtades contradictorias. Aunque también ocurre el uso impropio de los instrumentos por quienes deberían custodiar el bien común. Éstos son los riesgos endémicos de cualquier sistema de inteligencia en el mundo; nutridas bibliotecas teóricas y episódicas dan

cuenta de anticipaciones casi providenciales y de excesos lamentables.

Tal vez, la peor aproximación posible al problema que ahora enfrentamos es la hipocresía. Sabemos que las interrupciones recurrentes de nuestro sistema democrático introdujeron distorsiones en todos los ámbitos de la actividad pública; muchas de las cuales han sido corregidas, sobre todo durante esta administración, que hizo de los derechos humanos su signo distintivo.

Cuando el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín se vio obligado a purgar la SIDE de los elementos residuales del “proceso”, a quienes logró identificar como factores desestabilizantes del sistema democrático, creemos que la medida no alcanzó la plenitud deseada, ya que el suyo fue un gobierno que debió gestionar en un contexto nacional e internacional complejo. Sin embargo, a lo largo de los años, se conformó una estructura permeada por más intereses foráneos que los nacionales e, incluso, por intereses particulares.

Los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA en 1992 y 1994, respectivamente, cristalizaron la situación interna de los servicios de inteligencia, perpetuando sus deficiencias hasta el día de hoy. Las responsabilidades por el no esclarecimiento de aquellos graves atentados terroristas están distribuidas entre los sistemas político, judicial y de inteligencia de aquellos años. Aunque también hay razones para suponer inferencias internacionales más o menos manifiestas o más o menos ocultas.

Aún ignoramos quienes son los autores de ambos atentados, en una maraña de pistas falsas y de encubrimientos. La actual administración respaldó durante años las investigaciones judiciales de modo firme y con una gran cantidad de recursos e infraestructuras destinados al avance de las causas, tal como se había comprometido espontáneamente a hacerlo.

El Memorándum de Entendimiento con Irán de 2013, ratificado por la ley 26.843, sólo obedecía a la necesidad de esclarecer los hechos, frente a unas investigaciones judiciales definitivamente empantanadas. Por otra parte, la llamada “guerra de los servicios” había tomado estado público, en varios episodios lamentables, constelados de supuestas extorsiones, negocios turbios y ajustes de cuentas. ¿Qué decir de las declaraciones públicas exculpatorias de aquellos ex jefes del sistema de inteligencia que alegan haber controlado a la perfección el organismo? Son manifiestamente falsas; dado que la situación actual es el resultado de un largo proceso, del que ellos han sido parte en los años en que se fraguaron y cometieron los atentados explosivos y sus consiguientes despistajes.

Es en el marco general que acabo de describir someramente que se produce la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman. Sin embargo, la extrañeza es reducible a la sola circunstancia de su fallecimiento, no al contenido de las acusaciones formuladas en su alegato. Allí, las acusaciones contra la primera mandataria se desmintieron por el propio peso de su inconsistencia: nada hubo de intentos por levantar las alertas rojas de Interpol ni tampoco de intercambio de granos por pe-

tróleo, ni podía haberlo. Los medios hegemónicos son libres, es claro, de inventar —a posteriori y por fuera de los procesos judiciales— otras explicaciones más enrevesadas y lo hacen. Es gratis.

La decisión tomada por el gobierno de liberar del secreto a aquellos agentes que podrían aportar su testimonio en las causas judiciales es correcta y —todos lo sabemos— también valiente. Sobre la pertinencia de reformular el sistema de inteligencia no hay dudas; son demasiados los hechos que lo justifican. Puestos a objetar, algunos objetan el criterio de oportunidad y afirman que debió hacerse antes. Son los mismos que no lo hicieron en su momento, o porque carecieron de valentía o porque concordaron con el propósito de dirigir la persecución penal a un laberinto sin salida.

Sin embargo, es la propia muerte del fiscal el hecho que evidencia de manera abrupta el maridaje espurio entre algunos elementos del sistema judicial y el de inteligencia, una vez decididos los cambios en la plantilla de inteligencia. Eso es lo que me parece verdaderamente extraño, y es también aquello que la creación de la Agencia Federal de Inteligencia viene a corregir. Otros países afrontaron el problema que provocan los servicios desviados de su matriz de sentido y lo han resuelto de un modo similar al que pretendemos con esta iniciativa.

La información para la seguridad, en un sistema democrático, requiere una adaptación sucesiva a los cambiantes desafíos que implica un mundo crecientemente hostil y conflictivo. Competencias que hasta hace poco eran exclusivas de los Estados se privatizan, tales como ejércitos y servicios de inteligencia, en sistemas paraestatales e, incluso, “desterritorializados”. Conocemos nuevas formas de guerra, nuevos tipos de golpes de Estado, fenómenos que ahora se denominan respectivamente guerras asimétricas o pluridimensionales y golpes blandos. Sí. El campo de batalla es la mente de las poblaciones para que acepten ir mansamente adonde no les conviene. Son nuevas amenazas con renovadas tecnologías para el prosaico propósito de coloniaje. Las distinciones tajantes entre problemas locales y problemas internacionales, hoy, no pueden hacerse, y las viejas estructuras informativas, con modelos heredados de la Guerra Fría bipolar, deben desaparecer porque son inadecuadas para nuestro contexto.

Es por las razones expuestas que acompaño con mi voto afirmativo este proyecto de ley de creación de la Agencia Federal de Inteligencia.

14

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (O.D. N° 952/14)

Señor presidente:

Por medio de la presente quiero expresar por escrito mi posición favorable respecto de la transformación de la Secretaría de Inteligencia del país.

Nuestro compromiso con la democratización de todos los sectores de la sociedad es, sin duda, uno indeclinable. Desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al poder, ha sido una decida política impulsar la justicia para la reparación de las violaciones de los derechos humanos. En el mismo sentido, hemos trabajado fuertemente para modificar las instituciones con resabios autoritarios o poco transparentes.

En más de 30 años de democracia, hemos impulsado cambios que han redundado en el mejoramiento de las instituciones, acercándolas a los estándares modernos de una república democrática como la nuestra.

En este sentido, reconocemos que la labor no está ni cerca de concluirse. Sino más bien, sabemos que aún falta avanzar decididamente sobre algunas áreas que son poco permeables al control civil de la política. Por eso estamos acá dando el debate. Porque creo fervientemente que los servicios de inteligencia aún mantienen conductas espurias, hay que transformar decididamente su estructura. Ajenos al cumplimiento de muchas normas, muchos espías han “autonomizado” su función dejando de responder a las autoridades superiores.

Pero aún por sospecha, por motivación propia, algunos agentes podrían haber tendido redes de contacto con servicios de inteligencia de potencias extranjeras sin ningún tipo de control y auditoría. Así, estas agencias podrían permear en la política local por esta vía sumamente irregular. En el mismo sentido, muchos agentes podrían haber tejido lazos poco regulados con jueces y fiscales, socavando la independencia del Poder Judicial. Por ello, una de las nuevas propuestas de la ley que estamos discutiendo prevé que ahora sólo puedan establecer nexos con el exterior las dos autoridades superiores, designadas por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado —elemento también novedoso—.

De la misma manera, y en aras de aumentar la transparencia del funcionamiento de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, se reduce el secreto de los expedientes de 25 a 15 años y se establecen solamente tres niveles de clasificación de los documentos.

Asimismo, se mantiene tajante la diferencia entre seguridad y defensa consagrada en el acervo legislativo nacional. Esto significa que la AFI estará enteramente abocada al combate de los delitos federales complejos como el terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y todo aquel que atente contra el orden democrático o que busque corromper el orden institucional local. En este sentido, se establece que todas las operaciones de inteligencia deben contar con la autorización correspondiente, eliminándose la posibilidad de iniciar tareas sin la aprobación del superior correspondiente. De la misma manera, ahora se tipifican delitos específicos para el mal desempeño de los funcionarios de inteligencia, teniendo presente la sensibilidad de la información que manipulan.

Se establece la transferencia a la órbita de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público del Sistema de Observaciones Judiciales, que no es

otra cosa que el sistema de escuchas que ordenan los jueces en el marco de las investigaciones judiciales. Esto requiere que todo juez o fiscal que desee pedir una escucha deberá dirigirse a la Procuración General de la Nación del Ministerio Público. Ahora bien, ¿por qué el Ministerio Público? Por una simple razón: es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. Y a su vez, en la Constitución Nacional se le asigna a dicho ministerio la responsabilidad de velar por la seguridad de la Nación, de sus habitantes y sobre la legalidad de los actos. Este punto es esencial a la hora de pensar el funcionamiento de la AFI. Más allá de las individualidades, es fundamental correr el eje de la discusión de los nombres que conducen y crear en el funcionamiento correcto, democrático y legítimo de las instituciones. Finalmente, y contrariamente a muchas propuestas de la oposición, este mecanismo para autorizar escuchas no puede ser ubicado en la órbita de la Corte Suprema de Justicia por cuanto la máxima instancia judicial ha ratificado a partir de jurisprudencia que no puede asumir otras funciones que las que se consagran en la Constitución Nacional.

Del mismo modo, para aumentar la transparencia y el control político de los servicios secretos, el proyecto de ley aprobado empodera a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia con mejores herramientas para

velar por el efectivo seguimiento de las actividades y del presupuesto ejecutado.

Sin dudas, el esfuerzo realizado tiene como noble propósito mejorar el ejercicio de las actividades de inteligencia, transparentando su función y bregando porque todas sus dependencias se ajusten estrictamente a la ley, la protección de datos personales y la Constitución Nacional.

Bien entrado el siglo XXI, estamos respondiendo de manera contundente a las islas autoritarias que aún permanecen en la sociedad. Nuestro trabajo ha buscado dar la vuelta de página de un organismo oscuro y poco responsable para adecuar su funcionamiento a los tiempos y a las necesidades que corren. En este sentido, y para finalizar, lamento la falta de disposición de la oposición para contribuir al debate, para enriquecerlo con propuestas. Contrariamente a lo que dicen en los medios, este Congreso ha sido más que permeable al momento de la discusión de las leyes en las comisiones. La mayoría de las leyes que hemos sancionado han sufrido modificaciones respecto del proyecto original enviado por el Ejecutivo, por lo que no se entiende la actitud poco colaborativa. A pesar de ello, sí se han receptado observaciones realizadas por particulares y por organizaciones de la sociedad civil. Más aún, consideramos que dichas propuestas redundan en un mejoramiento sustantivo de la iniciativa, por lo que las hemos introducido en la versión definitiva.

*H. Cámara de Diputados
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria*